UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO



Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Carrera Profesional de Derecho y Ciencias Políticas



TESIS

PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

DERECHOS CONSTITUCIONALES APLICABLES PARA LA DESPENALIZACIÓN DEL HOMICIDIO PIADOSO EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO.

POR

Darwin Adams Arteaga Salazar

Roxana Korali Liñán Velásquez

ASESOR

Abg. José Luis Coba Uriarte

Cajamarca - Perú

Septiembre – 2022

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO



Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Carrera Profesional de Derecho y Ciencias Políticas



TESIS

PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

DERECHOS CONSTITUCIONALES APLICABLES PARA LA DESPENALIZACIÓN DEL HOMICIDIO PIADOSO EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO.

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para optar el Título

Profesional de Abogado

Bach. Darwin Adams Arteaga Salazar

Bach. Roxana Korali Liñán Velásquez

Asesor: Abg. José Luis Coba Uriarte

Cajamarca - Perú

Septiembre – 2022

COPYRIGHT © 2021 DE

Darwin Adams Arteaga Salazar

Roxana Korali Liñán Velásquez

Todos los derechos reservados

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

APROBACIÓN DE TESIS PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL

NOMBRE DE LA TESIS

Presidente:	
Secretario:	
Asesor:	

AGRADECIMIENTO

Agradecer a nuestros padres, que siempre han estado cuando los hemos necesitado, en los buenos y malo momentos, el logro también es de ellos.

Por ultimo dar gracias a todas las personas que nos animaron en este largo camino, gracias por su paciencia y su dedicación.

Los autores

DEDICATORIA

Esta tesis está dedicada a:

A Dios quien ha sido nuestro guía, fortaleza y su mano de fidelidad y amor han estado con nosotros hasta el día de hoy.

A nuestros padres quienes con su amor, paciencia y esfuerzo nos han permitido llegar a cumplir hoy un sueño más, gracias por inculcarnos el ejemplo de esfuerzo y valentía, de no temer las adversidades porque Dios está con nosotros siempre.

A toda nuestra familia porque con sus oraciones, consejos y palabras de aliento hicieron de nosotros unas mejores personas y de una u otra forma nos acompañan en todos nuestros sueños y metas.

Los autores

TABLA DE CONTENIDO

AGRADEC	IMIENTO	5
DEDICATO	PRIA	6
	CONTENIDO	
INTRODUC	CCIÓN	11
CAPÍTULO	I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
1.1	DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA	13
1.2	DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	17
1.3	OBJETIVOS	17
1.4	JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA	17
CAPÍTULO	II: MARCO TERÓRICO	19
2.1	Antecedentes teóricos	19
2.1.1	Teoría de los principios que sustentan nuestra investigación	19
2.2	Marco histórico	
2.2.1	p p p p g g s	
2.2.2		
2.2.3	Sujetos del homicidio piadoso o eutanasia	24
2.2.4	Clases de la eutanasia	24
2.2.5	Enfermedad terminal	26
2.3	TEORÍAS O ENFOQUES TEÓRICOS DEL DERECHO	
2.3.1	Teoría del bien jurídico protegido	28
2.3.2	r - r	
2.3.3	Principio de la autonomía de la voluntad	29
2.4	MARCO CONCEPTUAL	30
2.4.1	Eutanasia	30
2.4.2	Enfermedad terminal	31
2.4.3	Principio de la autonomía de la voluntad	31
2.4.4	Principio de dignidad humana	32
2.5	HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN	32
CAPITULO	III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ¡EI	RROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
3.1	TIPO DE INVESTIGACIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO
3.2	DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
3.3	ÁREA DE INVESTIGACIÓN	¡Error! Marcador no definido.
3.4	DIMENSIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL	¡Error! Marcador no definido.
3.5	UNIDAD DE ANÁLISIS, POBLACIÓN Y MUESTRA	¡Error! Marcador no definido.
3.6	MÉTODOS	jError! Marcador no definido.
3.6.1	La hermenéutica jurídica	¡Error! Marcador no definido.
3.7	TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
3.7.1	El análisis de contenido	¡Error! Marcador no definido.
3.7.2	Instrumentos	¡Error! Marcador no definido.
373	Limitaciones de la investigación	iFrror! Marcador no definido

	IV: DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS EN LA PINIBILIDAD DEL HOMICIDIO	
4.1 F	Punibilidad y pro despenalización del homicidio piadoso o eutanasia en la legislación interi	NACIONAL397
4.2		397
4.2.1	En la legislación mexicana:	398
4.2.2	En la legislación de Canadá	409
4.2.3	La legislación Española:	4240
4.2.4	En la legislación Holandesa:	442
4.2.5	En la legislación Belga:	464
4.3 F	Fundamentos jurídicos adoptados por el Tribunal Constitucional en el caso Ana Estrada l	JGARTE, PARA
DESPENALI	IZAR EL HOMICIDIO PIADOSO EN ESE EXCLUSIVO CASO	465
4.3.1	¿Cuál es la situación administrativa del profesional de la salud que ejecutara la euto	ınasia en el
caso n	más relevante peruano Ana Estrada Ugarte?	507
4.4	DESARROLLAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES PROPUESTOS COMO FUNDAMENTOS PARA LA DESPENA	ALIZACIÓN DEL
HOMICIDIO	O PIADOSO EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO, CON ALCANCE UNIVERSAL EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL	519
4.4.1	El Derecho a una Vida Digna	519
4.4.2	Derecho a morir con dignidad	51
4.4.3 E	Derecho a la dignidad	52
4.4.4 D	Derecho a no ser torturado ni sometido a tratos crueles e inhumanos	53
4.4.5 A	Autonomía de la voluntad y libertad de decisión	574
CONCLUSIO	ONES	618
RECOMEND	DACIÓNES	629
REFERENCIA	AS BIBLIOGRÁFICAS	6360
ANEXOS		6663
8.1	Anexo 01: Operacionalización de Variables	
8.1.1	Independiente: DERECHOS CONSTITUCIONALES APLICABLES PAR LA IMPUNIBILIDAD	
	ICIDIO PIADOSOjError! Marcadol	-
8.1.2	- op on an one of the original	! Marcador no
defini	id o. 5	
8.2 A	Anexo 02: Demanda de Acción de Amparo	687

RESUMEN

En la presente tesis denominada: "Derechos constitucionales aplicables para la

despenalización del homicidio piadoso en el código penal peruano", surge a partir de la

observación y análisis de los fundamentos jurídicos relevantes analizados por el tribunal

constitucional en el caso Ana Estrada Ugarte y las legislaciones internaciones en las cuales se

ha logrado la despenalización del homicidio piadoso, también llamada muerte asistida,

muerte digna o eutanasia.

Teniendo como interrogante surgida: ¿Qué derechos constitucionales son vulnerados

ante la punibilidad del homicidio piadoso en el Perú?; pues en la actualidad la punibilidad del

artículo 112° del código penal peruano está vigente con excepción del caso Ana Estrada

Ugarte, hecho que nos parece discriminatorio en referencia a todas las personas que están en

la misma situación pero por falta de recursos económicos para iniciar una lucha jurídica y así

puedan conseguir la inaplicación del artículo citado.

Por ello, la presente tesis tiene como objetivo principal Determinar qué derechos

constitucionales vienen siendo vulnerados ante la punibilidad del homicidio piadoso en el

código penal peruano. En consecuencia, ésta investigación cuenta con IV capítulos, los

mismos que serán desarrollados desde un enfoque cualitativo y diseño no experimental.

Palabras claves: homicidio piadoso, derechos fundamentales, eutanasia, despenalización.

9

ABSTRACT

In the present thesis called: "Constitutional rights applicable to the decriminalization of pious

homicide in the Peruvian penal code", it arises from the observation and analysis of the

relevant legal bases analyzed by the constitutional court in the Ana Estrada Ugarte case and

the laws internments in which pious homicide has been decriminalize ed, also called assisted

death, dignified death or euthanasia.

Having as a question arisen: What constitutional rights are violated before the

punishment of pious homicide in Peru?; because at present the punishableness of article 112

of the Peruvian penal code is in force with the exception of the Ana Estrada Ugarte case, a

fact that seems discriminatory in reference to all the people who are in the same situation but

due to lack of economic resources to initiate a legal fight and thus they can obtain the

inapplication of the cited article.

Therefore, the main objective of this thesis is to determine which constitutional rights

have been violated in the face of the punishment of pious homicide in the Peruvian penal

code. Consequently, this research has IV chapters, which will be developed from a qualitative

approach and non-experimental design.

Keywords: pious murder, fundamental rights, euthanasia, decriminalization.

10

INTRODUCCIÓN

El homicidio piadoso es una figura jurídica tipificada en el artículo 112° del código penal peruano, sin embargo, al estudiar el referido artículo encontramos tres requisitos que en lugar de servir de elemento de tipificación deberán incidir como requisitos de procedibilidad para despenalizar el homicidio piadoso, ello aplicando y ponderando los derechos inherentes a toda persona como son el derecho a la vida digna, derecho a la autonomía de la voluntad y libertad de decisión.

Como ya hemos dicho el homicidio piadoso que ejecuta un profesional de la salud es penada en esta legislación, sin embargo, en el último caso Ana Estrada Ugarte y en las legislaciones internacionales se analizan tres derechos fundamentales descritos en el párrafo anterior mismos que sirven de fundamento para implicar el artículo 112° del código penal peruano (caso exclusivo Ana Estrada) y despenalizar el homicidio piadoso (en toda la legislación) de países europeos y sudamericanos.

Por esta razón en el trabajo de investigación se formó la siguiente pregunta: ¿Qué derechos constitucionales son vulnerados ante la punibilidad del homicidio piadoso en el Perú?; por lo que la presente investigación tiene como objetivo general: determinar qué derechos constitucionales vienen siendo vulnerados ante la punibilidad del homicidio piadoso en el código penal peruano y como objetivos específicos: analizar las teorías del derecho a la dignidad humana, la autonomía de la voluntad y la libertad de decisión que servirán para fundamentar la legalización del homicidio piadoso, en el ordenamiento penal peruano e internacional; y analizar los fundamentos resaltantes emitidos por el Tribunal Constitucional respecto a la inaplicación del artículo 112° del código penal para el caso Ana Estrada Ugarte, y si es posible la derogación del citado artículo, identificando.

A razón de ello, la presente investigación se desarrolla IV capítulos que se detallan a continuación:

En el capítulo I se plasman el planteamiento del problema, la formulación del problema, objetivos, la hipótesis, una descripción teórica de las variables.

En el capítulo II se describen y sustenta el marco teórico, teorías que sustentan nuestra investigación, así como doctrina y jurisprudencia nacional e internacional

En el capítulo III se establecen los procedimientos metodológicos, el tipo y nivel de investigación, la operacionalización de variables; así como los instrumentos y técnicas de investigación utilizados.

En el capítulo IV se aborda los derechos fundamentales que proponemos como fundamentos jurídicos para despenalizar el homicidio piadoso en la legislación nacional.

Finalmente, se redactan las conclusiones y recomendaciones, además se indican las referencias bibliográficas y se anexan todos los documentos utilizados en el presente trabajo de investigación.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la realidad problemática

Visto el último precedente no vinculante del caso Ana Estrada Ugarte, recaído en el expediente N° 00573-2020-0-1801-JR-DC-11 (Acción de Amparo), ante el pedido que hace la recurrente con la finalidad principal que se le conceda la inaplicación del artículo 112° del Colegio Penal vigente, mismo que regula: "El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años."

Desde nuestra perspectiva de análisis, podemos identificar que la petición legal antes citada se formuló por cuanto en el derecho penal en la esencia del bien jurídico protegido, existe una discusión respecto a la procedencia de una ponderación de derechos, concerniente a qué bienes jurídicos deben ser protegidos penalmente, dentro de ello están el derecho a la vida que conlleva el inicio de la misma y el derecho de una muerte digna que no es otra cosa que el fin de la vida humana; en ese sentido, lo que más nos importa para el fin de ésta investigación es el consentimiento libre de una persona sobre poner fin de su dolores intensos que traería como consecuencia el fin de su existencia.

Enfocándonos en los presupuestos que el propio código penal ha establecido y que contradictoriamente pena a quien ejecuta la eutanasia cuando concurren estos presupuestos, que son los siguientes: a) enfermedad incurable; b) dolores intolerables y que ésta persona este, c) consiente y lo solicite de manera expresa. En consecuencia, vemos que el legislador, determina subjetivamente el sufrimiento e incurabilidad de una enfermedad de una persona, y en la que la ejecución de la eutanasia u homicidio piadoso es la única forma de poner fin a sus intensos dolores, y así salvaguardar su derecho a una vida y muerte digna.

En este contexto según lo referido por el doctrinario argentino, Donna E. (1999) quien señala que: "(...) Se ha dicho, y se entiende, que la vida humana es un proceso dinámico, y por ende no es posible afirmar la existencia de un punto exacto de cuándo comienza la vida humana. El problema es determinar desde cuándo corre la protección dada por el Derecho Penal al ser humano, en el delito de homicidio, no es menor"

Aunado a ello, el autor analizado Donna. E. (1999) señala: "(...) El segundo problema que se plantea tanto desde la dogmática penal como desde un punto de vista legal es el del final de la vida".

Si bien es cierto, y según las palabras de Donna y las infinidades de posiciones existentes en cuanto al comienzo de vida humana y el fin de la misma, no es un tema claro y mucho menos fácil, ya que abre las puertas a una infinidad de discusiones y posiciones jurídicas, religiosas y sociales sobre la vida y la muerte, razón por la cual se aborda un tema principal desde el punto de vista jurídico, como es el fin de la vida humana y hacerlo desde una perspectiva mucho más amplia, plural e incluyente.

Por consiguiente, nuestra constitución política ha garantizado como primer derecho constitucional la dignidad humana: "Art. 1°, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado", de ello, podemos referirnos al derecho constitucional, eje de las demás materias como la del derecho penal o administrativo, como aquella rama reguladora en prioridad de la vida social de los individuos y de esa manera hacer el uso del mismo según el interés personal, siempre y cuando esté de por medio la contravención a la dignidad humana, presupuesto único e intrínseco de toda persona para su desarrollo como tal.

A razón de ello, desde nuestra perspectiva jurídica, el principio de la dignidad humana debe prevalecer ante una enfermedad terminal, además, atendiendo a la petición de quien la reclama para cesar sus insoportables dolores, ya que el homicidio piadoso o

también llamado eutanasia solo debe usarse en fase terminal cuando la ciencia médica haya desahuciado al paciente o se determine por una junta médica la incurabilidad de la enfermedad; el médico, libre de cualquier sanción penal y administrativa realice la eutanasia siempre y cuando el paciente lo haya manifestado y se encuentre consiente dentro de sus facultades según lo establecido por el código civil en la materia de capacidades jurídicas.

En comentario al párrafo anterior, y tomando a la doctrina se debe entender que:

Toda persona es libre de hacer su voluntad mientras esté en lo establecido por el derecho, pero afortunadamente ya se han establecido las bases para que el ciudadano pueda manifestar su voluntad en una forma libre de lo que se debe hacer con él cuando en un momento determinado se encontrará con una enfermedad terminal de carácter irreversible, y elegir el tipo de tratamiento que le deben o no aplicar Ibarra Tamez (2011, p. 274).

Entonces, la eutanasia debe proceder a la plena manifestación de voluntad de la persona que padece una enfermedad terminal que al poco tiempo le causará la muerte. El derecho nacional es muy conservador a la vida, porque ha tomado como principal fundamento la protección a la vida del ser humano.

Antes una enfermedad incurable, el Estado peruano ha dejado aislado el respeto de la dignidad de la persona humana, prefiriendo dejar que una persona padezca con esa enfermedad incurable hasta que muera, ante ello, nuestra sociedad no debe tolerar. Si la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado (art. 1° de la Constitución Política), entonces la eutanasia debe despenalizarse.

Aunado a esto, podemos referimos que el derecho a morir como protección de la dignidad humana es un derecho más profundo a cada persona, resultando un derecho humano, que se define según Massini Correas:

Derechos Subjetivos Naturales, denominados comúnmente "Derechos Humanos"; en este caso, se trata de facultades jurídicas cuyo título radical se encuentra en la condición de persona dotada de una especial dignidad que corresponde a los sujetos titulares de esos derechos-facultades. (2017, p. 64).

Es cierto que la dignidad humana es considerada como una atribución esencial hacia la persona humana; y en ese sentido la persona tiene el derecho de elegir lo que éste cree que es correcto para sí mismo.

El Estado ha considerado como un delito al homicidio piadoso (eutanasia) enfocándose a una enfermedad terminal, tipificando de ésta manera "el que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años" (Art. 112° del C.P.).

En comentario al párrafo anterior no debe ser finalidad del derecho penal la protección de la vida de aquellas personas en contra de su voluntad, así mismo no debe ser el instrumento jurídico adecuado para sancionar o penalizar a quienes opte a realizar la eutanasia a solicitud del que lo padece.

Por otro lado, el Estado no ha medido las consecuencias que acarrea una enfermedad terminal, no ha medido que puede afectar el bienestar psicológico del que lo padece o de sus familiares. Estamos de acuerdo que la enfermedad terminal ocasiona "detrimento de la dignidad de la persona y el comienzo de un proceso de muerte dolorosa y traumática tanto para el paciente involucrado como para sus familiares" Campos y Seas (2016, p. 97).

1.2 Definición del problema

¿Qué derechos constitucionales son vulnerados ante la punibilidad del homicidio piadoso en el Perú?

1.3 Objetivos

a. Objetivo General

Determinar qué derechos constitucionales vienen siendo vulnerados ante la punibilidad del homicidio piadoso en el código penal peruano.

b. Objetivos específicos

- Analizar las teorías del derecho a la dignidad humana, la autonomía de la voluntad y la libertad de decisión que servirán para fundamentar la legalización del homicidio piadoso, en el ordenamiento penal peruano e internacional.
- Analizar los fundamentos resaltantes emitidos por el Tribunal Constitucional respecto a la inaplicación del artículo 112° del código penal para el caso Ana Estrada Ugarte.
- Determinar y si es posible la derogación del artículo 112° del código penal,
 identificando las consecuencias de las responsabilidades administrativas a quien
 ejecutó el homicidio piadoso tras infringir el código de ética y deontología.

1.4 Justificación e importancia

La importancia de nuestra investigación recae en que se va a determinar la prevalencia o ponderación de derechos respecto al deber de proteger, garantizar y aplicar tres derechos constitucionales y fundamentales reconocidos expresamente por la Constitución Política del Perú y tratados internacionales con la finalidad plantear una legitimación la ejecución del homicidio piadoso, no solo en el caso de Ana Estrada Ugarte; sino en las diferentes casuísticas que afrontan pacientes y profesionales de la salud con causas semejantes o iguales, es decir, (enfermedad incurable, dolores intolerables y solicitud expresa y consciente).

En este contexto, es importante realizar éste estudio para tratar de reformular el criterio legislativo y el gran vacío del conocimiento en el campo de la eutanasia u homicidio piadoso, ya que nuestro Estado peruano no ha definido cuál es el significado correcto de la misma; es por eso, que los legisladores han dejado de lado los principios de la dignidad humana y la autonomía de la voluntad como principales fundamentos para su despenalización del artículo 112° del Código Penal.

CAPÍTULO II: MARCO TERÓRICO

2.1 Antecedentes teóricos

Según Ugaz, C. y Martínez, C., (2016), en su tesis denominada: "La Eutanasia en el Perú y su regulación jurídica como alternativa a una muerte digna" citado en Escobar Montes Concluyeron que permite conocer el alcance de la práctica de la Eutanasia en el Perú, como una opción de muerte digna en los pacientes que sufren enfermedades terminales, de ser así determinar su viabilidad dentro de las normativas existente y considerarla una opción legal. (2018, p.17).

Recogiendo lo determinado por Elguera, (2016), en su tesis: "Derecho a morir dignamente como causal que justifica despenalizar la eutanasia activa para enfermos en situación terminal en el Perú". Citado por Escobar Montes, "la eutanasia vendría a ser un derecho el cual tiene cada persona que esté en un estado de enfermedad terminal, además que esa persona este padeciendo de sufrimientos extremos generados por dicha enfermedad terminal (...)" (2018, p.18)

Así mismo como segunda conclusión se estableció que: "la eutanasia es un derecho que tiene sus fundamentos en el derecho que tiene cada ciudadano en su dignidad humana, siendo entonces la dignidad un elemento determinante en sus decisiones y sus acciones" (2018, p.18).

2.1.1 Teoría de los principios que sustentan nuestra investigación

2.1.1.1 Teoría del principio de dignidad humana

Para la doctrina internacional se ha definido la dignidad humana, como:

"La dignidad supone un espacio indispensable para que la persona pueda desarrollarse con autonomía, este desarrollo consiste en conservar o ampliar las relaciones con los otros miembros de la comunidad, la esfera de autonomía implica el reconocimiento y el respeto de la persona como tal y, en consecuencia, de su dignidad". (Boris, 2008, p.30).

En esa línea de ideas:

Desde un análisis objetivo, es el derecho Constitucional en específico nuestra carta magna reconoce el principio de la dignidad humana como derecho de primer orden, pues basta con remitirnos al artículo 1° del citado texto normativo para encontrar a este derecho como fin supremo de protección del Estado hacia el individuo y la sociedad.

Siendo el referido derecho en estudio, uno de los que cuenta con soberanía popular que viene a hacer el soporte de todo el sistema constitucional de derechos y libertades inherentes a la persona desde su nacimiento hasta el final de su existencia.

Por último, respecto a este principio el autor precisa que:

(...) "la legitimidad, en su garantía sociológica de eficacia y en su parámetro formal de respeto a los procedimientos jurídicos establecidos, los Derechos fundamentales constituyen la principal garantía que tienen los ciudadanos de que el sistema social y político". (Boris, 2008, p. 38).

2.1.1.2 Teoría del principio de la autonomía de la voluntad

Antes de analizar esta teoría debemos precisar qué derecho objetivo no define claramente este principio y derecho, por ello; analizando algunas teorías el estudio de la autonomía de la voluntad se relaciona al derecho subjetivo, tales así que el derecho subjetivo es el que permite que el individuo manifieste su voluntad para lograr hacer, dar u omitir algo.

La descripción se basará en los distintos ámbitos en los que el individuo puede realizar o hacer valer estos derechos y además reconocidos por el ordenamiento jurídico.

En ese sentido para los autores Flores Villacres, & Padilla Yumbato, señalan que: "citando a Kant, quien vinculó la idea de autonomía a la idea de la racionalidad, en el sentido de auto legislación" (2015, p.60).

A esta definición citada agregamos que la autonomía de la voluntad es una forma de auto legislarse ante una situación jurídica que cada persona crea a bien tutelar bajo la libertad de decisión y autonomía propia.

Sin embargo, creemos que la denominada auto legislación podría resultar arbitraria para ciertas conductas tipificadas por el ordenamiento penal en consecuencia son considerados delitos. Ahora bien, qué sucede en el caso específico de la figura legal del homicidio piadoso en el cual se restringe notoriamente y sin fundamento alguno, el derecho de la libertada de autonomía de decisión en la continuidad de la vida humana personal de sujeto activo, que reúne ciertas causales para adoptar tal decisión (enfermedad incurable, dolores insoportables, capacidad y pedido expreso).

A manera de conclusión, citamos lo manifestado por Flores Salgado que expresó: "En la voluntad anticipada para decidir sobre el tratamiento o la suspensión del mismo, es importante considerar la manifestación del consentimiento, pues lo que se pretende es evitar el sufrimiento y la obstinación médica para prolongarlos" (2005, p.172). ello, nos conlleva a establecer que la voluntad del paciente a ser sometido o no a tratamientos dolorosos previo al sometimiento de la eutanasia o alguna complicación futura como estado de coma, debe ser considerado dentro de los márgenes legales permitidos para adoptar la decisión expresa de no ser torturado medicamente por una solución que nunca llegara a su enfermedad y así decidir en sí mismo el derecho a morir sin torturas médicas o dolores irresistibles que no hacen otra cosa que llevar una vida indigna.

2.2 Marco histórico

2.2.1 Homicidio piadoso o eutanasia, nociones generales

Una de las definiciones más precisas que hemos encontrado es lo establecido por Mendoza Cruz:

El término "eutanasia" parece haber variado y desde una primera aproximación podemos señalar que existe un cierto consenso en cuanto a que engloba el comportamiento que tiene por finalidad causar la muerte de un paciente, generalmente terminal, a petición de éste y con la intervención de un profesional de la medicina. (2014, p.21)

Así mismo citamos a lo concluido por los autores (Flores Villacres & Padilla Yumbato 2015, p.14-15):

Desde hace siglos el homicidio piadoso o la Eutanasia es el centro de inagotables polémicas y discusiones en campo de la política, la medicina, la religión, el derecho y particularmente en el derecho penal. Hoy como antes la división es muy marcada entre quienes están a favor de acortar la vida de un enfermo incurable y de aquellos que pretenden prolongarla hasta donde la naturaleza le permita.

Etimológicamente el término eutanasia significa "buena muerte". Deriva de los vocablos griegos "Eu" que significa bueno y de "Thanatos" que significa muerte. Posteriormente han surgido otros significados como "muerte rápida y sin tormentos", "muerte tranquila y fácil", "muerte misericordiosa.

2.2.2 Concepto

Para Escobar Montes, la eutanasia es:

En un sentido etimológico primario euthanatos proviene de los vocablos griegos eu (bueno/a) y thanatos (muerte). Definida por primera vez en el siglo V antes de cristo, en una obra denominada Crátinos, teniendo como significado muerte tranquila o muerte sin sufrimiento. Desde esa perspectiva, no reflejada la intención de propiciar la muerte, sino más bien la facilitación de la transición de la vida a la muerte, con la salvedad que se suprimía de forma total el dolor que está acompaña. (2018, p.52)

De igual Flores Villacres & Padilla Yumbato, refieren que:

La Eutanasia se entiende la ayuda prestada a una persona gravemente enferma, por su deseo, o por lo menos en atención a su voluntad presunta, para posibilitarle una muerte humanamente digna en correspondencia con sus propias convicciones. (2015, p.47).

En ese sentido según lo analizado por las definiciones arribadas por los citados autores, vemos que la eutanasia u homicidio piadoso es un deseo de aquella persona que haciendo uso de su autonomía de voluntad, libertad de decisión plantea la ejecución de esta figura Jurídica que se puede definir como una muerte digna.

Siempre y cuando se reúnan diferentes supuestos como el deseo y la convicción de morir para poner fin a aquellos dolores irresistibles incurables que hacen de la vida humana indigna desde el punto de la salud que se realiza a solicitud del que lo padece para terminar sus intensos o graves dolores.

2.2.3 Sujetos del homicidio piadoso o eutanasia

Mendoza Cruz (2014, p.21-22), nos brinda una pequeña ilustración resumida en los sujetos que recae la acción, y consecuencia jurídica de aquellos autores implicados en la muerte piadosa médica.

- a. Sujeto Activo: Es quien realiza la acción que tiene por resultado la muerte del paciente. Sobre la calidad de aquél existe entre los especialistas la exigencia de que se trate obligatoriamente de un médico por razones de seguridad jurídica. (...)
- b. Sujeto Pasivo: Mayoritariamente que sea un paciente terminal el que solicita la acción eutanásica para acabar con sus dolores. Si bien este concepto ha sido desarrollado más arriba, entendemos aquí por enfermo terminal a "aquella persona que, como consecuencia de una lesión o enfermedad, padece según los actuales conocimientos médicos, una afección incurable. (...).

2.2.4 Clases de la eutanasia

Según (Flores Villacres & Padilla Yumbato, 2015, pp.23-26) en su tesis señala una diversidad de clases de eutanasia, concordamos mucho con ello, porque diversos autores también manifiestan lo mismo. Entonces veamos cuales son:

a. Por su finalidad

 Eutanasia piadosa: Es la que se practica por un sentimiento de piedad hacia el sujeto que está soportando graves sufrimientos sin ninguna esperanza, con el fin de aliviarlo.

b. Por sus medios:

- Eutanasia Activa: Es aquella consistente en provocar la muerte del paciente, cuando éste así lo solicite, a través de acciones positivas, mediante un hacer de agente. Puede ser a su vez: Directa, cuando se refiere a la muerte ocasionada de modo directo e inmediato, mediante actos ejecutivos que suprimen la vida del enfermo con la finalidad de poner fin a su sufrimiento.
- Eutanasia Pasiva: Es aquella en que el agente deja de hacer algo que permita proseguir con la vida del enfermo, el acto consiste en una omisión.

c. Por su intención:

- Eutanasia Directa. Se caracteriza por la intención clara y consciente del sujeto activo de producir el óbito al que sufre un mal incurable a través de medios certeros como, por ejemplo, inyectándole una dosis mortal de morfina.
- Eutanasia Indirecta o lenitiva: Implica la administración de medicamentos o la aplicación de técnicas al enfermo terminal que soporta una situación especialmente dolorosa, con el fin primordial de mitigar sus sufrimientos, aun sabiendo que, como efecto secundario, es ineludible el acortamiento, no la terminación de su vida.

d. Por su voluntad

• Eutanasia Voluntaria: Es la que solicita el paciente que adolece de un mal incurable en pleno uso de sus facultades psicológicas de manera expresa, consciente, y reiterada, ya sea en forma verbal o escrita.

- Eutanasia no Voluntaria: Se lleva a cabo cuando se procura la muerte a un ser humano que no es capaz de entender la opción entre la vida y la muerte, por ejemplo, en las situaciones en las que existe una pérdida total e irreversible de la conciencia.
- Eutanasia impuesta: Es la que se aplica a enfermos incurables, cuando la persona aun teniendo la capacidad de consentir en su propia muerte, no lo hace, bien porque no se le pregunta, bien porque se le pregunta y elige seguir viviendo.

2.2.5 Enfermedad terminal

2.2.5.1 Concepto

Es aquella en la que el paciente:

Tras un diagnóstico seguro, tiene la certeza de la proximidad de la muerte en un corto plazo, debido a que su enfermedad ya no puede ser curada, a pesar de haber recibido un tratamiento adecuado y el tratamiento curativo ha pasado a ser paliativo. (Acurio citado por Baños Remache, 2014, p. 78).

Como podemos apreciar la enfermedad terminal o incurable según lo establecido por el autor citado no es otra cosa que una muerte a corto plazo pese a realizar tratamientos continuos y de alto riesgo, por consiguiente, aquellas enfermedades acarrean una gran pérdida de fortaleza y conllevan a ser dolorosas e intolerables, que al corto tiempo llevan a un descenso del paciente que lo padece. Por ello, una de los argumentos jurídicos que sometemos a discusión que sirva de fundamentos es vivir con dignidad, ya sea una vida larga como en muchos casos o corta en caso de enfermedades terminales, que no solo son incurables, sino que hacen imposible vivir con paz al paciente al ser doloras e intolerables para las personas, sin cura futura de corto o largo plazo.

2.2.5.2 Características del enfermo terminal

Según el autor (García citado por Baños Remache, 2014, p. 79) menciona a las características del enfermo terminal de esta manera: Una vez determinada la enfermedad como terminal, el paciente empieza a atravesar ciertas características en torno a su deterioro; son las siguientes:

a. Negociación

Luego de recibir la noticia de que padece una enfermedad grave, el paciente se resiste a creer el diagnóstico y busca otras opciones. Esta actitud en ocasiones persiste a lo largo del proceso.

b. Cólera, ira o rebeldía

El enfermo no se conforma con su situación y echa la culpa a los que lo rodean e incluso a sí mismo. Se vuelve agresivo, rebelde y violento, lo cual desconcierta a los que lo cuidan.

c. Pacto, sumisión y regateo

El paciente acepta con docilidad los tratamientos y hace promesas a Dios y a los santos de ser mejor. Pide vivir hasta que suceda un acontecimiento de particular importancia para él

d. Depresión, desánimo y pena

El moribundo se aísla, deja de luchar y de comer, se encierra en un mutismo. Al convencerse de que va a morir siente pesar por tener que abandonar familia, amigos y bienes que ha poseído.

e. Aceptación, resignación y paz

Todo se ha consumado y viene lo inevitable, el enfermo terminal está dispuesto a partir con un talante de paz.

2.3 Teorías o enfoques teóricos del derecho

2.3.1 Teoría del bien jurídico protegido

El bien jurídico no puede confundirse con el Derecho objetivo, pues el bien jurídico no es la ley, sino el interés fundamental positivado en ella, que protege bienes jurídicos como la vida, la dignidad humana, la autonomía de la voluntad, etc.

Bien se sabe que la teoría del bien jurídico protegido su principal fundamento se basa en la protección de la vida humana en términos muy amplios, y nuestro Estado no se encuentra ajeno a ello, si nos damos cuenta que la eutanasia está penalizado; aunque no establezca directamente el término "eutanasia" pero en el artículo 112° del Código Penal manifiesta totalmente su prohibición.

El Estado peruano, debe permitir a que la persona humana busque su propia decisión en cómo debe terminar su vida en los aspectos de una enfermedad terminal. Es cierto, el Estado no penaliza la autodeterminación de la persona, pero si a quien presta su ayuda.

La finalidad del Estado no es proteger la autodeterminación de la vida, sino la protección de la vida digna de toda persona; es decir, el respeto a su dignidad.

2.3.2 El principio de la dignidad humana introducida a la eutanasia

El autor (Mendoza Cruz, 2014, p.99) en su tesis pretende acuñar el principio de la dignidad humana de la siguiente manera:

El primer artículo del texto constitucional expresa que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Respecto al principio de dignidad, como fundamento valorativo de los derechos, el Tribunal Constitucional afirma que éste irradia en igual magnitud a toda la gama de derechos, ya sean los denominados civiles y políticos, como los económicos, sociales

y culturales, toda vez que la máxima eficacia en la valoración del ser humano solo puede ser lograda a través de la protección de las distintas gamas de derechos en forma conjunta y coordinada.

En comentario a la cita anterior, tal autor nos ha mencionado si el principio de la dignidad humana constituye como fundamento principal para la despenalización de la eutanasia, es por eso que se encuentra ajeno su estudio a los mismos.

Para nosotros, éste principio constituye como fundamento primordial para que la eutanasia se deba practicar, siempre y cuando la persona humana tenga la capacidad de determinar su propio destino, de acuerdo a sus propios intereses y necesidades, y sobre todo que la persona humana se encuentre facultado de la razón, de distinguir lo bueno y lo malo, que tenga la plena conciencia, la libertad de elegir, valores, sentimientos, deseos, etc.

De esta manera, la persona humana se siente reconocido como tal y como es; asimismo, se siente reconocido como un medio para sí mismo y no ser considerado como un medio para los fines de otro.

De todo lo mencionado en párrafos anteriores sobre la dignidad humana, el Estado y la sociedad podrán optar por el respeto de su dignidad de la persona humana. Según como establece nuestra Constitución en el artículo 1.

2.3.3 Principio de la autonomía de la voluntad

Diversos doctrinarios han realizado estudios sobre el principio de la autonomía de la voluntad, pero ninguno de ellos introdujo este principio como fundamento de despenalización de la eutanasia.

El principio de la autonomía de la voluntad implica pues aquella libertad de decisión de una persona para el fin de sí mismo. Es por eso que la finalidad del Estado no es enseñar

modelos morales para la felicidad de las personas; sino que debe permitir que cada persona tenga la plena libertad de autogobernarse por sí misma sin afectar a otras personas.

En concordancia con el párrafo anterior, el Estado debe permitir esa plena libertad de decidir la autodeterminación de la persona en la etapa terminal de su vida. De tal forma, si al prohibirse la eutanasia, el Estado peruano pretende burlar este principio fundamental de la persona.

Ante esta perspectiva, el Estado peruano se siente en la obligación de respetar la libre decisión de la persona en la fase terminal de su vida. Lo que debe buscar es el bienestar y felicidad de su gente.

2.4 Marco conceptual

2.4.1 Eutanasia

La Eutanasia se entiende como la ayuda prestada a una persona gravemente enferma, por su deseo o por lo menos, en atención a su voluntad presunta, para posibilitarle una muerte humanamente digna en correspondencia con sus propias convicciones (Roxin se citó en Ortega Jirón, 2008, p. 13).

La eutanasia se debe practicar en consideración a que la persona humana tenga la capacidad de determinar su propio destino, de acuerdo a sus propios intereses y necesidades.

Dentro de las clases de eutanasia, nos interesa la eutanasia voluntaria; porque "procede ante la solicitud del paciente que adolece de un mal incurable en pleno uso de sus facultades psicológicas de manera expresa, consciente, y reiterada, ya sea en forma verbal o escrita" (Flores Villacres & Padilla Yumbato, 2015, p.26).

La eutanasia no debe proceder en contra de la voluntad del que lo padece, sino debe ser voluntaria para aquellos que padecen una enfermedad terminal. Llegando a un análisis muy amplio, la eutanasia no afecta de manera principal a la vida social; salvo a la religión, quienes opinan que es Dios quien nos da la vida, y, por tanto, él mismo será quien los quite.

De esta manera podemos decir que no se estaría violando ningún derecho fundamental por el simple hecho de que se respeta la dignidad humana y el libre ejercicio de la voluntad de quien la solicita como último recurso.

2.4.2 Enfermedad terminal

Se puede definir como aquella enfermedad que afronta el paciente terminal como "el estado clínico que indica expectativa de muerte a corto plazo" y que se "presenta comúnmente como un proceso evolutivo final de algunas enfermedades crónicas progresivas cuando se han agotado los remedios disponibles" (Peralta se citó en Mendoza Cruz, 2014, p.18).

Siguiendo a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos la situación de enfermedad terminal se caracteriza por presentar los siguientes elementos: 1. Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable; 2. Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico; 3. Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes; 4. Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte (Mendoza Cruz, 2014, p.99).

2.4.3 Principio de la autonomía de la voluntad

El principio de autonomía significa el reconocimiento de la libre autonomía decisión individual sobre sus propios intereses siempre que no afecte a los intereses de un tercero, o el respeto a la posibilidad de adopción por los sujetos de decisiones racionales no constreñidas.

Supone, por tanto, el reconocimiento del actuar autorresponsable, de que cada ser humano el derecho a determinar su propio destino vital y personal, con el respeto a sus propias valoraciones y a su visión del mundo incluso, aunque se tenga la plena convicción de que son erróneas y de que son potencialmente perjudiciales para él. (Romeo se citó en Torres Navarro, 2015, p. 61).

2.4.4 Principio de dignidad humana

Se puede definir como la capacidad del ser humano de determinar su propia vida, sus propios fines; es decir, de señalar su propio destino de acuerdo a sus intereses y necesidades, y esto es posible debido a que el hombre se encuentra dotado de razón, conciencia, libertad, valores, sentimientos, aspiraciones, etc.; y, en este sentido reconocido el hombre nunca podrá ser considerado como un medio para los fines de otro, sino un fin en sí mismo. En ese sentido, por su dignidad, el respeto a la persona se convierte en una premisa que debe orientar toda la actuación estatal (Gómez se citó en Flores Villacres & Padilla Yumbato, 2015, p.47).

2.5 Hipótesis de la investigación

Los derechos constitucionales universales vulnerados en la punibilidad del homicidio piadoso en el código penal peruano son:

- Derecho a la protección de la dignidad humana.
- Derecho a la autonomía de la voluntad y;
- La libertad de decisión.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación se ha desarrollado con la propuesta de determinar qué derechos fundamentales de todas las personas vienen siendo vulnerados en la legislación peruana ante la punibilidad del homicidio piadoso tipificado como delito en el artículo 112° del código penal, derechos que contrario a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico en otras legislaciones más avanzadas jurídicamente hablando y en el último caso nacional de la señora Ana Estrada Ugarte han sido fundamento para la inaplicación del tipo penal. De esta línea de análisis nuestra investigación fue realizada bajo el enfoque cualitativo.

Haciendo una minuciosa y concreto análisis de las legislaciones en donde se ha despenalizado el homicidio piadoso, así como cuáles son los requisitos y derechos que sirven de fundamento para considerar una conducta jurídica eximida de responsabilidad penal.

3.1 Tipo de investigación

El tipo de investigación es de "lege data" pues este tipo de investigación sirve para interpretar el ordenamiento jurídico mediando una adecuación a una realidad ofreciendo soluciones prácticas que den cuenta del universo de su aplicación. Así mismo lo que se busca con este tipo de investigación es únicamente conocer, entender, comprender y explicar la realidad, no le interesa nada más que eso. Esto es justamente lo que hace el investigador jurídico que trabaja bajo los criterios de lege data. Él estudia una realidad ya establecida: un ordenamiento jurídico determinado. Su intención es responder problemas jurídicos haciendo uso de todo el material legislativo, jurisprudencial y dogmático con el que se cuente en una época determinada (Sánchez Zorrilla, 2017, p. 16).

Por consiguiente, en la presente investigación tratamos de interpretar el artículo 112° del código penal vigente y tratar de ver qué derechos fundamentales se estarían vulnerando al

no permitir que el homicidio piadoso pase a ser una conducta jurídica y legal, derechos y requisitos que han sido aportados como fundamento en la legislación internacional y parte de la nacional (Caso Ana Estrada).

3.2 Diseño de investigación

El diseño de la investigación fue de carácter no experimental, ya que tratamos de estudiar las teorías como el derecho a la protección de la dignidad humana, derecho a la autonomía de la voluntad y la libertad de decisión ante la punibilidad del homicidio piadoso,

3.3 Área de investigación

De la presente investigación es de Ciencias Jurídicas Penales ya que nos permite analizar el artículo 112° del código penal peruano vigente y determinar si su inaplicación debe ser en todo el ordenamiento penal y no como es hasta el momento el caso aislado y desigual de Ana Estrada Ugarte, con una modificatoria al citado artículo o un proyecto de ley que deroga y dispone nuevas situaciones jurídicas penales y administrativas, tanto a los profesionales de la salud que ejecutan el homicidio piadoso, como a aquellos que se oponen al mismo.

3.4 Dimensión temporal y espacial

La dimensión temporal se realizó con la legislación vigente hasta julio de 2021 y la dimensión espacial la investigación se realizó en las normas que son aplicables sobre el Territorio Peruano.

3.5 Unidad de análisis, población y muestra

Artículo 1° de la constitución política del Perú; el artículo 112° del Colegio Penal vigente, el caso Ana Estrada Ugarte, doctrina y legislación internacional de la despenalización del homicidio piadoso, entre otras teorías y doctrinarios jurídicos.

3.6 Métodos

3.6.1 La hermenéutica jurídica

Se utilizará el método de la hermenéutica jurídica, pues permitirá la interpretación de la norma ya sea el código penal como la Constitución Política del Perú. Para el profesor Sánchez Zorrilla la hermenéutica jurídica es "la disciplina y la actividad que se encarga de la interpretación de texto" (Sánchez Zorrilla, 2012).

Analizamos si pese a que en la legislación internacional y la controversial inaplicación del artículo 112° del código penal para el caso Ana Estrada Ugarte (Perú), es posible que en el ordenamiento jurídico peruano de regimiento obligatorio para todos los ciudadanos y profesionales de la salud sean eximidos de responsabilidad penal al ejecutar dicho homicidio piados y en consecuencia determinar responsabilidades administrativas a quien ejecutó el homicidio piadoso tras infringir el código de ética y deontología.

3.7 Técnicas de investigación

3.7.1 El análisis de contenido

Es la observación y recolección de datos a través del fichaje ya que ayudo encontrar información en tesis, libros e internet.

3.7.2 Instrumentos

Los Instrumentos "son los objetos tangibles que ayudarán en el proceso de recojo de información" (Sánchez Zorrilla, 2012). El instrumento empleado en esta tesis fueron las fichas de lectura y la ficha de análisis de contenido.

3.7.3 Limitaciones de la investigación

La principal limitación que presenta la investigación, es que a inicios del 2020 el país entró en una cuarenta total, por causa del Covid-19 y en la actualidad seguimos con restricciones de ingreso en todas los Hospitales, clínicas pues nos hubiera gustado realizar entrevistas a los médicos, a las personas que tengan una enfermedad terminal o que tengan dolores insoportables debido a su enfermedad o en todo caso a los familiares de estás personas que están enfermas, pero por motivo del Covid-19 se nos hizo imposible acceder a dichas entrevistas.

Otra dificultad seria a la escasez de autores peruanos que profundicen el tema del homicidio piadoso.

CAPITULO IV

DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS EN LA PUNIBILIDAD DEL HOMICIDIO PIADOSO

En este capítulo se argumenta la postura respecto a que derechos constitucionales deben aplicarse para que un profesional de la salud en ejercicio no conlleve ninguna responsabilidad penal y administrativa cuando ejecute una acción que en la actualidad viene siendo punible, esto el homicidio piadoso.

Estos criterios se desarrollaran y servirán de fundamento, han sido invocados en vista a la última sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Ana Estrada Ugarte, mismo en el que se ha logrado la inaplicación exclusiva del artículo 112° del código penal nacional, en lo concerniente a la tipificación del homicidio piadoso pero que a la vez no constituyo un precedente vinculante para la modificación, la derogación o inaplicación del artículo 112° del Código Penal, el cual tipifica y sanciona la conducta de un profesional de la salud cuando ejecuta la eutanasia. Por este motivo somos de la posición jurídica de que la punibilidad actual del homicidio piadoso atenta contra derechos fundamentales reconocidos en la Constitución política del Perú y tratados internacionales como: el derecho a la dignidad humana, a la autonomía de la voluntad y el derecho a la libertad de decisión.

En ese sentido, se desarrollan los fundamentos que aportamos para determinar qué derechos constitucionales vienen siendo vulnerados ante la punibilidad del homicidio

piadoso, mismos que deben ser fundamento para lograr la despenalización y legalización de la conducta aplicada por los profesionales de la salud en el homicidio piadoso.

4.1 Punibilidad y fundamentos pro despenalización del homicidio piadoso o eutanasia en la legislación internacional

La punibilidad del homicidio piadoso en el ordenamiento jurídico peruano la encontramos tipificada en el artículo 112° del código penal: "El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que lo solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años".

Ahora bien, en algunas legislaciones internaciones en las que la eutanasia ha sido una figura jurídica y social muy debatida a lo largo de estos últimos años, logrando que en determinado países de Sudamérica, Norte América y Europa ésta figura que en el Perú es punible, haya sido legalizada bajo aplicaciones de derechos constitucionales que sirvieron de fundamentos válidos para despenalizarla, en ese sentido, veamos y comentemos algunos fundamentos jurídicos y casuísticas de legislaciones internaciones que incorporaron un cambio en su legislación o están el proyecto de cambio legal de autorizar la ejecución del homicidio piados:

4.1.1 En la legislación Mexicana

En esta legislación se analizó desde una perspectiva humana el eximir de responsabilidad penal a un profesional de la salud quien ante la petición expresa y consiente de una persona enferma que desea por voluntad propia truncar el seguimiento de un tratamiento que, pese a ejecutarse sabe que no salvará su vida, así pues, analizamos la llamada "Ley de voluntad anticipada para el distrito federal de México" la cual establece en su artículo 1°:

La presente ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las normas para regular el otorgamiento de la voluntad de una persona con capacidad de ejercicio, para que exprese su decisión de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona.

Citando el anterior fundamento legal y trayéndolo a comparación con nuestra legislación, podemos notar que cuatro (4) presupuestos jurídicos que en la legislación peruana (penalizado) y la legislación mexicana (eximido) se definen en, a) voluntad; b) capacidad de ejercicio; c) expresión de decisión y, d) enfermedad en etapa terminal e incurable.

Como puede leerse la legislación mexica pondero el derecho a la libertad de decisión, y el derecho a una vida digna libre de tortura y denigración natural, si bien es cierto en la citada legislación la eutanasia directa (practica del médico sin consentimiento del paciente) está penada, pero como excepción a la regla, la promulgación de la ley de voluntad anticipada es un avance internacional que debemos observar pues habiendo recabado los requisitos o supuestos necesarios a cuenta del paciente que ejerce su libertad de decisión respecto a no continuar sufriendo sin aspirar a una cura posible, no debería existir un impedimento penal para el profesional de la salud en ejercer el homicidio piadoso, ya que no es otra cosa que la voluntad del paciente respaldada por un proceso médico.

4.1.2 En la legislación de Canadá

En esta misma secuencia de acciones jurídicas internacionales encontramos en la legislación de Canadá, y el caso emblemático "Gloria Taylor vs Estado", caso en el cual se

solicitó ante haber detectado una enfermedad neurodegenerativa fatal denominada esclerosis lateral amiotrofia: solicito una muerte con asistencia médica, con el fin de «no morir lentamente, pieza por pieza» o «atormentada por el dolor». Estas fueron las palabras que utilizó Gloria Taylor para argumentar su petición: «Yo no quiero que mi vida termine con violencia. Yo no quiero que mi modo de muerte sea traumático para los miembros de mi familia. Quiero el derecho legal a morir en paz, en el momento de mi propia elección, en el abrazo de mi familia y amigos. Para lo cual la corte superior de Canadá establece la procedencia del pedido a una muerte digna considerando como fundamentos esenciales y obligatorios de observar para despenalizar la eutanasia los siguientes:

- a) El derecho a la vida digna, que se resumen en: "la prohibición penal que impide la muerte asistida por médico tuvo el efecto de obligar a algunas personas a quitarse la vida antes de tiempo, por miedo a no ser capaces de hacerlo cuando hubieran alcanzado —en función de la evolución de su enfermedad— un sufrimiento intolerable". (Gimbel García, 2016, p. 6)
- b) El derecho a la libertad de cada persona, De alguna forma, la imposición de dolor y de estrés psicológico supone privar a la demandante de control sobre su integridad corporal, privación esta que incide sobre su seguridad personal. (...) La Corte Suprema de Canadá se muestra por entero de acuerdo con estas apreciaciones del juez: «La respuesta de un individuo que padece una enfermedad grave e irremediable es una cuestión fundamental para la dignidad y la autonomía. La ley permite a las personas en esta situación solicitar la sedación paliativa, negarse a la nutrición e hidratación artificial, o solicitar el retiro de equipo médico de soporte vital, pero les niega el derecho a solicitar la asistencia de un médico para morir. Esto interfiere con su capacidad para tomar decisiones que afecten a su

integridad y a su atención médica y por lo tanto a su libertad corporal. (Gimbel García, 2016, p. 7).

3.1.3 La legislación Española:

Siguiendo con la recolección de evidencia internacional de la pro despenalización de la eutanasia u homicidio piadoso, el último antecedente en el año 2021, se originó en la legislación española, en la cual se ha publicado la Ley Orgánica 3/2021 en la cual se ha establecido:

En su artículo 1° regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse.

Asimismo, determina los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas, definiendo su marco de actuación, y regula las obligaciones de las administraciones e instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido en esta Ley.

Aunado a ello, la citada norma española estableció en la primera disposición final, la modificación de su código penal aprobado por la Ley orgánica N° 10/1995, reformulando la tipificación de la conducta adoptada en caso exclusivo de la ayuda a morir o llamada en nuestro país eutanasia, dejándola redactada de la siguiente manera:

El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca

de esta, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los apartados 2 y 3.

No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia.

Sin duda alguna, la legislación española concuerda con la legislación mexicana, canadiense, entre otras en que la eutanasia es legal y no acarrea responsabilidad penal al profesional de la salud que aplica la figura analizada, la concordancia es en los extremos de los requisitos legales de procedibilidad señalados en una norma para ejecutar el homicidio piadoso, así pues, en España se precalifico a la ayuda para morir, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias:

- a) Información al paciente por escrito respecto a su propio historial médico, alternativas y posibilidades de actuación
- b) Dos solicitudes voluntarias y por escrito de la decisión del paciente para aplicar la ayuda a morir, con capacidad médica.
- c) Sufrir una enfermedad grave e incurable, crónica, certificada por médico.
- **d)** Prestar consentimiento informado previamente a recibir la ayuda a morir.

Esto conlleva a determinar que analizados algunos presupuestos jurídicos concordantes en las legislaciones extranjeras concerniente a la despenalización de la eutanasia u homicidio piadoso, es en estos que se fundamenta nuestra postura jurídica, por cuanto el código penal peruano ha establecido que el homicidio piadoso es privar de la libertad a quien lo ejecuta con una pena no mayor de tres años pese a que el propio artículo 112 del Código Penal ha establecido como circunstancias de concurrencia en el tipo penal que el sujeto quien ejecute cuente con un paciente inmerso en: enfermedad incurable; solicitud de manera expresa y consciente y dolores intolerable. Presupuestos

que en otras legislaciones han sido tomadas como fundamento para despenalizar el homicidio piadoso, situación que en el derecho penal peruano al contrario son analizados para tipificar el accionar de un profesional de la salud que ejecute la eutanasia, y que al contrario de la legislación extranjera no exime de responsabilidad penal, sino que lo sanciona como tal (delito).

4.1.4 En la legislación Holandesa:

En esta legislación europea el comportamiento jurídico de la eutanasia ha sido debatido a lo largo del tiempo, no por ello, fue el primer país en regular a la eutanasia, u homicidio asistido como aquella conducta eximente de responsabilidad penal, es decir una conducta antijurídica que no es otra cosa que impune de proceso y sanción penal. En esa línea de tiempo, en dicha legislación debemos ceñirnos a los años 1984; 1993; y 2001 en los cuales la eutanasia fue debatida y saneada a lo largo de los tiempos para que en la actualidad opere como una conducta jurídica y no culpable.

En el año de 1984, se logró la despenalización considerando como requisitos en la legislación de países bajos, *i*) La petición de la eutanasia debe venir únicamente del paciente y ser enteramente libre y voluntaria; ii) dicha petición debe ser estable, bien considerada y persistente; iii) el paciente debe experimentar sufrimientos intolerables sin perspectivas de mejora; iv) la eutanasia debe ser el último recurso, y v) el médico debe consultar con un colega independiente con experiencia en este campo. Pese a que en el código penal Holandés la figura de la eutanasia seguía siendo un delito, salvo con la concurrencia de los requisitos antes mencionados.

Para el año de 1993, éste país conservo la penalidad del homicidio piadoso o eutanasia, con ciertas excepciones bajo el cumplimiento de requisitos concurrentes como los señalado en el punto anterior, sin embargo en dicha década se incorporó diversas

modificaciones especificas en cuanto a la persona que solicita la muerte asistida, como: i) se podía aplicar a los enfermos que experimentasen un sufrimiento psíquico o moral, y no sólo dolor físico; ii) la eutanasia de personas incapaces de manifestar su consentimiento o su oposición, sin sufrir consecuencias penales. Sin embargo, los tribunales han terminado por admitir también la eutanasia de niños con enfermedades graves; iii) la eutanasia se podía aplicar a un paciente que desease morir, aunque no fuera un enfermo incurable en estado terminal.

Por último, en el año 2000, 2001 y 2002, la eutanasia en esta legislación fue perfeccionada jurídicamente como una práctica no penada y plenamente jurídica, que es la modificación de su código penal en el cual ya se estableció taxativamente la eximente de responsabilidad penal a quien aplique la eutanasia previa a los requisitos contemplados hasta ese momento y venidos desde 1984. Aunado a ello, se prioriza como requisito indispensable y de obligatoria concurrencia el derecho de decisión y autonomía de la voluntad declarado como: las declaraciones de voluntad anticipada, realizadas por escrito y en las que el enfermo anticipa su decisión cuando teme poder llegar a encontrarse en condiciones de no poder ya expresarla.

En consecuencia, la legislación de hoy llamado Países Bajos, concretizo como requisitos concurrentes para eximir de responsabilidad a quien ejecuta el homicidio asistido, así pues según lo estudiado y revisado de dicho marco internacional, una condición es que el paciente tenga plena voluntad, es decir petición libre y voluntaria; condición de enfermo terminal, y no terminal y en algunos casos ausencia de voluntad; dolores irritables físicos como no irritables pero mentales, psicológicos y psiquiátricos.

4.1.5 En la legislación Belga:

La Ley belga, no tiene una diferencia muy notoria con la legislación y requisitos de despenalización de la eutanasia en Holanda, pues la prima fundamenta a la eximente de responsabilidad penal el derecho a la:

- Voluntad del enfermo; y
- El hecho de que éste se halle en "una situación médica sin esperanza,
 definida por un estado de sufrimiento físico o psíquico permanente e
 insoportable que no pueda paliarse y que sea el resultado de una
 enfermedad grave e incurable".

Como podemos darnos cuenta nuevamente se atrae el fundamento jurídico de aplicar el derecho de la libre voluntad de un paciente contra la penalidad de quien lo ejecuta previo cumplimiento de requisitos como: i) se restringe al ámbito médico; ii) El paciente debe sufrir una enfermedad irreversible que provoque graves padecimientos, aunque no sea de carácter terminal; iii) La justificación de la conducta médica requiere inexorablemente de la voluntad del paciente. No existen mecanismos de sustitución de la voluntad. iv). Se autoriza la declaración anticipada de la voluntad bajo ciertas condiciones, v) Un plazo de caducidad de cinco años para hacer tal declaración; vi) Para la determinación del estado del paciente, se requiere la intervención de profesionales de la medicina diferentes a quienes practicarán la eutanasia. (García Rivas, 2008, p. 8 -9).

4.2 Fundamentos jurídicos adoptados por el Tribunal Constitucional en el caso Ana Estrada Ugarte, para despenalizar el homicidio piadoso en ese exclusivo caso.

Como es de analizar en la Sentencia contenida en la Resolución Número Seis de fecha 22 de febrero del 2021, recaída en el Expediente N° 00573-2020-0-1801-JR-DC-11, caso

Ana Estrada Ugarte, en la cual se determinó mediante acción de amparo interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra el Ministerio de Salud MINSA, el Procurador Publico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Procurador Público del Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos MINJUSDH, Seguro Social de Salud Essalud. Con la finalidad que se declare la inaplicación del artículo 112° del código penal peruano, en la materia exclusiva de su persona.

En ese sentido, en la legislación peruana el Tribunal Constitucional máximo intérprete de la constitución declaro fundada en parte la demanda de la señora Ana Estrada Ugarte, sustentando su decisión en identificar que el artículo 112° del código penal, el cual prohíbe a toda persona y a los profesionales de la salud ejecutar el homicidio piadoso pese a que concurren los siguientes requisitos: solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, y enfermedad terminal, contraviene a derechos fundamentales inherentes del ser humano y que son prioridad de protección por los ordenamientos legales nacionales e internacionales, derechos que según el TC han sido vulnerados: derechos a la dignidad, autonomía de la voluntad, libre desarrollo de su personalidad y de la amenaza de no sufrir tratos crueles e inhumanos.

Consideramos que la disponibilidad y autonomía de decisión respecto a la propia vida de cada persona en situaciones y causas especificas detalladas ya en párrafo antecedente conlleva a una protección constitucional de la dignidad humana que nuestra propia Carta Magna la reconoce como fin supremo en su artículo 1°, configurándose la dignidad como el respeto que se tiene por el otro, cual fuese su condición, capacidad física o mental, pero también por la percepción que la propia persona tiene de sí mismo, esto es su propia dignidad.

Así mismo, del análisis del fundamento jurídico 91° de la sentencia el Tribunal Constitucional agrega al derecho de una vida digna, la figura de la vida digna de una persona con discapacidad establecido que no toda persona con discapacidad puede tener conciencia de una vulneración a su dignidad, por ejemplo, aquellas personas con Alzheimer avanzado, que no perciben su propia dignidad. Así en el caso específico analizado se determina lo siguiente en lo concerniente a la dignidad humana: "Ana Estrada, para el sistema jurídico y para la sociedad, es una persona que goza del derecho a la dignidad. Precisamente, en uso de su libertad de elegir, de exigir tutela jurídica y de decidir, es que se admite su participación en esta causa, interpuesta por la Defensoría del Pueblo en su beneficio. Seguirá siendo digna si eventualmente, no puede expresar su voluntad y lo seguirá siendo si, también pierde el uso de su razón. (Fj. 98)

Otro de los fundamentos que complementan el caso Ana Estrada Ugarte, y sirven a de argumentos jurídicos es el derecho de libertad de decisión, se prescribe en el fundamento 97° que: "El individuo es propietario de su libertad, pero nada lo hará menos libre que la pérdida de razón y consecuentemente, de su conciencia, respecto de esa libertad". Este fundamento coincide con la condición adoptada por la legislación extranjera que despenalizo el homicidio piadoso, y es que el paciente entre otros requisitos concurrentes tenga conciencia, capacidad y facultad para disponer de su libertad, caso contrario y ante la pérdida de ésta no podrá ejercer la libertad de decidir sobre su propio cuerpo.

De ésta manera podemos definir que la libertad en uso del ser humano genera proyecciones de desarrollo, y la sucesión de la vida de cada persona, lo que significa una libertad a la autonomía de tomar decisiones, incluso la de vivir. Por esta razón el fundamento 99° de la sentencia estableció: La libertad, es también un bien que puede ser limitado, de hecho, el ser humano se limita en su libertad para no hacer daño a otros, el Estado es un

límite a su libertad, pero es también garante de ella. Al ser límite y garante, es posible que legisle, o decida mediante actos concretos esos límites y, estos son excepcionales.

Por último, específicamente en lo concerniente al derecho de decisión el Tribunal Constitucional expreso como fundamento: " (...) el derecho a"... decidir de manera informada y expresa, controlar el fin de la vida debido a dolores incurables y condiciones de deterioro que vulneran la dignidad de quien padece una enfermedad incurable, degenerativa y progresiva", añade que, este es un derecho que si bien no está inscrito en el listado de derechos constitucionales en la Carta de 1993, ello no impide que se le considere como tal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3° de la Constitución que establece la cláusula de númerus apertus o lista abierta, de derechos constitucionales al ser, la muerte, una fase esencial de la vida misma, que no es posible mantenerse inerte ante ella, cuando la vida no merece la pena vivirla, lo que implica solo reconocer la autonomía del individuo, de decidir su propia existencia con dignidad.

Así pues, el supremo interprete arribo a la conclusión analizada entre líneas que existe un derecho a una vida digna y consecuentemente a una muerte digna; sin embargo, no puede considerarse un derecho fundamental. El suicidio, no es un derecho, es más bien una libertad fáctica. La muerte digna, es un derecho, es evidente que puede derivarse del propio derecho a la dignidad; pero, siendo un derecho derivado, que asimismo su nacimiento está supeditado al nacimiento de la vida misma, que no es un bien jurídico absolutamente disponible, que configurado como lo ha expuesto por la propia demandante y como lo entiende esta judicatura, tiene límites intrínsecos y que en gran parte de los casos, el Estado está obligado a proteger este derecho, pero no a promoverlo; debe considerarse que el derecho a la muerte digna, sin ser un derecho fundamental, da lugar a que exista una excepción legítima, de no punibilidad, bajo ciertas condiciones, de la protección estatal de la vida.

4.3 ¿Cuál es la situación jurídica en el ámbito de la potestad administrativa disciplinarias del profesional de la salud que ejecutara la eutanasia en el caso más relevante peruano Ana Estrada Ugarte?

El punto más relevante de la sentencia del Tribunal Constitucional, en lo concerniente al pronunciamiento de las consecuencias administrativas disciplinarias en las que el ejecutante del homicidio piadoso en el caso Ana Estrada Ugarte debe afrontar, se sitúa en el fundamento N° 145:

No son normas exactamente análogas al artículo 112° del Código Penal. Sin embargo, un médico que incurre en un acto contrario a las normas éticas, podría ser sancionado de acuerdo a su Estatuto. Asimismo, un médico por sus propios criterios éticos, podría negarse a participar de una petición como la de Ana Estrada, aun cuando lo ordenase un Juez e inclusive una ley dictada por el Congreso. Al respecto, deben considerarse dos elementos; a) No existe contravención de las citadas normas del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico, b) La participación de un Comité, como el que señala la demandante deberá tener una cláusula de reserva de identidad.

Bajo este sustento no tan preciso del Tribunal deja un lazo suelto considerando que la inaplicación del artículo 112° del código penal peruano, para el exclusivo caso de Ana Estrada Ugarte exime de responsabilidad penal al médico que ejecute el homicidio culposo previa verificación de ciertos requisitos concurrentes que han sido analizado en esta investigación, sin embargo los profesionales de la salud tienen aparte del común otro fuero de administración disciplinaria diferente al penal para que no recaigan en responsabilidad en este caso administrativa disciplinaria por infringir el código de ética y Deontología del Colegio Médico del Perú.

En ese sentido, la sentencia emitida en el caso Ana Estrada Ugarte únicamente se pronuncia respecto a la inaplicación del delito contemplado en el artículo 112° del código penal, por lo que es menester complementar que ante la despenalización del homicidio piadoso (pena más grave) la eximente de responsabilidad administrativa disciplinaria tendría que haber sido pronunciada y así garantizar a un médico o profesional de la salud ejecutar la eutanasia por mandato judicial o de la Ley.

4.4 Desarrollar los derechos constitucionales propuestos como fundamentos para la despenalización del homicidio piadoso en el Código Penal Peruano, con alcance universal en la legislación nacional.

En este acápite nos centraremos en identificar qué derechos constitucionales deben de proponerse como fundamento para que el homicidio piadoso o eutanasia sea despenalizado en la legislación nacional, no solo en casos especiales como el caso Ana Estrada Ugarte, sino en ámbito general con presupuestos concurrentes que se analizan en el primer sub título de este capítulo IV, por consiguiente los derechos que del análisis se viene vulnerando y deben ser fundamentos de pro homicidio piadoso despenalizado son:

4.4.1 El Derecho a una Vida Digna.

No solo en el estado peruano han ocurrido diferencias o discusiones en cuento a que es una vida digna, desde los inicios de la civilización, este tema ha estado dentro del debate de nuestra aristocracia, y dentro de los que podemos mencionar es el de:

La palabra latina dignitas se refiere al valor personal, el mérito, la virtud, la consideración, condición o rango (honor). En el mundo clásico no se reconocía el mismo valor jurídico a todos los seres humanos, no todos los seres humanos eran ciudadanos con el mismo derecho. Unos eran hacendados o amos y otros esclavos; en Grecia los primeros eran

"oikodespotes" (o Kodespothj significa dueño de casa, padre de familia), por que gobernaban a los seres considerados más desvalidos como las mujeres, los niños y los esclavos. Solo ellos disfrutando los derechos civiles y distintos grados de dignidad. El cristianismo aportó la idea revolucionaria de la igualdad de todas las personas en cuanto a su origen y naturaleza (creación divina), aunque, contradictoriamente, las políticas oficiales de la iglesia católica contribuyeron al desarrollo de una fuerte jerarquización socio-política a lo largo de los siglos. (Martínez 2003. p. 108)

Es por ello que, al hablar de vida digna, no solo se refiere al estar vivo, esta concepción va más allá, de solo seguir respirando, es tener la tranquilidad y no depender de alguna máquina para poder seguir respirando, quizá nosotros no tengamos la idea de lo que significa esto, pero si hay testimonios reveladores de lo que esto significa, del daño que sufre no solo la persona que se encuentra viviendo así sino también de sus familiares o de las personas que los rodean.

Cuando se habla de calidad de vida, no se está haciendo alusiones a otra cosa que a condiciones que proporcionen felicidad, este concepto resulta demasiado amplio y subjetivo para entrar a discutir en un trabajo sobre derecho, porque se requerirá, además, acudir necesariamente a la filosofía, la sociología y la psicología. (García, 2007. p.19)

Poner fin a intensos sufrimientos tal vez, desde el ámbito constitucional, el tema que hace mayor énfasis en el dolor es el de la eutanasia, cuestión que ha sido debatida a todos los niveles en todos los escenarios mundiales. No sobra aclarar que la visión con la que se hará lectura de la sentencia no es otra que la razón de ser de esta investigación: el dolor y su apreciación jurídica. Para iniciar un análisis sobre el concepto jurídico del dolor desde la eutanasia, debe partirse de la naturaleza misma de ésta, que bajo la perspectiva penal sobre la cual hizo el desarrollo la Corte Constitucional, se denominará homicidio por piedad u homicidio eutanásico, el cual es definido desde el mismo Código Penal, en el artículo 112°,

como la acción de producir la muerte a otra persona con el interés de poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. La sentencia hace el énfasis en el fin, es decir, poner fin a intensos sufrimientos.

Esto tiene tres elementos importantes: primero, la eliminación del dolor es la causa que motiva a la acción; segundo, la persona como sujeto moral; tercero, voluntad y conciencia del sujeto para morir. Primer elemento, que la eliminación del dolor es el motor de la acción. El sujeto pasivo del tipo, requiere cumplir unas condiciones objetivas, las cuales consisten en el padecimiento de intensos sufrimientos (no cualquier nivel de sufrimiento, deben ser intensos); estos sufrimientos deben provenir de una lesión corporal o de una enfermedad grave e incurable (de manera que la fuente del sufrimiento no puede ser espiritual o psicológica, sino que debe ser física, corporal, esto nos lleva a una idea clara y directa de dolor.) Cuando se hace mención a una enfermedad incurable, hace referencia a una situación que necesariamente terminará con la muerte y en la que no existe esperanza de que termine el sufrimiento de quien lo padece. Aclara la Corte que el comportamiento de quien aplica la eutanasia no es el mismo, cuando el sujeto pasivo no ha expresado su voluntad de morir o cuando, por el contrario, ha manifestado su intención de seguir viviendo aun en las condiciones en las que se encuentra. Entonces, se evidencia, la libertad del sujeto a vivir con el dolor, a sobrellevarlo libremente.

4.4.2 Derecho a morir con dignidad

Como podemos destacar el derecho a una vida digna como derecho fundamental de todas personas debe estar presente en cada decisión social y jurídica de la persona, pues no basta con tener vida para poder decir que somos personas plenas, por ello, es que nuestra carta magna consagra en su artículo 1° como derecho prioritario es el respeto y garantía de la dignidad humana, sin embargo no solo el inicio de la vida como el desarrollo debe ser una

garantía del estado y sus instituciones sino la forma en que la persona termina su ciclo vital, bajo qué situación médica, que facilidades sociales y jurídicas otorga el estado para que garanticen una muerte y fin de la vida con dignidad, sin sufrimientos angustiantes y doloroso, denigrantes por su naturaleza, por lo que, varios estudios internaciones consideran que el derecho a morir con dignidad no debe entenderse como una formulación de un derecho, en el sentido preciso del ordenamiento jurídico; más bien, tiene una referencia al universo ético, es decir, expresa una exigencia ética. (Paulina Taboada, 2000, 95).

Así pues, en el último pronunciamiento en la legislación peruana en el caso Ana Estrada Ugarte, el tribunal constitucional, definió a este derecho en su fundamento jurídico 41 como: "la muerte digna no es sinónimo de eutanasia, sino que es mucho más congruente con la atención paliativa, lo que podría ayudar a desistir de una probable decisión por la eutanasia; esto con atención a que la voluntad por adelantar la muerte puede estar condicionada.

La voluntad de Eutanasia en un paciente con enfermedad en fase terminal es variable constantemente por factores psicológicos, ambientales, familiares, lo cual, con su ejecución apresurada, causa un daño irreparable." De otro lado, el Tribunal Constitucional estableció que para despenalizar la eutanasia u homicidio piadoso debemos asegurar a la paciente previa ejecución un acompañamiento familiar, así como ayuda psicológica, medica, social para que la decisión no genere efectos negativos, ayuda de tipo científico e interdisciplinario para garantizar una muerte digna, fundamento 113, citando la Sentencia 970-14 del Tribunal Constitucional de Colombia.

4.4.3 Derecho a la dignidad

La declaración universal de los derechos humanos ha establecido como una verdad universal que: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". En

ese sentido, la dignidad humana como fin supremo fue plasmada en la Constitución Política peruana en su artículo primero: es fin supremo del estado: "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado".

Para nuestra investigación en concreto resumiremos este fundamento que en el caso Ana Estrada Ugarte ha servido de sustento legal y que a juicio se está vulnerando en la legislación nacional, pues el Tribunal Constitucional ya ha establecido que la dignidad como argumento para la inaplicación del artículo 112° del código penal es: "Así, si se considera que la dignidad tiene como fundamento la libertad de elegir entre varias alternativas sobre su propia vida y decisiones, lo que podemos conocer como expresión de voluntad, ello implica la capacidad de razonar"(...).

En consecuencia, el derecho a la dignidad y llevar una vida digna atrae consigo una figura que pocas veces se han tratado al analizar el homicidio piadoso como figura legal y no antijurídica, ello es la prohibición de sufrir tratos crueles, inhumanos o denigrantes, por ello nos ocuparemos brevemente de este derecho humano reconocido por la convención internacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o denigrantes:

4.4.4 Derecho a no ser sometido a tratos crueles e inhumanos como parte de respecto a la dignidad humana.

Si bien es cierto el artículo 1° de la citada convención ha establecido que: "el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión"; nosotros debemos aunar dentro del fondo y finalidad de la prohibición universal de la tortura o trato inhumano y denigrante, así pues, es verdad que en la despenalización de la eutanasia u homicidio piadoso se busca garantizar el derecho a la dignidad y vida digna a raíz que un enfermo con un diagnostico terminal, incurable y con

grabes dolores insoportables, no busca una declaración o confesión, sino, el trasfondo es evitar que por no tener una autorización legal expresa general del marco constitucional, penal y administrativo una persona tenga que sufrir dolores insoportables que no se pueden tratar ni con la mejor medicina, sabiendo que es una enfermedad incurable y no hace otra cosa que hacer vivir a una personal el resto de sus cortos días en sufrimiento, tortura involuntaria, verse en una situación denigrante y sin poder ejercer su derecho a la libertad de decisión respecto de su propia vida, de este supuesto determinamos que la tortura y sufrimiento natural a una persona puede ser evitado siempre y cuando bajo ciertos criterios autorice su muerte digna.

En nuestro reciente marco jurisprudencial caso Ana Estrada Ugarte, el ente supremo, máximo intérprete de la constitución señalo que el negar aquel derecho de una muerte digna, a la referida paciente contraviene claramente el derecho a la dignidad y fomentaría indirectamente una tortura y denigración en la vida de la ciudadana, por ello estableció a una institución como EsSalud, en los siguientes términos, para que no se afecten derechos fundamentales de la ciudadana y se cumpla con su derecho en particular y, que existe el derecho de la misma a que pueda ejercer este acto en uso de su autonomía; en consecuencia, tanto el Ministerio de Salud, como EsSalud, están obligadas a cumplir con sus propios fines y con el derecho de los ciudadanos y sus pacientes, siendo que es elemento central del derecho a la dignidad, el no ser sometido a tratos crueles e inhumanos (...) (Fj. N° 185).

Resaltamos entonces, que el Tribunal Constitución ha aceptado la importancia de interpretar ampliamente el homicidio piadoso, pues su penalidad constituye no una prevención subjetiva de punibilidad a los actores del citado delito, sino, todo lo contrario sirve de un argumento jurídico para demandar al estado peruano, al restringir la voluntad de cada persona que padece estas enfermedades con ciertos diagnósticos, los cuales hacen una vida indigna y en consecuencia se genera una tortura y denigración de su propia existencia.

4.4.5 Autonomía de la voluntad y libertad de decisión

Así pues, el significado "autonomía" es término griego antiguo, pero no pasó temprano ni al latín jurídico ni a las lenguas modernas. Por ejemplo, se generalizó en español culto a partir de 1702. Ligar la autonomía a la privacidad o al ejercicio de la voluntad, por parte de los juristas, se impuso gracias al influjo de la filosofía práctica del siglo XVIII. El derecho romano habla de lo "privado" y de la "voluntad" sin ligarlos a la palabra griega "autonomía". Pero en los usos jurídicos, los romanos tenían claros los conceptos de "autonomía privada" (poder común) y de "autonomía de la voluntad" (ejercicio individual).

Este derecho inherente a cada persona considerado para nosotros como aquel poder intrínseco y objetivo reconocido por las leyes vigentes de autodeterminación en las decisiones de la persona. Se piensa entonces en la esfera de libertad de la persona, para ejercitar sus facultades y derechos, y también para conformar las diversas relaciones que le atañen. De modo que podría ser definida, como aquel poder complejo reconocido a la persona para el ejercicio de sus facultades, sea dentro del ámbito de libertad que le pertenece como sujeto de derechos, sea para crear reglas de conducta para sí y en relación con los demás, con la consiguiente responsabilidad en cuanto actuación en la vida social.

Ante ello, podemos decir que la autonomía de la voluntad ha de verse como la posibilidad de determinarse a algo concreto, siendo el hombre sujeto de derecho porque posee esa voluntad de determinarse porque tiene voluntad, en ese sentido podemos decir que el ser humano "adquiere libertad para" y "libertad de". Por ello, debemos citar lo establecido por San Vicente Parada, "la libertad también se proyecta de forma negativa y positiva. La libertad negativa se traduce en la no intervención y no obstrucción de los demás, la omisión por parte de la sociedad, sin presiones sociales, lo que implica el respeto hacia los demás. Y la libertad

positiva se proyecta en el hacer, en la conducta y pensamiento de los seres humanos". (2013, p. 5).

Del párrafo antecedente argumentamos que el derecho constitucional de autonomía de la voluntad es un elemento intrínseco de la libertad general, de la libertad jurídica. Lo que faculta a un ser humano en ejercicio de sus derechos crear una situación de derecho siempre y cuando sea un acto licito contemplado en la constitución política de un estado.

Así mismo desde nuestra perspectiva y análisis de las definiciones doctrinales, la autonomía de la voluntad es un principio e instrumento jurídico de la autónoma privada de las personas y no un poder general que contravenga los derechos de los semejantes.

Como segundo derecho fundamental que se viene trasgrediendo ante la punibilidad del homicidio piadoso es la limitación al derecho a la libertad de decisión que según Moreno Antón señala que: "libertad de decisión de disposición de la vida, porque de lo que se trata entonces es de proteger y satisfacer los intereses de quien vive tales situaciones, mediante la entrada en juego del principio de solidaridad, que ayude a poner fin a su dolor, su sufrimiento y su desesperanza. Si en el final de la vida o en supuestos de imposibilidad de vivirla se realiza una ponderación de todos los bienes e intereses en juego, la solicitud seria y libre del interesado de adelantar su muerte. (2005, p.6)

Lo que significa que la punibilidad del homicidio piadoso restringe la libertad de toda persona para decidir su propia muerte siempre que estén las condiciones de construir una justificación razonable, mismas que tiene que ser coherente con la propia libertad individual o con la finalidad de protección de otros derechos fundamentales, en específico la protección de la vida y dignidad de la personal.

Aunado a ello, la autonomía de la voluntad como fundamento de la eutanasia encaja con lo ya mencionado por Roxin "la ayuda prestada a una persona gravemente enferma, por su deseo o por lo menos en atención a su voluntad presunta, para posibilitarle una muerte

humanamente digna en correspondencia con sus propias convicciones". Citado en (Leiva López, 2001, p. 514). Lo que significa que, dentro de las condiciones, requisitos o supuestos para aplicarse la eutanasia en la legislación nacional e internacional, el elemento principal es tener libertad de decisión que acarrea una autonomía de la voluntad del paciente para no someterse a tratamientos que alivien sus dolores y en consecuencia una muerte digna por omisión de medicamentos o acción del profesional de salud que conlleve la muerte piadosa del paciente.

En conclusión, se desprende del capítulo IV desarrollado, que el homicidio piadoso, muerte digna, o también llamada eutanasia cuenta con un sustento legal nacional e internacional que los legisladores y el tribunal constitucional no se atreven a aplicar como ley o precedente de aplicación vinculante para todos los ciudadanos peruanos que estén padeciendo y dentro de los supuestos que establece el artículo 112° del código penal, como: solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, y enfermedad terminal, supuestos que contradictoriamente están en un supuesto de punibilidad pero que sirven de argumentos utilizados para la inaplicación de la penalización del homicidio culposo en la legislación internacional y nacional.

Así mismo, es concordante la ponderación de derechos fundamentales como el derecho fundamental y humano a la vida digna, autonomía de la voluntad y libertad de decisión, considerando que la sentencia de Ana Estrada Ugarte éstos son los fundamentos que se utilizan para despenalizar la eutanasia, lo que nos hace concluir que si los supuestos y derechos vulnerados por el artículo 112° del código penal tiene sustento nacional e internacional se está haciendo una discriminación con las demás personas que atraviesan las circunstancias para solicitar el homicidio piadoso, en consecución debe: 1) modificar el código penal peruano, en el extremo de derogar el artículo 112° del código penal, así mismo,

dejar claro que en un proceso administrativo disciplinario al médico dicha falta al código de ética no debe ser conducta típica, culpable y antijurídica.

Por lo tanto, los derechos a la vida digna, autonomía de la voluntad y libertad de decisión, deben ser los fundamentos jurídicos para la despenalización del homicidio piadoso en el código penal peruano, así como para que en los procesos administrativos no sea una conducta que transgreda al código de ética y deontología al cual están sometidos los profesionales de la salud que ejecutaran el homicidio piadoso, tal y cual se ha sustentado en la legislación internacional y nacional.

CONCLUSIONES

- ➤ En la presente investigación se ha determinado que los principales derechos constitucionales vulnerados ante la punibilidad del homicidio piadoso en el código penal peruano son el derecho a la vida digna, derecho a la libertad de decisión y el derecho de autonomía de la voluntad.
- Se concluyó que los derechos fundamentales a la muerte en condiciones dignas, derecho a la dignidad, derecho a la vida digna, derecho a no ser sometido a tratos crueles, libertad de decisión y autonomía de la voluntad sirvieron de fundamentos jurídicos en determinadas legislaciones internacionales para la despenalización del homicidio piadoso, mismos que deben servir para la modificatoria del artículo 112° del código penal peruano, en los casos futuros similares al caso Ana Estrada Ugarte; para eximir de responsabilidad penal al profesional de la salud que ejecuta el homicidio piadoso.
- Se estableció que es posible lograr la despenalización del homicidio piadoso en la legislación peruana, así como eximir de responsabilidad administrativa disciplinaria al profesional de la salud y equipo de trabajo que ejecuta la eutanasia al paciente solicitante, a razón de garantizar mayor protección jurídica en materia penal y administrativa disciplinaria, aplicando los derechos argumentados en el caso Ana Estrada Ugarte y los de la legislación internacional.

RECOMENDACIÓNES

- ➤ Recomendamos a las instituciones públicas, privadas, colegios de abogados y casas de estudios, a fin de discutirse la argumentación de la constitucionalidad del homicidio piadoso, basada en la dignidad humana, la autonomía de la voluntad y la libertad de decisión; buscando la participación en dichos eventos de juristas de reconocido prestigio, magistrados, litigantes y docentes. Ello con el fin de buscar una argumentación más profunda sobre el carácter constitucional del homicidio piadoso, que permita avalar su reconocimiento como derecho constitucional.
- ➤ Se recomienda la regulación de la eutanasia en el ordenamiento jurídico peruano para evitar el sufrimiento de personas con enfermedades terminales de esta manera derogar el artículo 112° del Código Penal peruano que tipifica el Homicidio Piadoso, a fin de que dicha conducta ya no sea penalizada.
- ➤ Realizar campañas para que la población del Perú a fin de que comprendan que la dignidad humana, la autonomía de la voluntad y la libertad de decisión de los pacientes terminales cuya sola existencia los obliga a soportar dolores y sufrimientos, y su derecho a decidir morir evitándose padecer durante su agonía.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Mendoza Cruz, C. (2014). Eutanasia: Un Ensayo de Fundamentación Liberal para su Despenalización. (Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Derechos Humanos) Pontificia Universidad Católica Del Perú, Lima.
- Flores Villacres, M. & Padilla Yumbato, S. (2015). La no punibilidad de la conducta del médico que realiza el Homicidio a Petición en nuestro ordenamiento jurídico. (Tesis para obtener el Título de Abogado) Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Lima.
- Torres Navarro, T. (2014). El derecho a la eutanasia: una perspectiva global de los derechos que asisten a pacientes en etapa terminal y su análisis en México. (Tesis para obtener el grado de Maestro en ciencias sociales con orientación en globalización) Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz.
- Ibarra Tamez, A. (2011). *El Derecho a Morir con Dignidad*. (Tesis para obtener el grado de doctor) Universidad Autónoma De Nuevo León, México.
- Carbonell Mateu, J. (2009). Suicidio y eutanasia. España: Trillas.
- Alberto Ortega, J. (2008). *Derecho a Morir Tratamiento Jurídico Penal de la Eutanasia en la Legislación Chilena y Comparada* (Tesis para optar al grado de Magíster en derecho, mención derecho penal) Universidad de Chile, Chile.
- Latife Salame K. & Kraus Weisman A. (2019). Laicidad y Eutanasia (México): recuperado de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5651/6.pdf
- Gimbel García J. (2016), EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO EN CANADÁ Una panorámica de la sentencia Carter v. Canadá y del consiguiente Proyecto de Ley C-14 presentado por el Gobierno canadiense. Recuperado de:
 - http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-2016-19-7110/pag_351.pdf
- Ley 10/2011, recuperado de: https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-8403-consolidado.pdf
- Arcía Hirsh, M. & Guevara Peralta, R. (2011). Percepción de la Eutanasia y factores asociados, en estudiantes de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en noviembre del año 2011 (tesis Para optar el título profesional de Médico Cirujano) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Laureate International Universities, Lima.

- Baudouin, J. & Blondeau, D. (1995). *La ética ante la muerte y el derecho a morir*. Barcelona: Editorial Herder.
- Pablo Simón L. (2008). Muerte digna en España. Recuperado de:

http://si.easp.es/eticaysalud/sites/default/files/simonp_muerte_digna_en_espana_ds_2 008.pdf

Alejandro Leiva L. (2013). La regulación de la eutanasia, según la ley N° 20.584 sobre derechos del paciente. Recuperado de:

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rdpucv/n41/a15.pdf

Ruth Mirihan Romero H. (2014). *Teoría de la libertad de elección: aplicación en la praxisética*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM / Lima-Perú, recuperado de:

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/descarga.pdf

- Claudia Wagner De T. (2011). *Limitaciones a la autonomía de la voluntad*. Recuperado de: https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/bitstream/handle/11185/541/tesis%20final%2 0-%20Claudia%20Wagner.pdf?sequence=1
- Carlos Alfonso Tarrillo Vlásica & Carlos Humberto Arribasplata Díaz (2017). Razones jurídicas para la despenalización de la eutanasia en la legislación del Perú. Recuperado de:

http://repositorio.upagu.edu.pe/bitstream/handle/UPAGU/592/TESIS%20CARLOS% 20TARRILLO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rafael Aguilera P. & Joaquín Gonzales Cruz (2012) "Derechos humanos y la dignidad humana como presupuesto de la eutanasia". Recuperado de:

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31734.pdf

Armando S. Andruet (2001). Ley holandesa de 'terminación de la vida a petición propia' nuestra consideración acerca de la eutanasia. Recuperado:

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Dialnet-

<u>LeyHolandesaDeTerminacionDeLaVidaAPeticionPropiaNu-3177990.pdf</u>

Convención Internacional de Derechos Humanos

Convención Internacional Contra la Tortura y Tratos o Penas Crueles

- Javier Vega Ortega (s.f) *La «pendiente resbaladiza» en la eutanasia en Holanda*. Recuperada de: https://www.bioeticacs.org/iceb/seleccion_temas/eutanasia/holanda.pdf
- Nicolás Gracia Rivas (2008). "Despenalización de la eutanasia en la Unión Europea: autonomía e interés del paciente". Recuperado de:

https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/temas/t_20110807_02.pdf

Cesar David G. & Suarez Rodas C. (2016) "constitucionalidad de la despenalización y reglamentación de la eutanasia en Colombia". Recuperado de:

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/16599/CONSTITUCIONAL IDAD%20DE%20LA%20DESPENALIZACION.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Manuel Sánchez Z. (2017) "La versión básica y aplicada de la investigación jurídica pura" Recuperado de:

https://www.derechoycambiosocial.com/revista048/LA_VERSION_BASICA_Y_AP LICADA_DE_LA_INVESTIGACION.pdf

ANEXOS

Anexo 01: Operacionalización de Variables

DERECHOS CONSTITUCIONALES APLICABLES PARA LA DESPENALIZACIÓN DEL HOMICIDIO PIADOSO EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO.						
Objetivo	Hipótesis	Variables	Indicadores	Metodología	Población/ Muestra	Instrumentos
General: Determinar qué derechos constitucionales vienen siendo vulnerados ante la punibilidad del homicidio piadoso en el código penal peruano. Específicos: Analizar las teorías del derecho a la dignidad humana, la autonomía de la voluntad y la libertad de decisión que servirán para fundamentar la legalización del homicidio piadoso, en el ordenamiento penal peruano. Analizar los fundamentos resaltantes emitidos por el Tribunal Constitucional respecto a la inaplicación del artículo 112° del código penal para el caso Ana Estrada Ugarte. Determinar y si es posible la derogación del artículo 112° del código penal, identificando las consecuencias de las responsabilidades administrativas a quien ejecutó el homicidio piadoso tras infringir el código de ética y deontología.	Los derechos constitucionales vulnerados en la punibilidad del homicidio piadoso son: • Derecho a la protección de la dignidad humana. • Derecho a la autonomía de la voluntad y; • La libertad de decisión.	V1. Derechos constitucionales aplicables para la impunibilidad del homicidio piadoso. V2. Homicidio piadoso en el código penal peruano.	El desarrollo dogmático de los derechos constitucionales orientados hacia la imposibilidad del Homicidio piadoso. Tipo penal del delito de homicidio piadoso.	Tipo de Investigación - Por la Finalidad: Lege data - Por el Enfoque: Cualitativo - Por el alcance: descriptivo Diseño de Investigación No experimental; transversal.	Población Artículo 112° del código penal. Muestra Sentencia del TC contenida en la Resolución Número Seis, recaída en el Expediente N° 00573-2020-0-1801-JR-DC-11.	Análisis de documentos Expediente N° 00573- 2020-0-1801-JR-DC-11.

Anexo 02: Demanda de Acción de Amparo



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DÉCIMO PRIMER JUZGADO CONSTITUCIONAL

Sub Especializado en Asuntos Tributarios, Aduaneros e Indecopi Esquina de la Av. Colmena con Rufino Torrico - Cercado de Lima

EXPEDIENTE :

00573-2020-0-1801-JR-DC-11 MATERIA :

ACCION DE AMPARO

JUEZ : RAMIREZ

NINO DE GUZMAN, JORGE LUIS ESPECIALISTA :

ASTETE CORONADO DANIEL ALBERTO TERCERO :

ANA ESTRADA UGARTE,

CLINICA DE DERECHO PENAL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU,

SOCIEDAD PERUANA DE CUIDADOS

PALIATIVOS, DEMANDADO : MINISTERIO DE

SALUD MINSA,

PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE SALUD,

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS MINJUSDH, SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD,

DEMANDANTE : LA DEFENSORIA DEL PUEBLO,

SENTENCIA

RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS

Lima, 22 de febrero del 2021

Con el escrito de fecha 18 de febrero de 2021, presentado por la demandante y que se tiene presente.

VISTOS: El expediente, encontrándose el proceso en estado de expedir sentencia, se procede a resolver en atención a los siguientes hechos y considerandos:

I. PARTE EXPOSITIVA: DEMANDA

La Defensoría del Pueblo, representada por el Defensor del Pueblo; Walter Francisco Gutiérrez Camacho; promueve un Proceso de amparo, en beneficio de la ciudadana Ana Milagros Estrada Ugarte contra la El Ministerio de Salud, (MINSA), Seguro social de Salud (EsSalud) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a fin de que:

- A. Se declare inaplicable el artículo 112° del Colegio Penal (Dec. Leg. N° 635) que tipifica el delito de *homicidio piadoso*, para el caso de la Sra. Ana Estrada Ugarte diagnosticada con una enfermedad incurable, progresiva y degenerativa, llamada polimiositis, ello con la finalidad de que pueda elegir, sin que los terceros sean procesados penalmente, al momento en el cual las emplazadas deberán procurarle un procedimiento médico de eutanasia.
- B. Se declare inaplicable el artículo 112° del Colegio Penal (Dec. Leg. N° 635) por considerar que los efectos desplegados por dicha norma constituyen una lesión al derecho fundamental de la Sra. Ana Estrada Ugarte a una muerte digna, así como a sus derechos fundamentales a la dignidad, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y amenaza cierta a no sufrir tratos crueles e inhumanos.
- C. Se ordene a consecuencia de lo anterior a EsSalud, como entidad encargada de la gestión de las prestaciones de salud de la Sra. Ana Estrada Ugarte: (i) respetar la decisión de su representada de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia; debiéndose entender por "eutanasia" a la acción de un médico de suministrar de manera directa (oral o intravenosa), un fármaco destinado poner fin a su vida, u otra intervención médica destinada a tal fin; (ii) conformar de manera inmediata una Junta Médica interdisciplinaria que deberá iniciar sus funciones dentro de los 7 días siguientes a la emisión de la resolución judicial, para el ejercicio del derecho a la muerte en condiciones dignas, a través de la eutanasia; entre sus funciones, estará el acompañamiento integral antes y durante el proceso, el aseguramiento del respeto a la decisión de la Sra. Ana Estrada Ugarte, el establecimiento de un plan que especifique los aspectos asistenciales y técnicos de la decisión tomada y la designación de los profesionales médicos que se encargaran de la ejecución de la eutanasia; (iii) brindar todas las condiciones administrativas, prestacionales y sanitarias para el ejercicio del derecho a la muerte en condiciones dignas de la Sra. Ana Estrada Ugarte a través del procedimiento de la eutanasia. El adecuado ejercicio de este derecho implica que el procedimiento solicitado y diseñado por la Junta Médica debe ejecutarse dentro de los diez días hábiles contados a partir del momento en que ella manifieste su voluntad de poner fin a su vida. Para cuando Ana Estrada tome esa decisión, el plan debe estar aprobado y validado por el Ministerio de Salud, para lo cual el Juez deberá establecer plazos perentorios de cumplimiento obligatorio para la ejecución de etapas previas (conformación de la Junta Médica por parte de EsSalud, diseño del plan por parte de la Junta Médica, validación de plan por parte del Minsa y aprobación final de EsSalud).

- D. Se ordene a consecuencia de lo anterior al Ministerio de Salud, en tanto ente rector del sector salud: (i) respetar la decisión de la Sra. Ana Estrada Ugarte de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia; en virtud del reconocimiento judicial del derecho a la muerte en condiciones dignas, así como de los demás derechos fundamentales vinculados; (ii) validar en el plazo de 7 días hábiles el plan del procedimiento de eutanasia diseñado y propuesto por la Junta Médica para el ejercicio de la muerte en condiciones de dignidad de la Sra. Ana Estrada Ugarte.
- E. Se ordene al Ministerio de Salud que cumpla con emitir una Directiva que regule el procedimiento médico para la aplicación de la eutanasia para situaciones similares a las de la Sra. Ana Estrada Ugarte, que involucren el reconocimiento judicial del derecho fundamental a la muerte en condiciones dignas y derechos conexos.

II DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VULNERADOS

- a. Derecho a la muerte en condiciones dignas
- b. Derecho a la dignidad
- c. Derecho al libre desarrollo de la personalidad
- d. Derecho a la vida diana
- e. Derecho a no ser sometido a tratos crueles e inhumanos

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

- 1. Expone que, se pretende proteger los derechos fundamentales lesionados y amenazados de la ciudadana Ana Milagros Estrada Ugarte, quien padece de Polimiositis, enfermedad incurable, degenerativa, en etapa avanzada; que deteriora progresivamente sus capacidades motoras y la ha mantenido en un estado de dependencia alta en los últimos 12 meses.
- 2. Según el Informe Médico de un especialista en neumología, basados en la historia clínica de EsSalud de la beneficiaria y evaluaciones directas, que se pretende, sea independiente, así como de testimonios propios de Ana Estrada, (Tomados de su Blog electrónico), y diversos documentos; se tiene que su enfermedad se inició cuando tenía 12 años de edad y a los 14 se diagnosticó como Dermatomiositis, para lo cual se hicieron biopsias y otras intervenciones dolorosas y traumatizantes. Las primeras medicaciones con corticoides hincharon su cuerpo y deformaron su rostro, cuando tenía su primer enamorado, lo que en su momento le parecía lo más importante frente a las continuas citas médicas. A los 20 años, la debilidad muscular, la obligó a usar silla de ruedas. Recibió medicaciones con cortico-esteroides, azatioprina, metotrexato, ciclosporina y otros, pese a lo cual la enfermedad ha progresado. Textualmente dice:
 - "...mientras no tenga el poder de mi libertad seguiré viviendo presa en un cuerpo que se está deteriorando cada minuto y que me atará a mi cama conectada las 24 horas al respirador y empezarán las úlceras en la piel que no son otra cosa que heridas que se expanden y profundizan hasta que se logra ver el hueso. Esas heridas supurarán pus y olerán a podrido y el tejido se va a necrosar. Pero eso será solo el comienzo de sendas infecciones y más medios invasivos y amputaciones y no moriré. Ese infierno será eterno y, repito, mi mente estará completamente lúcida para vivir cada dolor en una cama de hospital sola y queriendo morir."
- 3. Ha recurrido a consultas en los Estados Unidos, con el mismo diagnóstico y previsiones que en el medio local, mientras el tratamiento, (con inmunoglobulina y otros), ha resultado infructuoso e interrumpido por periodos ante la falta de respuesta. El 2015, empezó a tener problemas frecuentes por acumulación de secreciones respiratorias, por falta de movilización.

En abril de 2019, Ana Estrada Escribió:

"Esta búsqueda por la muerte se convirtió paradójicamente, en una motivación para vivir. Todavía no he tenido un proceso infeccioso este año y no sé cuándo lo tendré, pero lo que digo es que si yo tuviera el "permiso" del Estado para morir, estoy segura que esos procesos infecciosos no serían así de terribles y los llevaría en paz, con esperanza y libertad".

- 4. En julio del 2015 la Sra. Ana Estrada Ugarte desarrolló una falla respiratoria que la llevó a ser hospitalizada en cuidados intensivos durante 6 meses, en los que tuvo complicaciones de infecciones respiratorias y fue intubada, le hicieron catéteres endovenosos y se le hizo una traqueostomía y gastrostomía, para respirar y alimentarse, respectivamente. Consideró ese proceso, traumático; ya que le generó total dependencia, al punto que decidió raparse el cabello, pues era doloroso hasta el lavado de cabellos que se le hacía, con guantes de jebe, con mucha premura y dolor y que en conjunto, significó que perdiera todo lo que significó su vida anterior, además del continuo riesgo de infecciones que significa la traqueostomía (Neumonías, traqueítis, obstrucción de cánula, etc.), y la gastrostomía; todo lo cual no significa que mejore su salud general.
- 5. Posteriormente, se indujo a un programa denominado Clínica en casa, por el cual es monitorizada por EsSalud, con médicos, psicólogos, nutricionistas, etc. Ello significa que ha perdido su intimidad y privacidad, no tiene un momento a solas, perdió su trabajo, lo que considera: "mi propia muerte". Al retorno a su domicilio pesaba 35 kilos, rapada, con la atención de numerosas personas para su instalación y coordinaciones, todo lo cual fue traumatizante.

Considera también una afectación al libre desarrollo de su personalidad, lo que incluye el ejercicio de su sexualidad, pues entre otras cosas; el Hospital Rebagliatti, dispuso que firmara un escrito legalizado por su abogado y un médico, para consignar su responsabilidad por cualquier incidente que derive de tener relaciones sexuales.

- 6. De manera continua requiere el uso de un respirador artificial, pues solo puede espirar sin ese aditamento 4 o 6 horas al día como máximo, recibe tratamientos contra las infecciones y exámenes auxiliares continuos. Es dependiente para sus actividades de vida diaria, como su aseo personal, necesidades fisiológicas, su alimentación, usa una silla de ruedas. No puede trasladarse de la silla a su cama por sí sola.
- 7. Su diagnóstico es de miopatía primaria, conocida como polimiositis. La causa es inmunológica. En teoría, el sistema inmunológico, encargado de defender el organismo humano, rechaza y ataca sus propios músculos, lo que termina dañándolos. Por ello, se le aplican medicamentos inmunosupresores. Hasta la fecha, su organismo no ha respondido positivamente a los diversos tratamientos.
- 8. El pronóstico de su enfermedad es negativo. Es probable que su alimentación por sonda sea más frecuente o permanente, el uso de respirador, igualmente.
 - Frente a ello, es que solicita tener el control de su vida, a fin de poder ejercer el derecho a una muerte en condiciones dignas, lo que describe textualmente:
 - "...les diré de mi deseo de morir porque llevo 3 años investigando, preguntando, conectando, elucubrando mil formas de hallar la muerte sin que mi familia salga perjudicada. Y hasta he tratado de ahorrar (ingenuamente) para ir a Suiza. Pues bien, me cansé y decido que lo último que me queda por hacer es contarles de mi historia y mi lucha y así encontrar apoyo no solo de los que me conocen sino también de cualquiera que crea en el derecho a la libertad. Creo que no hay mayor gesto de amor que pide ayudar y apoyar a un ser amado a hallar su muerte y ponerla fin al sufrimiento. Es una decisión que tomé el día que volvía a UCI por segunda vez por una recaída con neumonía. Cuando la ambulancia llegó a mi casa para

- llevarme al hospital, mi hermano llegó en ese instante y escuché que dijo a todos que esperen un momento, pidió a la enfermera que salga del cuarto y nos quedamos a solas. Se acercó a mi cama y oramos."
- 9. El proceso natural de deterioro de su organismo no será detenido por las medidas de soporte vital que recibe (como respiradores, sondas, etc.) y serán insuficientes para mantenerla con vida. Requerirá de mayor sofisticación (máquinas más complejas), mayor dolor, incomodidad y sufrimiento físico y psicológico. y ello generará complicaciones causadas por la misma terapia. Sin embargo, dice:
 - "¿Por qué querer morir si soy capaz de encarnar la fiera tibieza del amor hasta llegar a explotar de felicidad? ¿Tan egoísta soy que no pienso en los que me aman? ¿Estoy deprimida y solo necesitaría antidepresivos para pensar "positivo"? ¿A dónde se fue la fuerza de la "guerrera"", luchadora"", "ejemplo y lección-de-vida"? Pues aquí estoy, con más fuerza que nunca para pechar y gritar al mundo que quiero mi derecho a elegir y decidir sobre mi vida y mi cuerpo. Y, les tengo noticias, lo intenté, pero no lo puedo hacer sola. Por eso hago este blog y la publicación de mi vida que no solo tratará de mi enfermedad sino también de la niña deprimida y sola, de la adolescente perdida y, finalmente, de todo este camino recorrido hasta aquí?"
- 10. Busca que se reconozca, proteja y garantice los derechos que, están sido lesionados con la prohibición penal: precisa que no se trata de buscar la muerte a como dé lugar, sino de decidir sobre el fin de la vida como resultado del ejercicio de un derecho y por ende, de una decisión libre, informada y legitimada en un Estado Social y Democrático de Derecho, como es el Perú.

CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Procuraduría del MINSA.

- 11. Se apersona el Procurador Público y contesta la demanda, solicitando se declare la Improcedencia de la demanda, exponiendo que; en este caso se trata de establecer si corresponde a la demandante el derecho a poner punto final a su vida y elija, cómo, cuándo y dónde morir. Al respecto, el Numeral 1 del artículo 2° de la Constitución Política, establece el derecho a la vida, su identidad, integridad moral, psíquica y física, su libre desarrollo y bienestar y a su vez el artículo 1° establece que el fin supremo del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. El Código Penal, en su artículo 112 regula el homicidio piadoso, sancionando con pena privativa de libertad no mayor a tresaños.
- 12. Así, la Señorita Ana Estrada, dado su grave estado de salud, solicita la aplicación de la eutanasia, siendo que, para su caso, solicita que este acto sea llevado a cabo por un médico, lo que no está permitido, pues la norma dice "El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de tres años". La norma hace referencia a una enfermedad incurable y ese es uno de los escollos desde el punto de vista legal que sería un impedimento para que el Juez Constitucional pueda declarar la inaplicación del citado artículo para el caso concreto. Empero, hay enfermedades que, siendo incurables, pueden ser tratadas, como el asma, la gripe, etc. La polimiositis, resulta ser una enfermedad incurable conforme lo refieren los médicos y expertos consignados en la demanda; sin embargo, pese a no ser una enfermedad que esté en fase terminal (no hay evidencia que dicha enfermedad esté en esa etapa) es una enfermedad cuyas características en el caso concreto, no encajarían de manera puntual en el art. 112°, nos habla de intolerables dolores; y según la demanda, la Señorita. Ana estaría sometida a tratos crueles e inhumanos; sin embargo, en la demanda, no acredita y no aporta prueba o evidencia que dicha enfermedad le haya causado intolerables dolores, sino que como consecuencia de la enfermedad incurable que padece viene siendo sometida a tratos crueles e inhumanos; por lo que no se ajustaría a la norma, cuya inaplicación se demanda.

- 13. Si bien es cierto el artículo 112° del Código Penal, es una norma autoaplicativa, no es cierto que dicha disposición crea una situación jurídica inconstitucional, que impida el derecho de la Sra. Ana Estrada Ugarte a tomar el control sobre su vida y disponer de manera consciente poner fin a sus sufrimientos por la enfermedad incurable y degenerativa que padece, a ejercer su derecho a una muerte digna.
- 14. La demandante solicita un procedimiento a seguir, en caso se declare fundada la inaplicación del artículo 112° del C.P. establecer plazos perentorios de cumplimiento obligatorio para la ejecución, de las etapas previas (conformación de la Junta Médica por parte de EsSalud, diseño del plan por parte de la Junta Médica, validación del plan por parte del Minsa y aprobación final de EsSalud). Luego; que el Juez ordene al Ministerio de Salud: a) Respetar la decisión de la Sra. Ana Estraga; b) Validaren el plazo de 7 días hábiles del plan de procedimiento de la eutanasia diseñado y propuesto por la Junta Médica. En ese sentido, señala que el MINSA no está facultada a realizar los procedimientos para la ejecución respecto de la inaplicación del artículo 112 del C.P. En tanto que, conforme al literal a) del artículo 5° del Decreto Legislativo 1161, el Ministerio de Salud es el órgano rector de la política de salud a nivel nacional, y como tal está facultado a formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional (...) aplicable a todos los niveles de gobierno; siempre que esta no transgreda la normatividad vigente. Nótese, además que, la Sra. Estrada es una paciente atendida por ESSALUD; entidad que finalmente de ser el caso, le correspondería la conformación de la Junta Médica, la elaboración del protocolo y otros para su ejecución.
- 15. El Ministerio de Salud, como órgano rector de la política de salud a nivel nacional, no puede dictar normas, ni aprobar, ni validar procedimientos de una Junta Médica para un caso particular, porque ello no forma parte de la política de salud que, es de carácter general a nivel nacional, y menos es aceptable que el Juez Constitucional ordene al Ministerio de Salud a cumplir con el procedimiento médico aprobado por una Junta Médica para un caso concreto; ello porque es contrario a la norma, pretender que el MINSA actúe en contra de las facultades que tiene como órgano rector.
- 16. Respecto de la pretensión de que el Ministerio de Salud cumpla con emitir una Directiva que regule el procedimiento médico para la aplicación de la eutanasia para situaciones similares a las de la Sra. Ana Estrada Ugarte, que involucren el reconocimiento judicial del derecho fundamental a la muerte en condiciones dignas y derechos conexos, se opone, en tanto ello no puede hacerse mediante una Directiva y menos de manera general. En todo caso, el Juez Constitucional estaría facultado a dictar una sentencia exhortativa para que el Poder Legislativo legisle sobre la eutanasia.
- 17. Por el artículo 4° de la Ley 26842, Ley General de Salud, el Estado está obligado a preservar la vida y la salud de los ciudadanos, bajo ciertos parámetros como es, que el tratamiento médico o quirúrgico tiene que ser informado y la negativa del paciente al tratamiento o intervención exime de responsabilidad al médico tratante y a la entidad. En ese sentido discrepan de los fundamentos de la demanda, en el extremo negado que la interpretación del demandante sea cierta, ello no es suficiente, pues para ejercer plenamente sus derechos a la dignidad, a la vida digna, a decidir sobre cuándo, cómo y dónde acabar con su vida, vía la eutanasia, se requiere una norma expresa que desarrolle el derecho a la eutanasia.
- 18. Considera que no podría el Ministerio de Salud emitir normas o directivas generales a partir de un caso particular, porque el Minsa tiene como función central ser ente rector en materia de salud, es decir está facultado a formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional (...) aplicable a todos los niveles de gobierno. El Minsa solo podría emitir los, protocolos, directivas y el tratamiento a seguir, siempre que la eutanasia sea legislada en nuestro país.

- El Juez constitucional solo podría, emitir el protocolo o directiva para el caso concreto, la misma que no podría ser de carácter general o que tenga efectos extensivos para otros casos similares.
- 19. Conforme al Código de Deontología Forense del Colegio Médico del Perú y del Código Internacional de Ética Médica elaborado por la Asociación Médica Mundial, sostienen la plena vigencia del Juramento Hipocrático por el que *debe cuidarse la vida de los pacientes y enfermos a toda costa, y debe respetarse el proceso natural de la muerte*, sin acudir a métodos de acortamiento de la vida (eutanasia).
- 20. Existe debate sobre el concepto o significado de dignidad humana y calidad de vida. Unos identifican lo indigno, como la carencia o falta de capacidad para la autodeterminación frente a circunstancias difíciles como las que atraviesa la Sra. Estrada. Otro sector de la doctrina sostiene que la dignidad humana no puede ser reducida a la calidad de vida, en tanto ésta se mide por las condiciones físicas y psíquicas que permiten el desarrollo armónico de la personalidad, pues podría haber condiciones físicas y psíquicas contrarias a la dignidad humana, pero no la convierten necesariamente en una vida indigna; por lo que este sector de la doctrina concluye que no sería ética la eliminación deliberada de la vida porque la dignidad no dependería de las condiciones físicas o psíquicas precarias.

EXCEPCIÓN Y CONTESTACIÓN DE DEMANDA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.

- 21. Deduce excepción de *falta de legitimidad para obrar pasiva* del Ministerio de justicia y derechos humanos. Fundamenta este medio de defensa expresando que las pretensiones de la demanda, tienen por finalidad la inaplicación del artículo 112 del Código Penal y actos de ejecución relacionados, pero en ninguno de estos, se observa que el Ministerio de Justicia deba realizar un acto de ejecución o pueda afectarlo, que el MINJUS haya afectado alguno de los derechos de la demandante y no ha tenido intervención alguna en la etapa previa al proceso judicial, por lo que este emplazamiento es un grave error.
- 22. Señala asimismo que, de acuerdo al criterio de la demandante, se le emplaza porque este sector refrendó la norma o que sería el defensor de la constitucionalidad de las normas. Así, el MINJUS no necesariamente debe ser emplazado en los procesos donde se haga control difuso de las normas, como ha ocurrido en innumerables casos. El control difuso no es un petitorio en sí mismo, sino una institución que debe surgir en el debate del caso concreto, donde haya una norma legal relevante para resolver el caso que viole los derechos fundamentales o principio constitucionales. Es distinto el caso de los procesos constitucionales de control normativo, donde el único debate es la constitucionalidad de las leyes en abstracto, como la Acción Popular.

Sobre el fondo.

- 23. Conforme señala la propia demandante, no existe una regulación nacional sobre la Eutanasia, por lo que recurre a esta vía. Así, pretende que la sentencia sea por sí misma un protocolo médico y regulando el procedimiento administrativo, de modo tal que, el Juez Constitucional, se convierta en órgano legislador, lo que contraviene a nuestro sistema democrático.
- 24. Fundamenta que el Amparo no es un procedimiento para constituir derechos. El Juez no legisla, ello afecta el principio de corrección funcional como límite de la interpretación de los derechos fundamentales que, supone que el Juez no puede desvirtuar las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales. Consideran así, que, si no existe un marco legal, no es posible que el Juez resuelva en el sentido que se solicita. El marco legal debe dictarlo el legislativo.

- 25. Expone que, en el caso de Colombia, que cita la demanda, existió en efecto, una decisión del Tribunal Constitucional, pero que esta resolvió, exhortar al legislativo para que legisle este derecho y solo con una norma dictada por el legislativo, se hizo posible el ejercicio del derecho comotal.
- 26. Expone asimismo que, la Carta Americana de Derechos Humanos no regula ni la Corte se ha pronunciado en este extremo, por lo que no puede haber afectación de este derecho en el plano convencional. Añade que el Tribunal Europeo se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el tema de la muerte digna, sin embargo, estudiada su jurisprudencia, se observa que tiene a dejar que sean los Estados nacionales, los que regulen a través de su órgano legislativo, lo que en efecto han hecho varios Estados, mientras que otros no, lo que en ningún caso significa la afectación de los derechos convencionales.

 Bajo esos fundamentos, se considera que, la falta de regulación, por sí misma no viola derecho fundamental alguno, ni de la Constitución ni de la Carta Americana de Derechos Humanos.

CONTESTACIÓN DE DEMANDA. PROCURADOR PUBLICO DE ESSALUD.

- 27. Se apersona el Procurador y expone que, de acuerdo al artículo 1° de la Ley N° 27056, la finalidad de ESSALUD consiste en brindar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones sociales que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos, que en el artículo 39° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se establece que ESSALUD constituye una entidad administradora de fondos intangibles de la seguridad social, distinguiéndola así de las entidades que realizan actividad empresarial, esto es, de las empresas del Estado. Sobre el principio de legalidad y su cumplimiento por parte de las entidades públicas. El Tribunal Constitucional ha señalado se tiene tres exigencias; existencia de la ley, que esta sea previa y describa un hecho determinado, Asimismo, según la Corte Interamericana este principio exige que en la elaboración de los tipos penales exista una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales.
- 28. El subprincipio de tipicidad o taxatividad es otra de las manifestaciones o concreciones del principio-derecho de legalidad que tiene como destinatarios al legislador penal o administrativo que, exige la precisa definición de la conducta que la ley o norma con rango de ley considera como delito o falta. ESSALUD, como entidad pública del Gobierno Nacional, se encuentra inexorablemente sujeta al Principio de Legalidad. Todo lo que haga o decida hacer debe tener como fundamento una disposición expresa que le asigne la competencia para poder actuar de tal o cual manera. El funcionario de la administración en ejercicio de sus funciones solo puede hacer lo que la ley le permite hacer y está impedido de hacer lo que ella no le faculta. Es un mero "aplicador literal" de la norma. Por otro lado, ESSALUD no sólo se encuentra sujeto a las normas que lo regulan sino también a las políticas nacionales de salud que el Estado emite a través de su ente rector el Ministerio de Salud, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Constitución Política del Perú, el artículo 7° de la Constitución Política del Perú, que establece que todas las personas tienen derecho a la protección de su salud, medio familiar y comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa.
- 29. ESSALUD es un organismo público administrador de fondos intangibles de la seguridad social con personería jurídica de derecho público interno y, como tal, sujeto al Principio de Legalidad, sólo puede emitir directivas y protocolos médicos dentro los alcances de las disposiciones normativas y reglamentos previamente

emitidos por el Poder Legislativo. En esa misma línea, la sola despenalización de la responsabilidad penal de la persona quien por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, no sostiene ni justifica la emisión de directivas y/o protocolos por parte de ESSALUD, ya que necesita de una norma que expresamente desarrolle la figura de la eutanasia como parte de nuestro ordenamiento jurídico. La Administración se sujeta especialmente a la Ley, entendida como norma jurídica emitida por quien representa a la sociedad en su conjunto, vale decir, el Congreso de la República. Lo que ocurre es que en el Estado de Derecho se ubica a la Administración como esencialmente ejecutiva, encontrando en la ley su fundamento y el límite de su acción. ESSALUD, a diferencia de los particulares, no goza de la llamada libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe) dado que solo puede hacer aquello para lo cual está facultada en forma expresa; y no cuenta con norma que la habilite brindar asistencia para finalizar la vida de una persona, cuando su norma de creación dispone todo lo contrario.

"La elaboración de un procedimiento médico se encuentra sujeto a la norma técnica de salud para la elaboración y uso de guías de práctica clínica del Ministerio de Salud.

- 30. Las Guías de Práctica Clínica que aprueba el Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial, son documentos normativos correspondiente al tipo de las Guías Técnicas, y que se aboca al diagnóstico o tratamiento de un problema clínico considerado por la Autoridad Nacional de Salud como un problema de salud pública o una prioridad sanitaria nacional o regional, y que contiene recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica aplicable, desarrolladas sistemáticamente de modo que orienten y faciliten el proceso de toma de decisiones al personal profesional para una apropiada y oportuna atención de salud. Se basa en la revisión científica, tecnológica y la experiencia sistematizada y documentada, sobre el tema que aborda. La norma técnica en mención es de aplicación, entre otros prestadores de servicios de salud, a ESSALUD, por lo que, encontrándose dentro de esa disposición legal, emite su directiva con la finalidad de establecer normas, criterios y procedimientos, dentro del marco de acción establecido por el ente rector. La creación e implementación de un procedimiento médico se sujeta a los lineamientos del ente rector, (MINSA), y estas a su vez, a las políticas nacionales, por lo que EsSalud no puede aprobar procedimientos, juntas médicas ni normas de salud. La sola despenalización es insuficiente. Las normas técnicas nacen por ley N° 26842, Ley general de Salud y el Decreto legislativo 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, que regula lo antes expresado.
- 31. No existe una guía ni norma técnica que recoja la figura de la eutanasia. No existen estudios oficiales, en los que se haya identificado los criterios clínicos que definan la procedencia del procedimiento, los pronósticos de los tipos de enfermedades que pueden ser sujeto de este tipo prácticas, las inclusiones y las exclusiones médicas, los tipos de medicamentos a utilizar que garanticen que el procedimiento de la eutanasia sea corto y certero, el procedimiento para la expresión indubitable de la aceptación voluntaria del profesional médico que aplicará el fármaco con el que le quitará la vida a otra persona, etc. En ese sentido, al no existir una norma que expresamente reconozca a la eutanasia, no se han desarrollado procedimientos médicos en los que se establezca el protocolo de acción del personal médico; teniendo en cuenta que un protocolo médico no es una seguidilla de acciones a realizar sino una norma técnica que es resultado del trabajo de un grupo multidisciplinario que se encargue de examinar de manera sistemática cuatro grandes temas íntimamente relacionados a la eutanasia: la correcta definición de intolerable dolor (en esta valoración se reúne tanto la percepción del médico tratante como la expresión del solicitante), la medición del carácter irremediable e inevitablemente incurable del padecimiento, la verificación de la competencia mental y la preservación del juicio, así como los procedimientos más correctos y seguros que garanticen la muerte, en tiempo corto y sin sufrimiento.

- 32. La creación e implementación de un procedimiento médico se sujeta a los lineamientos del ente rector, (MINSA), y estas a su vez, a las políticas nacionales, por lo que EsSalud no puede aprobar procedimientos, juntas médicas ni normas de salud. La sola despenalización es insuficiente. Las normas técnicas nacen por ley N° 26842, Ley general de Salud y el Decreto legislativo 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, que regula lo antes expresado. Se pretende que el Juez Constitucional se convierta en un legislador positivo, creando un nuevo derecho con rango constitucional, soslayando el procedimiento legislativo y con ello vulnerando el principio de separación de poderes.
- 33. Considera asimismo que, se afectan los principios de Separación de poderes y Corrección funcional. El Juez al realizar su labor de interpretación, no debe desvirtuar las funciones y competencias que la Constitución Política del Estado asigna de manera distinta a cada órgano de la Administración. El órgano jurisdiccional puede emitir Acuerdos Plenarios o sentencias con condición de precedentes vinculantes, ello obedece a una necesidad de interpretación legislativa de normas ya existentes, labor distinta de la labor principal del Poder Legislativo; expedir leyes con mandato y fuerza constitucional y legal. La regulación legal de la eutanasia en Perú, es competencia del legislador. Tampoco es amparable el pedido de la emisión de una Directiva que regule el procedimiento médico para la aplicación de la eutanasia para situaciones similares a las de la Sra. Ana Estrada Ugarte; porque es incongruente con la naturaleza jurídica del proceso de amparo.

Amicus Curiae. Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos.

Se ha apersonado al proceso la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, solicitando incorporarse en calidad de Amicus Curae, lo que esta judicatura accede, considerando que deben escucharse el mayor número de voces. La entidad agrupa a profesionales de la medicina, (Médicos, Enfermera(o)s, Psicólogo(a)s, y Trabajadores Sociales), que se encargan de brindar calidad de vida y evitar el sufrimiento en pacientes con enfermedades que limitan o acortan su vida, especialmente en fase de terminales. Se señala que, existen situaciones en las que en el intento de salvar la vida y salud de la persona se puede caer en situaciones de encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, por lo que es preciso tener presente la proporcionalidad entre la eficacia del tratamiento y el sufrimiento del paciente, así como del consentimiento informado de éste. El consentimiento, debe ser en principio consciente y expreso, incluso mediante expresión de voluntad anticipada, empero, pueden darse situaciones en las que el paciente no pudo o no está en situación de otorgar su expresión de voluntad, como las situaciones de emergencia, en las que se toma la voluntad de los familiares o en todo caso, se considera la expresión de la voluntad tácita, considerando que toda persona, tiene la voluntad de conservar su vida, siendo el médico que aplica el tratamiento, con criterios de proporcionalidad; existiendo por ello el concepto de Adecuación del esfuerzo terapéutico. Uno de los instrumentos, es la sedación paliativa, es la administración de fármacos a un paciente cuya muerte esta próxima reduciendo la conciencia para aliviar el sufrimiento, acción que requiere voluntad expresa, en sus diversas formas.

34. Sobre la autonomía señalan que, en efecto, la muerte digna es un derecho, siendo que la dignidad alcanza hasta más allá de la muerte. El Código Civil proscribe incluso la disposición del cadáver, pero les preocupa que se confunda ello, con la eutanasia, como único mecanismo de muerte digna. No es lo mismo pedirlo sano que pedirlo enfermo, pues la enfermedad condiciona la variabilidad de la manifestación de voluntad, siendo que en 12 horas una persona puede variar en un 30% y en un mes un 70%, por diversos factores.

- 35. La voluntad del paciente está regulada en el Reglamento de Ley 29414, articulo 16 con el reconocimiento del derecho de negarse a recibir o continuar un tratamiento siempre que conozca el plan terapéutico contra la enfermedad, lo que no implica el abandono de los cuidados, más bien, se disponen los programas de acompañamiento y cuidados paliativos según sea el caso.
- 36. Los Comités de Ética Clínica, permiten determinar el tratamiento médico, por ejemplo, cuando no hay suficientes máquinas para mayor demanda de enfermos, o cuando un determinado tratamiento generará mala calidad de vida del paciente, en cuyo caso, este o en su defecto, su familia tienen derecho a rechazarlo, que asimismo ninguna persona puede ser excluida, por ejemplo, por razón de su discapacidad. Por ello, consideran que lo resuelto en esta causa podría generar conflictos éticos entre el personal médico. Como la objeción de conciencia, las medidas para garantizar voluntades sin vicios. En nuestro país existe únicamente un Comité de Ética Clínica que funciona en el Hospital del Niño, dedicada a la resolución y atención de estos conflictos en pediatría, por lo que consideran que es preciso analizar la pretensión desde la perspectiva de los médicos quienes serían los ejecutantes.
- 37. El Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú en su artículo 72 indica:

"El médico no debe propiciar el encarnizamiento terapéutico. Ha de entenderse por tal, la adopción de medidas terapéuticas desproporcionadas a la naturaleza del caso. El médico debe propiciar el respeto a las directivas anticipadas del paciente en lo referente al cuidado de su vida. El médico no debe realizar acciones cuyo objetivo directo sea la muerte de la persona".

Con lo cual de la demanda va más allá de un reconocimiento de un derecho, enfrentando lo ético y lo jurídico.

38. Los Cuidados Paliativos se plantean como una forma de atención integral, holística de personas con enfermedades severas que limitan o acortan sus vidas, que busca tener impacto sobre la calidad de vida y el alivio del sufrimiento, y que reconocen a la muerte como un proceso natural. Además son: "(...) Son fundamentales para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas, aumentar su alivio y reforzar su dignidad humana (...)".

Los CP comprenden los siguientes aspectos:

- Políticas apropiadas
- Disponibilidad y acceso a medicamentos esenciales para dolor y CP
- Educación para profesionales de salud y público en general
- Implementación de CP en todos los niveles de atención.
- 39. El 2018, la Ley 30846, Ley que creó el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No oncológicas, cuya implementación permitirá brindar los cuidados paliativos a las personas que experimentan dolor y sufren como consecuencia de enfermedades crónicas en fase terminal, mediante la atención de sus necesidades físicas, psicológicas, espirituales y sociales, con apoyo a su familia.

La OMS declaró el 2014 los Cuidados Paliativos como un derecho humano, lo que hace vinculante el desarrollo de esta forma de atención al Estado Peruano, de esta manera se estaría reconociendo la necesidad de un sector de la población que actualmente tiene dolor, y sufrimiento intenso, a que se le brinden los cuidados médicos adecuados y proporcionales a fin de tener una muerte digna. Sin embargo, el desarrollo de los CP en el país ha sido limitado, las instituciones que brindan CP están en su mayoría concentradas en la capital y corresponden a una IPRESS del tercer nivel de atención.

Inicialmente era brindado a pacientes oncológicos, pero después se reconoce la necesidad de extender

a otras enfermedades.

- 40. Los CP, al tratar asuntos del final de la vida, donde se toman decisiones difíciles, toman parte importante en la discusión sobre morir con dignidad. Su normativa tiene un referente ético normativo que lo sustenta respetando los Principios bioéticos que los rigen, y los Derechos de los pacientes, curadores o tutores y las familias respectivamente.
 - Los beneficios de los CP, entre otros son; la menor necesidad de ingresos a Unidades de Cuidados Intensivos de pacientes en la etapa final de la enfermedad, permitiendo la compañía familiar y; el menor uso de tratamientos complejos y de alto costo, que lo que hacen es prolongar agonías y sufrimiento.
- 41. La muerte digna no es sinónimo de eutanasia, sino que es mucho más congruente con la atención paliativa, lo que podría ayudar a desistir de una probable decisión por la eutanasia; esto con atención a que la voluntad por adelantar la muerte puede estar condicionada. La voluntad de Eutanasia en un paciente con enfermedad en fase terminal es variable constantemente por factores psicológicos, ambientales, familiares, lo cual, con su ejecución apresurada, causa un daño irreparable.

Amicus Curiae PUCP

- 42. La Clínica Jurídica en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido presentada también por la propia demandante como Amicus Curiae, con un informe en favor de la beneficiaria. Para ello expone que la libertad del individuo frente a los abusos del poder es una preocupación vigente, en el contexto del Estado Social y Democrático el Derecho Penal y forma parte central de esta actividad estatal, estando legitimado y limitado por el derecho del individuo. El Estado para llevar a cabo tales actividades de persecución penal tiene como límite al que debe atenerse el legislador penal se contiene en las disposiciones constitucionales.
- 43. La dignidad humana, conforme a la teoría kantiana prohíbe al Estado a instrumentalizar a las personas, y le obliga a tratarlas como fines, más no medios. La autodeterminación de la persona humana es así el límite principal. Esta debe ser entendida como la libertad y capacidad de las personas para tomar decisiones sobre sí mismas, lo que consecuentemente implica aceptar o rechazar determinadas situaciones o intervenciones que pueden incidir en sus derechos y libertades. Así se establece el consentimiento informado en el ámbito médico que consiste en una decisión previa de aceptar o someterse a un acto médico en sentido amplio, obtenida de manera libre (sin amenazas, coerción, inducción o alicientes impropios), manifestada con posterioridad al acceso y obtención de información adecuada, completa, fidedigna, comprensible y accesible. El consentimiento genera la exclusión de la responsabilidad penal, no especifica si ello se debe a una exclusión de tipicidad o antijuridicidad. Estos conceptos sonpropios de la teoría del delito. Por un lado, una conducta es típica cuando en ella se presentan todos los elementos del tipo penal, (objetivos y subjetivos). Por otro lado, la antijuridicidad consiste en la contradicción que existe entre la conducta típica y el ordenamiento jurídico, en específico, el mandato normativo. En esa línea, los vicios de voluntad (error, engaño y fuerza) serían irrelevantes para el acuerdo, pero no para el consentimiento, pues este último, como consecuencia de estos vicios, devendría en ineficaz.

Para la validez del consentimiento informado es preciso por ello el carácter previo, que sea libre, sin coacción y sea de carácter pleno e informado.

44. Sobre la disponibilidad del bien jurídico: vida, sostiene que, existe una tesis que sostiene que el Estado debe

- proteger la vida, aún en contra de la voluntad de su titular, de acuerdo con esta tesis, prevalece la voluntad del Estado, que el derecho a la vida no implicaría un derecho a morir.
- 45. Sostiene que uno de los hitos de la tesis de la autodeterminación y disposición del bien jurídico: vida, se da en la Sentencia española 120/1990, de fecha 27 de junio de 1990, que se pronuncia sobre el caso de la huelga de hambre en el Centro Penitenciario Soria de Madrid. Esta huelga puso en tela de juicio la intervención paternalista del Estado español para proteger a sus ciudadanos, al alimentar forzosamente a los participantes de la huelga, desconociendo la libertad de decidir que estos tienen sobre su propia vida y muerte.
- 46. El presunto bien jurídico protegido en el artículo 112 del código penal, debe ser analizando a partir de lo que el Tribunal Constitucional, considera como que, el bien jurídico constituye un mecanismo de limitación, así como un mecanismo de legitimación de la intervención penal. Respecto a la limitación, el bien jurídico exige que la ley penal sólo describa conductas merecedoras de pena, sea porque lesionan un bien jurídico o lo ponen en peligro.
- 47. Para explicar el delito de homicidio piadoso expone que debe hacerse un primer acercamiento: vida, por pertenecer, sistemáticamente el delito de homicidio piadoso, al capítulo de delitos contra la vida. Un segundo acercamiento: la concepción sacrosanta de vida, lo que explica la forma de protección de la legislación penal actual. De ello concluyen que, es una intromisión ilegítima a la esfera de autonomía de la víctima consideran que la vida desprovista de autonomía no puede ser objeto de protección del derecho penal. Por el contrario, la autonomía es un presupuesto para la vida concebida como aquella que implica la dignidad de principio a fin. En ese sentido, resulta errónea la aproximación del Código Penal cuando pretende proteger a la vida como una entidad biológica, sin tomar en consideración la dignidad y la autonomía de la persona. Por ello señalan que el artículo 112 del c.p. es incompatible con un Estado Constitucional de derecho. La vida es un bien jurídico inherentemente ligado a la dignidad y la voluntad. No es solo un sustrato biológico. Desde una dimensión meramente biológica, al momento de prohibir y sancionar el delito de homicidio piadoso en el artículo 112º del Código Penal contraviene el contenido que debe tener todo bien jurídico para justificar la intervención del Derecho Penal en un Estado Constitucional de Derecho, basado en la autonomía y la libertad de la persona.
- 48. La protección que debe tener el bien jurídico penal "vida" trasciende del sentido meramente biológico de esta y abarca un fundamento ius-filosófico inescindible de la dignidad y la autonomía de la voluntad. La aplicación del artículo 112º del Código Penal, por tanto, antes que proteger el derecho a la vida (digna), la desprotege, si la entendemos bajo estos términos. De lo anterior se sigue que es perfectamente compatible con los fundamentos del Derecho Penal democrático que ampara la Constitución Política del Perú, la inaplicación del delito de homicidio por piedad en el caso de la Sra. Ana Estrada Ugarte, a efectos de proteger los derechos fundamentales que dicha ley estaría lesionando y amenazando.

Apoyos y salvaguardias y declaración de penúltima voluntad.

49. Con fecha 18 de diciembre de 2020, doña Ana Estrada Ugarte ha otorgado Escritura Pública designando apoyos y salvaguardias, adicionalmente en el mismo documento ha expresado su voluntad de rechazar tratamientos que prolonguen su vida de manera que ella considera injustificada, así como tratamientos, operaciones invasivas que no garanticen un tratamiento efectivo y finalmente, en caso de que se apruebe su pretensión de otorgársele el derecho a la muerte digna o se legalice está otorga facultades a sus apoyos a efecto de que realicen los trámites necesarios para efectivizar y dar cumplimiento a su voluntad.

El documento ah sido adjuntado a un escrito presentado ante esta judicatura. Con lo que la causa está en situación de sentenciarse.

II ANALISIS.

EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR DE LA DEMANDADA.

- 50. El Procurador de del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deduce excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandada, expresando que, de las pretensiones de la demanda, no se observa que el Ministerio de Justicia deba realizar un acto de ejecución o pueda afectarlo, que tampoco ha afectado alguno de los derechos de la demandante y no ha tenido intervención alguna en la etapa previa al proceso judicial. El MINJUS no necesariamente debe ser emplazado en los procesos donde se haga control difuso de las normas. El control difuso no es un petitorio en sí mismo, sino una institución que debe surgir en el debate del caso concreto. Es distinto el caso de los procesos constitucionales de control normativo, donde el único debate es la constitucionalidad de las leyes en abstracto, como la de Acción Popular.
- 51. En relación a la excepción de falta de legitimidad para obrar de la emplazada; se tiene que, esta judicatura admitió la demanda, aceptando el emplazamiento de este Ministerio, en tanto se solicita, la inaplicación de normas del Código Penal, argumentando afectaciones a los derechos constitucionales invocados.

 Debe tenerse presente que, el artículo 4° de la Ley 29809, Ley de Organización y funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, establece, en su **artículo 4**° el Ámbito de competencia, precisando en el inciso:
 - F) Defensa, coherencia y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico.

Por lo que, debe entenderse que es competencia de este Ministerio, pronunciarse sobre el cuestionamiento a las normas de todo el ordenamiento jurídico y, muy en especial de normas relacionadas a su sector, como es el Código Penal, **razón por la que debe desestimarse la excepción deducida**, puesto que la Ley, de manera expresa, responsabiliza a este sector, la defensa del ordenamiento jurídico.

OTRAS CUESTIONES DE PROCEDENCIA.

Principios de Separación de poderes y Corrección funcional.

- 52. Las demandadas, sin proponer una excepción formal, han señalado, de manera genérica que, las pretensiones propuestas por la parte demandante implicarían una afectación a los principios de Separación de Poderes y Corrección Funcional, en tanto, no solo se propone la inaplicación para el caso concreto, de un artículo del Código Penal, sino la generación de una norma que establezca el derecho a la denominada muerte digna que, es la pretensión principal de la demandante y en tanto, no solo no está regulado ni permitido, en la legislación peruana, siendo que, por el contrario, está penado en el código penal y que, asimismo, son parte de sus pretensiones; la generación de protocolos para que se hagan efectivas sus propias pretensiones, incluyendo para futuros casos similares, lo que excede a la facultad de interpretación del Juez Constitucional.
- 53. Analizadas las pretensiones, sin perjuicio del orden propuesto por la demandante, para efectos del análisis de su procedibilidad, vamos a agruparlas de la siguiente forma:
 - A. Declaración judicial de la existencia del derecho a la muerte digna.
 - B. Inaplicación de norma penal; Art. 112 del Código Penal a fin de que pueda ser asistida, en tanto no le es posible hacerlo por símisma.

- C. Establecimiento de un mecanismo y criterios de aplicabilidad del derecho a la muerte digna.
- D. Establecimiento de protocolos para viabilizar la ejecución del derecho invocado, por parte dos instituciones del Estado.
- E. Establecimiento de protocolos para casos similares.

De las pretensiones enunciadas, se tiene que; existe cuestionamiento respecto del enunciado A, en tanto, no existe formal y expresamente este enunciado normativo, siendo que la demandante, sostiene que es posible determinarlo vía interpretación de los derechos fundamentales invocados, de modo que, antes que prohibirlo y sancionarlo, el Estado está en la obligación de cumplirlo, viabilizarlo y establecerlo formalmente, sobre lo que las demandadas sostienen que, el Juez Constitucional no debería hacerlo, pues ello es una función del legislador.

Respecto del punto B, inaplicación del artículo 112 del Código Penal, el cuestionamiento procesal señala que es, igualmente, la derogatoria de normas es función legislativa.

En cuanto a los puntos C y D, establecimiento de mecanismos, criterios de aplicabilidad y protocolos de ejecución, son también función ajena a la función jurisdiccional, pues tanto la función legislativa, de dictado de políticas generales, como reglamentarias, no corresponden a la laborjurisdiccional

En cuanto al punto E, del mismo modo, consideran que además de ser ajena a la labor jurisdiccional, se pretende una norma de alcance general y no de aplicación al caso concreto.

54. Previo a un pronunciamiento sobre la procedencia de cada uno de estos puntos es menester hacer un análisis interpretativo y doctrinal de la materia a fin de determinar si, en efecto, se afectarían estos principios constitucionales de Separación de poderes y Corrección funcional.

Nuevos derechos y derechos innominados.

- 55. El Tribunal Constitucional, en varias oportunidades se ha pronunciado sobre la existencia de derechos innominados, derechos nuevos o derechos derivados de aquellos expresamente establecidos en la tabla del articulado de la Constitución. Pondremos uno, solo por ser ilustrativo y no reciente: (EXP. N° 2488-2002-HC/TC).
 - "13. Así, el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento expreso en nuestro texto constitucional, es un derecho plenamente protegido, derivado en primer lugar de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela jurisdiccional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que, en una medida razonablemente posible y en casos especiales y novísimos, deben desarrollarse los derechos constitucionales implícitos, permitiendo así una mejor garantía y respeto a los derechos del hombre, pues ello contribuirá a fortalecer la democracia y el Estado, tal como lo ordena la Constitución vigente.
 - 14. El Tribunal Constitucional considera que, si bien detrás del derecho a la verdad se encuentra comprometidos otros derechos fundamentales, como la vida, la libertad o la seguridad personal, entre otros, éste tiene una configuración autónoma, una textura propia, que la distingue de los otros derechos fundamentales a los cuales se encuentra vinculado, debido tanto al objeto protegido, como al tales que con su reconocimiento se persigue alcanzar.
 - 15. Sin perjuicio del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la verdad, éste también ostenta rango constitucional, pues es una expresión concreta de los principios constitucionales de la dignidad humana, del Estado democrático y social de derecho y de la forma republicana de gobierno."

- 56. En nuestro caso, la demandante invoca la existencia de un *derecho fundamental* a la muerte digna, sobre cuya fundabilidad o no, nos pronunciaremos más adelante, pero que en esta parte, sólo señalaremos que, los fundamentos arriba citados, son parte de una Sentencia del Tribunal Constitucional en un Proceso de Habeas Corpus; vale decir que, se hace en un proceso de garantías constitucionales que se inicia en un Juzgado de primera instancia o especializado, lo que implica que, <u>desde este nivel</u>, era <u>perfectamente posible su construcción argumental y dogmática para pronunciarse sobre la existencia de un derecho, sea este un derecho fundamental o de menor nivel; nótese que, según la propia sentencia, la pretensión fue declarada fundada en la primera instancia. Así, aun cuando no existe en nuestra legislación positiva un enunciado normativo que declare el *derecho a la muerte digna*, procesalmente es posible hacerse desde la interpretación de los derechos fundamentales. Será materia de un análisis más exhaustivo, en adelante, su formulación o negación, siendo que, en esta parte, queremos solo fundamentar la procedencia, de manera general.</u>
- 57. La demandante ha invocado, como fundamentos que; la prohibición penal, no le permitiría ejercer, los derechos a una muerte en condiciones dignas, su derecho a la dignidad, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y una amenaza cierta al derecho a no sufrir tratos crueles e inhumanos. Sostiene para ello que, viene padeciendo de una enfermedad degenerativa, (polimiositis), incurable e irreversible, que determinará su muerte en tiempo prolongado, en cuyo transcurso se verá sometida a intervenciones y prácticas que le significarán gran sufrimiento, sin que exista la posibilidad de acabar con dicho sufrimiento por sí misma, como forma de ejercer su voluntad, libertad y demás derechos invocados. Así; no existiendo en nuestra legislación una declaración o reconocimiento expreso de ese derecho, sostiene que debe considerarse el principio de *númerus apertus* de nuestro sistema de derechos fundamentales, establecido en el artículo 3° de la constitución Política vigente. En tal sentido, siendo una invocación de un derecho *no expreso*, es preciso analizar y determinar si en efecto, es atendible la argumentación de la demandante.

El control difuso.

- 58. El Tribunal Constitucional ha establecido normas para el control difuso, así por ejemplo en el EXP. N° 1680-2005-PA/TC, señala que:
 - "... el control judicial de constitucionalidad de las leyes es una competencia reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para declarar la inaplicabilidad de la ley, con efectos particulares, cuando la ley aplicable para resolver una controversia. Se trata de un poder- deber del juez, consustancial a la Constitución del Estado Constitucional. Es una auténtica norma jurídica, constituir la Ley Fundamental de la Sociedad y del Estado, un derecho directamente aplicable. Siguiendo al Chief Justice Jhon Marshall al redactar la opinión de la Corte Suprema en el Leading Case Marbury v. Madison, resuelto en 1803, se le cita:

El poder de interpretar la ley (...), necesariamente implica el poder de determinar si una ley es conforme con la Constitución. En cualquier causa que involucre dos leyes en conflicto, el juez debe decidir cuál es la que debe regir. Así, si una ley está en oposición con la constitución, si la ley y la Constitución son ambas aplicables a un caso particular, de manera que la Corte deba decidir esa causa conforme a la ley, sin atender a la Constitución, o conforme a la Constitución, sin atender a la ley; la Corte debe determinar cuál de estas normas en conflicto rige en el caso. Esto es de la misma esencia de los deberes judiciales.

En tanto la ley es expresión de la voluntad general representada en el parlamento, su uso debe ser de última ratio. Así, las leyes deben sujetarse a la Constitución, pero también es el límite al ejercicio del control judicial, por lo que debe procurarse una interpretación, dentro de lo razonable y posible, conforme a la constitución".

- 59. De esta manera, en nuestro caso, no se trata de una derogación de la norma, que en efecto es facultad del legislativo, tampoco es una declaración de inconstitucionalidad en abstracto, puesto que la demandante invoca la afectación personal de sus derechos fundamentales, los mismos que serán analizados más adelante, pero que evidencian una relación relevante, en tanto su pretensión es que, en su momento, se le acuda mediante asistencia profesional, a que se dé cumplimiento de su voluntad, en cuyo caso, quien lo haga, sería pasible de ser sancionado, pues dicha acción encuadra en el tipo penal establecido en el artículo 112 del Código Penal, materia de la pretensión.
- 60. Solo puede hacerse dentro de un caso, puesto a la dirimencia del Juez, siempre que sea relevante para el caso, (Juicio de relevancia). No puede hacerse si no hay suficiente relación, ni por curiosidad académica del juez. En consecuencia, la declaración importa para el caso, tanto la pretensión principal como las accesorias, debiendo quedar acreditada la afectación de la ley a su derecho fundamental. En este punto, queda claro que, siendo un proceso de amparo, los efectos deben ser *inter partes*, esto es que, podría afectar la última pretensión de la demandante, sobre lo que volveremos más adelante.

 En efecto, debe hacerse un juicio de relevancia y de proporcionalidad respecto de los derechos que serían afectados, especialmente el derecho a la dignidad y de libre determinación.
- 61. No puede hacerse, respecto de normas cuya validez, el Tribunal Constitucional haya sido confirmada en control abstracto, o sobre los que se establezca una contravención con una norma convencional; sin perjuicio de que, en un caso concreto y distinto a los evaluados por el Tribunal, pudiera demostrarse la afectación, (Balancing). Al respecto, de una revisión de las resoluciones del Supremo intérprete, (Sobre Inconstitucionalidad) y de la Corte Suprema, (Sobre Acción Popular), en caso de alguna norma reglamentaria relacionada, no se ha encontrado pronunciamiento alguno, como tampoco ha sido invocado o señalado por ladefensa.

Queda claro así que, la norma impugnada, no ha sido atacada de inconstitucionalidad, es una norma vigente y autoaplicativa, en tanto no se requiere reglamentación ni remisión alguna para su aplicación en un caso concreto.

Finalmente, debe señalarse que, más adelante deberá hacerse un análisis interpretativo de las posibles hipótesis fácticas de la aplicación de la norma, a fin de establecer en qué casos resultaría o no inaplicable o inconstitucional la norma legal y en su caso, determinar su inaplicación en algún extremo interpretativo.

62. Siendo el tema de fondo, la determinación de estos derechos invocados, por razones de orden procesal, vamos dejar aún sin contestar esta pregunta o como hipotética la cuestión de que le asisten a la demandante los derechos invocados.

En efecto, la parte demandada, (los tres procuradores), han sostenido que, un derecho que no está consagrado en la Constitución, no es posible de ser declarada y menos ejercida en la vía del proceso de amparo, tampoco en otras vías de la jurisdicción constitucional, debiendo dejarse, (invocarse o esperarse), esa facultad para el legislador. Uno de los Procuradores, ha sugerido más bien a la demandante, (siendo que la Defensoría tiene legitimidad para presentar proyectos de leyes), proponerlos ante el Congreso de la República, empero, con lo señalado en estas líneas, podemos sostener que procesalmente, es válido sostener que, el derecho, aun cuando no tenga un enunciado normativo en legislación positiva, reiteramos, es posible derivarlo de los derechos fundamentales, siempre que se cumplan con los requisitos y no se incurra en el exceso que el propio Tribunal Constitucional señala en tales casos. Es preciso además abundar en que existen otros fundamentos que nos obligan a un pronunciamiento sobre la materia puesta a este despacho, como el principio de *inexcusabilidad*, que implica que, cuando se observa, de manera evidente, la necesidad de resolver un conflicto o declarar el derecho de una persona, no es posible que el Juez

deje de atender, bajo el fundamento de la inexistencia de un texto normativo en que pueda subsumirse el requerimiento.

El principio de inexcusabilidad.

63. En la Constitución peruana de 1979, se elevó al nivel constitucional un principio ya existente, aquel que determina el deber de fallar del juez aún ante la inexistencia de ley. La Constitución de 1993, igualmente dice:

Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

(...)

- 8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.
- 64. Este principio, históricamente nace del derecho civil, entendiéndose la necesidad de resolver los conflictos entre privados, aun cuando no existiese una ley que resolviese el caso en concreto y considerando la variedad de las situaciones y el desarrollo de la sociedad que siempre es capaz de presentar nuevas situaciones. El principio tiene larga vida en el Perú. Ya estaba el Código Civil de $1936^1\,$ y, más antes en el de 1852, como heredero de la influencia del Código Napoleónico. Cierto es también que, desde sus orígenes, se generó la discusión sobre el papel del Juez, que necesariamente crea derecho, en este punto. En esta causa, se propone igualmente que, sería un exceso que el Juez Constitucional resuelva sin norma expresa del legislador, aun cuando hay normas generales y principios aplicables, en la Constitución y en otras leyes. Es la otra cara del derecho a la tutela jurisdiccional. Claro está que, aun siendo un derecho constitucional, no es aplicable a todo el derecho. Así, en el derecho penal, existe más bien, el principio de legalidad y taxatividad. Esto es que, en el derecho penal, no es posible condenar cuando hay un vacío o laguna en la ley. El acto no establecido positivamente como delito, no es sancionable, aunque socialmente, políticamente o moralmente sea reprochado. Se entiende en este punto, el cuestionamiento de los procuradores, posiblemente desde la perspectiva del derecho administrativo, especialmente desde el derecho administrativo sancionador, donde también, el principio de legalidad, resulta imperativo. De hecho, nuestro Tribunal Constitucional sustrajo una pasajera atribución de hacer control difuso a los órganos administrativos; pero al mismo tiempo, debe entenderse que la norma administrativa no es tal, si no está conforme a la Constitución.
- 65. En el derecho constitucional y más exactamente en la jurisdicción constitucional, en caso se constate el derecho, por ejemplo, en los principios constitucionales, existe la obligación de fallar, de parte del Juez. Este elemento debe unirse a otros dos; la aplicabilidad de las normas constitucionales a los casos concretos, que se hace efectiva a partir del constitucionalismo de post guerra, corriente que considera que, las normas y principios constitucionales, no solo tienen carácter programático, sino de aplicación inmediata actual y real y, el control constitucional, sobre todos los actos del Estado, de modo tal que, no hay zonas exentas del control de constitucionalidad. Nos explicamos. El Tribunal Constitucional, en numerosas situaciones ha resuelto inaplicando una norma y ante la ausencia de norma expresa, conforme hemos glosado, al inicio de esta resolución, la genera, a partir de los principios constitucionales, a fin de establecer. A) La constitucionalidad de todos los actos de los órganos del Estado y b), resolver conforme al derecho y la Constitución estimando la demanda. Así, se tiene por ejemplo que; de acuerdo a la propia Constitución, las decisiones del Jurando Nacional de Elecciones no pueden ser materia de cuestionamiento en sede judicial, sin embargo, el Tribunal Constitucional, ha resuelto reiteradamente que, no puede escapar al control de constitucionalidad. Así, establece el precedente EXP. N. 0 5854-2005-PA/TC. Caso LIZANA PUELLES:

- "5. La Constitución es, pues, norma jurídica y, como tal, vincula. De ahí que, con acierto, pueda hacerse referencia a ella aludiendo al "Derecho de la Constitución"2, esto es, al conjunto de valores, derechos y principios que, por pertenecer a ella, limitan y delimitan jurídicamente los actos de los poderes públicos.
- 6. Bajo tal perspectiva, la supremacía normativa de la Constitución de 1993 se encuentra recogida en sus dos vertientes: tanto aquella objetiva, conforme a la cual la Constitución preside el ordenamiento jurídico (artículo 51°), como aquella subjetiva, en cuyo mérito ningún acto de los poderes públicos (artículo 45°) o de la colectividad en general (artículo 38°) puede vulnerarla válidamente."

(...)

Parte resolutiva: (Precedente).

"2. De acuerdo con los artículos 201° de la Constitución y 1° de la LOTC, este Tribunal, en su calidad de supremo intérprete de la Constitución, según ha quedado dicho en el Fundamento 35, supra, establece que toda interpretación de los artículos 142° y 181° de la Constitución que realice un poder público en el sentido de considerar que una resolución del JNE que afecta derechos fundamentales, se encuentra exenta de control constitucional a través del proceso constitucional de amparo, es una interpretación inconstitucional. Consecuentemente, cada vez que el JNE emita una resolución que vulnere los derechos fundamentales, la demanda de amparo planteada en su contra resultará plenamente procedente."

Reiterando así, se tiene que, desde el derecho civil, se ha entendido tradicionalmente, como una garantía de acceso a la justicia al ciudadano, por parte del Juez. Aun en pleno auge de las corrientes positivistas, se tenía esta institución como una prohibición para el juez, de no dejar de solucionar un conflicto de intereses o de declarar un derecho, a falta de norma expresa o como excepción para la integración con el principio de equidad. Recuérdese que el Código Civil ha tenido tradicionalmente, normas de aplicación de ciudadanía o derechos civiles que se han constitucionalizado con el tiempo.

- 66. La jurisdicción no puede dejar de ejercer su función de declarar el derecho entre las partes mediante la emisión de una resolución, considerándose la jurisdicción como una potestad, tanto del constituyente como del legislador. En su evolución al derecho constitucional, se convierte auténticamente en una cláusula de autorización a crear derecho para el caso concreto².
- 67. Tenemos presente que, en la base del Estado Legislativo, se ubica la supremacía de la ley, al ser el producto de la voluntad del soberano. Sin embargo, paradójicamente, si el sistema legal determinase que en caso de laguna, u oscuridad, el Juez tuviera que elevar consulta al legislador, (Pedir norma), nos encontraríamos en una situación en la que el legislador tuviera que emitir la norma en relación al caso en concreto, aunque su eficacia fuese con efectos generales, que además, la norma se tendría que aplicar con efecto retroactivo, cuestiones que, contrariamente al fin propuesto, implicaría la invasión del legislativo en las funciones de la jurisdicción. Surge así, el principio de completitud del sistema constitucional, según el cual, el juez constitucional debe resolver con base a los principios generales, por lo que se considera, como consecuencia que: "No hay vacíos legales, porque hay jueces".
- 68. Hans Kelsen, formalmente niega la existencia de las lagunas o de su teoría. Cuestiona la idea de que, partiendo del principio de que; aquello que no está prohibido, está permitido dice más bien que la completitud de la ley, debe entenderse, considerando que, los principios del derecho, son también derecho.
 - "Esta teoría es errada, puesto que reposa en la ignorancia del hecho de que cuando el orden jurídico no estatuye ninguna obligación a cargo de un individuo, su comportamiento está permitido. La aplicación del

- orden jurídico válido no es lógicamente imposible en el caso en que la teoría tradicional supone una laguna. Puesto que, si bien en el caso de que no sea posible la aplicación de una norma jurídica aislada, es posible en cambio la aplicación del orden jurídico, y ello también constituye aplicación de derecho. La aplicación del derecho no está lógicamente excluida De hecho no se recurre de ninguna manera en todos los casos en que la obligación del demandado o acusado, afirmada por el demandante o acusador, no se encuentra estatuida por ninguna norma del derecho válido, a suponer la existencia de una "laguna".
- 69. Sea cual fuese la teoría que podamos asumir, en nuestro sistema constitucional, el alcance del principio de inexcusabilidad, siendo una norma de excepción, ha determinado al juez, el deber de cumplir con la función jurisdiccional, de pronunciarse, de fundamentar sus resoluciones y con ello de crear la norma para el caso concreto.
- 70. El paso del Estado Legislativo al Estado Constitucional, supone básicamente, la centralidad de la norma constitucional y con ello la labor interpretativa del Juez. Es el paso de identificar la ley con el derecho y el ejercicio de la subsunción, para pasar a la declaración del derecho objetivo, a la luz de los principios procesales y sustanciales contenidos en la Constitución, especialmente en los derechos fundamentales. Habiendo señalado que, el deber de no dejar de administrar justicia es un principio, de acuerdo al texto de nuestra Constitución, (1993), debe considerarse que no se trata solo de un texto legal con sentido de leguaje cotidiano. Consideremos así que, jurídica y filosóficamente; principio es un concepto amplio, pero que, para nuestros fines, lo consideraremos como la base de ideales, fundamentos y reglas generalmente aceptadas y aplicables y, punto de partida para el desarrollo de la teoría. Entonces, el deber de no dejar de administrar justicia o principio de inexcusabilidad del Juez, lo reconoceremos como fundamento para elevar su importancia. En palabras de Robert Alexy, como "mandatos de optimización", del sistema judicial, pues si un caso o una persona, necesita de una declaración de sus derechos, será preciso que el Juez se pronuncie; señalando sus fundamentos, (Interpretación), en tanto no solo es una subsunción y, subsecuentemente de la construcción del enunciado normativo. Si tenemos en cuenta que una de las características del Estado, (Inclusive un Estado primitivo), es la de administrar justicia, que la administración de justicia es previa a la norma positiva y que la construcción de los principios es propia del desarrollo jurídico, debemos entender que, en el Estado Constitucional, el principio de no dejar de administrar justicia es un mandato de optimización. Así, siguiendo a este jurista diremos que, para la aplicación de la teoría general de los principios, resulta útil otro principio, el principio de proporcionalidad, sobre el que más adelante, en la aplicación del caso en concreto de la pretensión, volveremos; pero que en esta parte lo enunciamos, para decir que, el principio de inexcusabilidad es tal, en tanto que a él se unen consecuencias jurídicas y fácticas como, el acceso a la tutela judicial, (la otra cara de este principio), y otros como, el monopolio del Estado en la administración de justicia, la propia separación de poderes que se cuestiona y nos ocupa, pues, reiteramos, esperar que el legislativo legisle para el caso concreto, implicaría precisamente la afectación del principio de separación de poderes, aun cuando a futuro, la norma tenga efectos generales. En conclusión, el principio de inexcusabilidad y el de supremacía de la Constitución, son principios de optimización de los citados principios de separación de poderes y corrección funcional, del Estado democrático constitucional y que, para su aplicación, el Juez debe hacer un esfuerzo en el mismo sentido de la teoría desarrollada por Alexy, en tanto lo contrario sería, no otorgar tutela jurídica.
- 71. La ausencia de norma no es un hecho general y cotidiano. Es una excepción en los Estados modernos. Solo para determinar la procedencia de las pretensiones, empero, hemos partido del enunciado de que a la demandante le asistirían los derechos invocados y como tal debiera serinaplicada la sanción a su caso en concreto y sobre lo que más adelante nos pronunciaremos.

En la práctica jurídica constitucional de hacer el control difuso nos encontramos con varias situaciones, entre ellas las más usuales son, a) Inaplicar una norma al considerarla inconstitucional, dejando el hecho, por ejemplo; sin sanción; b)Inaplicar una norma inconstitucional para dar lugar a la aplicación de la norma establecida en la propia constitución, como en los casos de igualdad de derechos y no discriminación, c) Inaplicar la norma para aplicar otra norma que se considere constitucional, esto es, cuando el hecho o situación fáctica tiene una cobertura de dos normas o existen norma supletorias; entre otros casos; d) En el presente caso, empero, se nos solicita la inaplicación de la norma penal, (artículo 112 del Código Penal), con lo que, de por sí, ya se estaría estimando la pretensión principal, pero que dadas las características del caso en concreto, en el que, no se solicita que cualquier persona sea la que la acuda, sino que sea el Estado quien lo haga, en ejercicio de sus funciones para dar cumplimiento a su derecho, es preciso, 1) Distinguir los diversos supuestos que tiene la norma legal, 2) establecer los criterios y protocolos de su determinación en modo y tiempo, que son parte las pretensiones subordinadas y 3) los criterios y protocolos de su ejecución una vez determinado el modo y tiempo u oportunidad. Así, en punto 1) ha sido materia de oposición por los procuradores en menor medida que las pretensiones subordinadas. Esto es que, la inaplicación de la prohibición penal como tal, no es el tema central de las contestaciones de demanda, sino la actividad de creación de norma que se pretende y sin cuya determinación, podría hacer que la sentencia resulte inocua, inejecutable e intrascendente en su propiocaso.

- 72. Es decir que, no basta con que se prescinda de la sanción penal, sino que sería preciso, en este caso que, el Estado, por intermedio de sus instituciones médicas, cumpla con los derechos invocados; es decir que se determine cómo, cuándo y bajo qué criterios es que podrá obrar quien realice el acto. Vale decir que, de acuerdo a la experiencia internacional, no es que una vez levantada la sanción penal; cualquier persona y, de cualquier modo, puede acudir a la petición de muerte digna de la persona que lo solicite. Esta es la parte que mayores cuestionamientos ha generado el caso y es la que a criterio de la parte demandada, constituye el elemento que podría afectar los principios de separación de poderes y corrección funcional.
- 73. Distinto habría sido el caso, de un Amparo en el cual, un médico hubiera asistido en la muerte a solicitud de la persona sufriente y que, al ser pasible de sanción penal, invocase los derechos de *muerte digna* de la fallecida, (con la correspondiente prueba de ello), para que se inaplique a su caso. De estimarse una demanda de ese tipo, no sería preciso establecer criterios, mecanismos ni protocolos para la funcionalidad de este "derecho" a la *muerte digna*.
 - Así, si el solo hecho de legalizar el suicidio asistido, (lo que podría hacerse con una norma legislativa), es de por sí un espacio de debate para cuestionar si puede ser dispuesto por el Juez Constitucional, es más debatible y cuestionable el establecer la funcionalidad de la pretensión.
 - Más aún, una parte de las pretensiones de la demanda es que el protocolo se establezca para la aplicación en casos similares. Esto es que se establezca una norma general y no para el caso concreto.
- 74. Sobre la fundabilidad y procedencia de cada una de las pretensiones volveremos más adelante. En esta parte, aunque de forma extensa, solo nos hemos ocupado de la procedencia de la demanda en la vía del amparo, lo que implica la posibilidad de estimar el derecho de la demandante en la vía del amparo y la presunta afectación de los principios de separación de poderes y corrección funcional. Ello poniendo como premisa, aun sin debate, de la fundabilidad de cuando menos la pretensión principal.
- 75. Es preciso, sin embargo, añadir, ya a modo de conclusión primaria que la labor de interpretación, del juez no puede desvirtuar las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, conforme señala el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia. Así, esta

judicatura, al realizar su

Labor de interpretación, cuidará de no desvirtuar las funciones y competencias a fin de que, el equilibrio de poderes inherente al Estado Constitucional y Democrático, se encuentre garantizado.

- 76. El principio de corrección funcional, o de conformidad funcional; limita las competencias y facultades otorgadas por el esquema constitucional a las instituciones políticas que reconoce. La Constitución de 1993, ha establecido así, el rol del Ejecutivo, como el ejecutor de las políticas de gobierno, el legislativo, como el órgano de fiscalización y formación de leves y el Poder Judicial, para la administración de justicia con las normas que el legislativo emite. Sin embargo, la estructura del Estado moderno no es tan simple. Existen órganos constitucionales autónomos con diversas funciones, como el Tribunal constitucional que, por definición es un legislador negativo, cuando declara la inconstitucionalidad de una norma especialmente, pero también cuando inaplica una norma legal para un caso en concreto, sin perjuicio de las funciones de innovación del sistema jurídico vía interpretación, como ocurre en las sentencias manipulativas o aditivas. Esta facultad de órgano constitucional de legislador negativo excepcional, se extiende al Poder Judicial, (cada uno de los Jueces), cuando se establece el control difuso y de inconstitucionalidad de normas reglamentarias; en cuyo caso, deberá además determinar la consecuencia jurídica. En el caso de los procesos constitucionales, esta facultad se intensifica, pues la inaplicación del caso en concreto puede implicar efectos para la doctrina y casuística en general, aun cuando no se le reconozca a cada Juez la facultad de establecer jurisprudencia vinculante, a lo que se llama efecto de irradiación, en una de sus acepciones.
- 77. Esta facultad de inaplicar normas legales, en efecto, puede llevar a la denominada Hiperactividad de los jueces o activismo judicial. Esta judicatura pretende no caer en esa crítica, menos hacer esa práctica. Consideramos que, en principio, se cae en esa práctica cuando el Juez desarrolla interpretaciones forzadas de la norma constitucional para no cumplir, o no acatar las leyes que dicta el legislativo; tal vez porque no las comparte, porque su moral o su ideología particular lo inclinan a una contradicción con las leyes vigentes o una norma concreta dictada por el legislador en uso de sus funciones.
- 78. No es activismo en cambio cuando; el debate o cuestionamiento de la norma legal se hace para el estricto cumplimiento de la Constitución, cuando la inaplicación y subsecuente generación de un enunciado normativo para el caso, se hace por estricta necesidad del cumplimiento de la propia sentencia, cuando el conflicto de intereses o la declaración judicial hace ineludible un pronunciamiento del juez en ausencia de norma o cuando al inaplicar una norma legal, por algún extremo de su interpretación, debe establecerse un procedimiento, protocolo o criterios de su cumplimiento. Esta judicatura, considera así, a modo de ejemplo el siguiente caso.

Caso perros guía. Inaplicación, enunciado normativo y protocolos de cumplimiento.

79. El Tribunal Constitucional, en el EXP N 02437 2013-PA/TC, ante una demanda de personas con discapacidad visual a quienes no se les permitía el ingreso con sus perros guía; dispuso inaplicar el artículo 88° de la Ley N.°26842, de la Ley General de Salud y el artículo 8° del Decreto Supremo N° 022-2001-SA, Reglamento Sanitario para las Actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, "... para permitir que los demandantes con discapacidad visual ingresen en sus instalaciones acompañados de sus perros guía, garantizando su

Permanencia en tales locales de manera ilimitada, constante y sin trabas", lo que significaba el efectivo ejercicio de su derecho en uso de la Ley N° 29830 y de derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, ejercicio de su capacidad, entre otros. El TC así, consideró que la intervención que se hacía al derecho de las personas con discapacidad, en uso de normas sanitarias, era excesiva y desproporcionada, por lo que dispone la inaplicación de las citadas normas sanitarias, permitiendo que los demandantes, ingresen sin esa limitación. Para su ejecución, el Juez dispone el cúmplase en el plazo de ley. La demandada, en respuesta solicita que los demandantes, cuando quieran hacer uso de su derecho lo hagan, con su debida identificación, para anunciarse al ingresar a la tienda, a efectos de la ejecución. El suscrito en calidad de Juez de la ejecución,(2° Juzgado Constitucional de Lima), consideró que, el hecho de tener que identificarse, o portar consigo una copia de la sentencia o cualquier otro formalismo implicaba una limitación en sí misma y siendo que en la sentencia establecía que se ejerciese el derecho, de manera ilimitada, constante y sin trabas. Era preciso establecer un protocolo de cumplimiento de la decisión del Supremo Intérprete; por lo que se dispuso: 1) La demandada debía instalar en todos sus locales un anuncio por cartel, donde se señale la permisión de ingreso de las personas invidentes con perros guía, (para conocimiento del personal nuevo y del público), 2) la socialización y concienciación a todo el personal de lo dispuesto en la sentencia; 3) lo que se debía acreditar con un informe documentado. El abogado consideró que el Juez estaba legislando e impugnó la resolución, pero la cumplió y está vigente, al punto que se ha convertido en una buena práctica que otras empresas han imitado, sin sentencia ni norma adicional.

- 80. En el citado caso, el Tribunal inaplica una norma por afectar derechos fundamentales, (Igualdad y otros), no precisamente por ser una norma inconstitucional y dispone la aplicabilidad, sin límites, de una ley existente; sin embargo, la idea de cumplimiento de la demandada, era generar una nueva traba, (que los dos demandantes se identifiquen con sus DNI cada vez que pretendan ingresar), mecanismo que incumplía el mandato de no limitación, pues **no se le exige a ningún otro cliente una identificación previa**; por lo que la forma más adecuada de cumplimiento resultó ser la apertura general para toda persona con las mismas condiciones. Restringir el cumplimiento a los *demandantes debidamente identificados*, habría implicado, además de permitir la afectación del derecho de otras personas con discapacidad visual, una nueva forma de afectación discriminatoria. Así; no puede decirse que el juez legisló, pues la legislación ya existía en la Ley 29830, pero su cumplimiento a partir del caso en concreto, hizo necesario un protocolo en tres pasos; 1, carteles, 2 socialización de la sentencia entre trabajadores y 3, informe, para su cumplimiento de manera *ilimitada, constante y sin trabas*, como era el mandato del Tribunal.
- 81. Nuestra Constitución en su artículo 1° de los Derechos fundamentales de la persona, y del título I. De la persona y de la sociedad, de la Constitución del Perú de 1993, señala que: "la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado". La demandante ha invocado, en principio estos derechos fundamentales y este artículo constitucional. Se considera que ello es fundamental para determinar la estructura del Estado y su modelo económico, social y sus principios axiológicos. Bajo la lectura de este artículo, debemos tener presente el desarrollo del derecho constitucional que, se inicia con la idea que el Estado debe abstenerse, para respetar el desarrollo de la autonomía de la persona humana que cuenta con

capacidades y potencialidades; pero que al agregarse el concepto de dignidad, pasamos a reconocer la libertad en su estatus positivo por el que se entiende que las personas tienen las mismas capacidades y posibilidades para realizarse y el Estado debe promocionar y hacer cumplir estos derechos. La dignidad como tal, importa el aspecto corporal y racional; siendo que lo racional implica elementos como su sociabilidad, responsabilidad y trascendencia.

La dignidad es, de otro lado, una suerte de principio de principios o base de otros derechos, pues sobre esta se construyen otros derechos fundamentales, tanto frente al Estado, como entre los particulares.

- 82. En el caso que nos ocupa, la demandante fundamenta su derecho a morir en condiciones dignas, con lo que sustenta la primera parte de sus pretensiones, esto es, el reconocimiento mismo a concluir su proceso vital, es decir su vida, pero que, hasta en ese punto, se respete lo que ella considera una condición digna. Considerando además que, en su caso, no podrá ejecutar por sí misma su voluntad, pues se encuentra en una situación de dependencia; plantea dos pretensiones, a) Que se inaplique la sanción penal personal a quien contribuya o haga cumplir esa su voluntad, lo que implica el respeto del Estado por su libertad y que el acto sea legal, y b) Sea el Estado quien haga cumplir, mediante sus órganos ejecutivos o administrativos, (Entre los que deberá encontrarse la o las personas que materialicen esa voluntad); lo que implica la actividad positiva del Estado para hacer efectivo el derecho reclamado por la demandante.
- 83. La dignidad humana, como derecho fundamental se ha desarrollado en el constitucionalismo, como un elemento muy gravitante después de la segunda guerra mundial y frente al totalitarismo que disminuye la voluntad del ser humano. Reconociendo que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, dotados como están de razón y de conciencia. El propio derecho constitucional, hace al texto constitucional norma de aplicación inmediata. Un fundamento para la aplicación sobre las leyes y de sujeción de estas al derecho fundamental.

Norma autoaplicativa.

- 84. De conformidad con el artículo 3° del Código Procesal Constitucional, es procedente el Proceso de Amparo contra actos basados en normas, cuando se invoque la amenaza o violación que tiene como sustento la aplicación de normas. Es preciso concordar esta norma con lo establecido en el artículo 200° de la Constitución. El Tribunal Constitucional ha desarrollado al respecto, la distinción teórica entre normas hetero aplicativas y normas autoaplicativas u operativas; EXP. N.° 01893-2009-PA/TC.
 - "3. Que las normas heteroaplicativas, también denominadas de efectos mediatos, pueden ser definidas como aquellas normas que, luego de su entrada en vigencia, requieren indefectiblemente de un acto de ejecución posterior para poder ser efectivas. Es decir, que la eficacia de este tipo de normas está condicionada a la realización de actos posteriores y concretos de aplicación. Por ende, la posible afectación del derecho no se presenta con la sola entrada en vigencia de la norma, sino que necesariamente requiere de un acto concreto de aplicación para que proceda el amparo a fin de evaluar su constitucionalidad.

En sentido contrario, las normas autoaplicativas pueden ser definidas como aquellas que llevan incorporadas en sí mismas un acto de ejecución, de modo tal que la posible afectación al derecho se produce con la sola entrada en vigencia de la norma, pues ésta produce efectos jurídicos inmediatos en la esfera jurídica de los sujetos de derechos. Es decir, que este tipo de normas con su sola entrada en vigencia crean situaciones jurídicas concretas, no siendo necesario actos posteriores y concretos de aplicación para que genere efectos".

Así, es ya pacífico sostener que, las normas del Código Penal son operativas o autoaplicativas, en tanto, no requiere Reglamento o acto administrativo previo, que determine su aplicación. Cualquier persona que, "... por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, ..." podrá ser denunciado, investigado, procesado y sancionado con la pena establecida en el artículo 112 del Código Penal. Así, no se requerirá que exista acto o reglamento, previos para que se le aplique la norma.

85. En el caso de la demanda, se solicita la inaplicación de esta norma, en tanto considera que, su sola existencia impide el ejercicio de, lo que considera un derecho fundamental a la muerte digna. Sostiene además que en este caso se trata de una amenaza, pues considerando como su derecho a la dignidad, autonomía, la libertad, entre otros derechos invocados; en el caso de que solicitara el auxilio a un médico, este se abstendría, bajo la disuasión que surge de la aplicación, indefectiblemente, de la norma. Una de las causas por las que se determina esta distinción, entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas, es que existen además otras vías para cuestionar la inconstitucionalidad o afectación de un derecho fundamental, como la acción de Inconstitucionalidad, por lo que es preciso que exista un acto o amenaza que afecte directamente a quien lo solicita. En el presente caso, la demandante sostiene que la beneficiaria tiene una condición de salud particular que en determinado momento tendría el derecho de solicitar asistencia en concluir su ciclo vital biológico lo que, esta norma impide. La intención de esta normativa es evitar el control abstracto de las normas en la vía del Amparo. En el presente caso, se ha señalado que esta sería una causal de improcedencia, esto es que la demandante está pretendiendo un control abstracto de la norma; sin embargo, esta judicatura tiene suficientes elementos para determinar que, a) Existe una situación concreta y real en el estado de salud de la beneficiaria Ana Estrada, lo que obliga a determinar si existe o no una amenaza a su derecho, que implicaría una declaración de fondo, antes que una cuestión procesal, b) La beneficiaria ha manifestado de forma expresa su deseo de recurrir a terceros para cumplir con su deseo de concluir su vida, lo que además considera un derecho fundamental. Establecer si tiene el derecho o no, es también un pronunciamiento de fondo, c) No se trata del derecho del tercero, esto es del médico o Comisión médica ejecutante lo que lo afecta, de manera directa, sino que la norma disuade a estas personas, impidiendo el cumplimiento de lo que considera un derecho fundamental a ser asistida. Así, no observamos que se pretenda un control abstracto. Nótese que el homicidio piadoso, implica necesariamente la participación de dos sujetos activos: 1) El que lo solicita y 2) el que lo asiste o ejecuta el homicidio, siendo que el primer sujeto, (activo y pasivo a la vez), no es punible.

De hecho, esta judicatura no hará un control abstracto de norma alguna, sino que hará un pronunciamiento de fondo en relación a los derechos invocados por la demandante y su beneficiaria. Debe entenderse que, el Juez debe proteger los derechos constitucionales con el mayor criterio de tutela, a fin de que se logre la plena vigencia de estos derechos, incluso cuando la lesión provenga de una norma legal y conservando la validez constitucional de la norma hasta donde sea razonable.

Respecto de lo señalado, Castillo Córdova, dice:

"Una interpretación en contrario será inconstitucional, ya sea porque entonces el poder político (en su función legislativa, judicial o ejecutiva) no está cumpliendo con uno de sus deberes primordiales: garantizar la plena vigencia de los derechos humanos (artículo 44CP), como

Porque no se estaría cumpliendo con el principal criterio hermenéutico constitucional: la persona humana es el fin y la sociedad y el Estado se encuentran a su servicio⁴.

Tema probatorio. El estado de salud de la beneficiaria Ana Estrada Ugarte.

86. El diagnóstico expuesto en el Informe médico adjuntado a la demanda, es el elemento de prueba más evidente del estado de salud de doña Ana Estrada Ugarte. En la demanda se ha narrado sus sensaciones y descrito sus dolencias y la situación de discapacidad progresiva a la que la somete la enfermedad. Clínicamente se le ha diagnosticado Polimiositis, una enfermedad autoinmune que afecta el tejido muscular. Se considera que es incurable, con lo que se tienen en el nivel de la ciencia actual. Es degenerativa, en tanto destruye las capacidades orgánicas de sus músculos y su organismo en general. Es progresiva porque se va agravando con el paso del tiempo, siendo que, se determinaron sus primeros síntomas a los 12 años de edad, y tiene en la actualidad 44 años de edad, fecha a la cual se le considera la enfermedad, avanzada.

Como parte de su tratamiento ha consumido o consume principalmente corticoides, medicamentos inmunosupresores, (ciclosporina e imurán), metrotexato e inmunoglobilinas, entre otros.

Ha tenido sucesivas y frecuentes intervenciones médicas, ha estado en Cuidados intensivos y cuidados intermedios en oportunidades, se le ha practicado o aplicado un tubo endotraqueal, una traqueotomía, (para poder respirar), una gastrostomía en cuanto no puede deglutir normalmente o cuando su estado de salud se hace crítico y debe ser alimentada mediante esta sonda, entre otras intervenciones.

Se puede probar y observar los periodos de crisis y mejoras temporales, así como el progresivo agravamiento de sus dolencias, con la historia clínica que adjunta a la demanda en Disco compacto, que se ha tenido a la vista.

Con lo señalado, esta judicatura puede considerar que, en efecto, su grado de dolencia es muy grave, no evidencia una muerte en el corto plazo, pero sí, situaciones insufribles, que afectan sus derechos, su libertad física, su condición psicológica, su desarrollo personal y profesional, pese a muchos esfuerzos, realizados por ella misma y su familia.

SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS.

Derecho a la dignidad

87. En este punto, es preciso tener presente el debate sobre la expresión de voluntad como expresión de la *razón* y fundamento de la dignidad, respecto de la dignidad que debe reconocerse también en las personas con discapacidad psicosocial. La tradición Kantiana ha influido de tal forma en el derecho que, somos tributarios de la diosa Razón. Así, Dworkin, establece una relación entre la razón y la dignidad al punto que, de una primera lectura puede considerarse que solo es digno quien tenga razón y es *solo* pasible de beneficencia quien, a consecuencia de una discapacidad no puede expresar su voluntad o esta, está afectada. Sin embargo, el propio autor, se encarga de distinguir entre lo que es la dignidad, la indignidad, la conciencia de indignidad y la beneficencia. A nuestra consideración, sin embargo, al haberse cargado a la razón, como fundamento de la dignidad, el debate quedó abierto, puesto que no satisface plenamente establecer que hay dignidad después de la razón, solo cuando se ha tenido razón previamente, y sin un fundamento suficientemente claro, respecto de aquellos que nunca tuvieron uso de razón o no la pudieron expresar.

- 88. El derecho ha desarrollado un avance al reconocerle dignidad a las personas con cualquier discapacidad, de acuerdo a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad. Consideramos por ello que, la dignidad es inherente a la persona humana, aun cuando esté afectada, en ese punto, su propia autopercepción⁵. La capacidad no puede ser considerada como sinónimo de dignidad o único fundamento de ella, ni siquiera el único receptáculo de la dignidad.
 - En efecto, la dignidad, se configura en el respeto que se tiene por el otro, cualquiera que fuese su condición. Pero también, por la percepción que la propia persona tiene de sí misma, esto es, de su propia dignidad.
- 89. Existen otras facetas de la dignidad, como la que se inicia en su versión de lenguaje común, esto es el de ser "merecedor de respeto", es decir, la cualidad de la persona que se evidencia por su obra o actitud que lo hace digno, lo que implica; una medida de la justicia. En términos políticos, la dignidad es también base del pluralismo, como respeto de las ideas del otro, empero estas son más bien derivaciones, antes que el aspecto central de la idea que nos ocupa.

Dignidad de personas con discapacidad y dignidad como concepto de interpretación no pacífica.

- 90. Es necesaria esta reflexión en tanto el concepto de dignidad mismo, ha evolucionado en el tiempo, sin que el debate se haya cerrado y esta judicatura debe exponer su idea sobre este concepto a fin de determinar a partir de ello, lo que se considera como una vida o una muerte digna a partir del texto constitucional. Así, si se considera que la dignidad tiene como fundamento la libertad de elegir entre varias alternativas sobre su propia vida y decisiones, lo que podemos conocer como expresión de voluntad, ello implica la capacidad de razonar. Empero, no podemos considerar, esta como la única medida para reconocer o presumir la competencia y la propia dignidad. La capacidad de tener un mejor, peor, menor o mayor razonamiento o, el que el razonamiento pudiera estar perturbado por diversas causas, (imaginarias o reales), la capacidad de negociar o la imposibilidad de hacerlo, por la deficiencia de los medios para hacerlo, etc, son elementos propios del ser humano y son la mejor medida de su individualización, respecto de los otros seres. Partimos del hecho de que los seres humanos, nos diferenciamos de los otros animales, por el uso de la razón, pero no todos los seres humanos tenemos un coeficiente intelectual homogéneo, considerando además que el IQ es también una medida convencional. Podemos imputar en otros términos este atributo a una persona jurídica o una computadora, esto es capacidad de "elegir" y "razonar", o la omnipotencia de Dios; empero, no es esta la dignidad ni la libertad que jurídicamente entendemos. La dignidad sin embargo, es base axiológica en la comunidad cristiana como el elemento "otorgado por Dios" que, igualmente sería independiente de la razón y por lo mismo, base para contradecir los fundamentos de la demandante. Consideramos, sin embargo, que el fundamento jurídico que se inscribe en la Constitución, si bien tiene antecedentes de diversa vertiente e interpretaciones también diversas, incluidos los fundamentos religiosos o n religiosos; es fundamentalmente, la idea respeto por el otro que, es medida de la justicia que se tiene y se debe, y que, de otro lado, la persona tiene de sí misma.
- 91. Así, la razón es instrumento de referencia fundamental, pero no es *solo* la razón el elemento que configura la dignidad. En efecto, hace falta un mínimo de razón para hacer efectivo un derecho por uno mismo. La razón, es la base para hacer uso efectivo de la libertad. No es posible elegir, (uso de la libertad), si no se distingue entre las alternativas a elegir. Sin embargo, la justicia no puede tener como única base la capacidad de razonar o de negociar. El acto jurídico puede ser válido aun si se demuestra que la decisión fue emitida sin uso efectivo de la razón, siempre que se pruebe la buena fe y la ausencia de perjuicio.
- 92. Ana Estrada, para el sistema jurídico y para la sociedad, es una persona que goza del derecho a la dignidad. Precisamente, en uso de su libertad de elegir, de exigir tutela jurídica y de decidir, es que se admite su

- participación en esta causa, interpuesta por la Defensoría del Pueblo en su beneficio. Seguirá siendo digna si eventualmente, no puede expresar su voluntad y lo seguirá siendo si, también pierde el uso de su razón.
- 93. La dignidad, sin embargo, tiene el componente de la autopercepción. Coloquialmente puede decirse que, una persona no se siente digna de un atributo otorgado, pero ello no implica que jurídicamente se le desconozca ese derecho. Un delincuente, al ser sancionado, perderá su libertad y las mayores restricciones dada su peligrosidad, sin embargo, el sistema jurídico, dispone que, *dentro de lo posible*, debe respetarse su dignidad. Habría que preguntarse, si el delincuente tiene una determinada percepción de su dignidad, pues puede sentirse miserable, como puede sentirse solo restringido de ella y hasta puede concebirse digno o su autopercepción puede estar distorsionada, sin que se anule su percepción o no tenga un juicio moral de su dignidad. Así, tanto la percepción exterior de la sociedad, como moral social, puede presentarse distorsionada, del mismo modo, la auto percepción puede estar distorsionada por diversos elementos, empero, ello no implica que no exista.
- 94. En otro extremo, una persona con pérdida de sus capacidades cognitivas, (Con Alzheimer avanzado, por ejemplo), podría no tener una percepción de su propia dignidad, empero, no es pura compasión o beneficencia la que debe tener el sistema jurídico y la sociedad respecto de esta persona, sino reconocerle, auténticamente, su dignidad. Sin embargo, esa misma persona, antes de ingresar a esa situación, cuando aún hace uso de su razón y aunque fuere parcialmente, sentirá que, en esa situación futura, habrá perdido su dignidad, porque la medida de su propia percepción de dignidad, será su estado de conciencia y razón. A muchas personas, nada nos da más miedo y sensación de miseria, (Es decir indignidad); que la pérdida de conciencia. A Ana Estrada le atemoriza la posibilidad cierta e indefectible, de perder las facultades físicas para ejercer su libertad, su propio pensamiento que podría estar vigente, pero piensa que se sentirá sumida en la miseria. Es una autopercepción de su dignidad y por tanto de su autonomía. Y, eso debe reconocerle el sistema jurídico, como un derecho, en tanto la medida de su propia percepción de su dignidad es aquella que expresa en el momento de lucidez yrazonabilidad.

Apoyos y salvaguardias como expresión de la razón.

95. Reiteramos la idea de que la razón es la referencia de la dignidad, y ello se reafirma de manera fáctica en el hecho de que Ana Estrada ha otorgado una Escritura Pública, designando voluntariamente apoyos y salvaguardias, en el presente, (18 de diciembre de 2020), cuando está vigente y lúcido su razonamiento, que así lo ha determinado la Notaria, para que se obre conforme a su voluntad, cuando no pueda expresarla o cuando haya perdido sus facultades de raciocinio, precisando sus decisiones sobre sus bienes, sus actos jurídicos, su salud e inclusive su vida. Este acto jurídico, empero, mientras tenga capacidad de raciocinio; es revocable o modificable, en tanto son decisiones unilaterales. No se está amarrando al mástil, como en la figura literaria de Ulises frente al canto de las sirenas. Sin embargo, debe presumirse que ésta sigue siendo su voluntad, cuando no pueda expresar un cambio de esa voluntad o, su raciocinio haya sido afectado por una discapacidad mental.

El ser humano como acto de libertad.

96. El individuo es propietario de su libertad, pero nada lo hará menos libre que la pérdida de razón y consecuentemente, de su conciencia, respecto de esa libertad.

La vida digna, entonces es aquella que tiene un sentido mutuo, aquella, que nos reconoce el derecho y la sociedad y aquella que percibimos cada uno de nosotros, sobre nuestra propia persona. Para que esto último ocurra, es preciso el uso de la razón y es por eso la mejor referencia de su propia dignidad, sin embargo, esta

dignidad trasciende a la razón porque es inherente a la persona humana, sea cual fuere su condición y capacidad.

Hemos hablado también de la expresión de voluntad, lo que a su vez implica el uso de la libertad. La libertad es, antes que la razón, lo que hace al ser humano. Fernández Sesarego, concibe el derecho como libertad y la libertad lo que hace al hombre.

- "...somos conscientes en la actualidad que el ser del hombre, aquello que lo hace ser lo que es, no es la razón, sino la libertad. Se ha comprobado científicamente que los mamíferos, especie a la que pertenece el ser humano, poseen psiquismo. Luego, no es la razón, los sentimientos o la voluntad lo que diferencia al ser humano de los demás mamíferos. El ser humano es el único mamífero cuyo ser es la libertad, lo que lo hace capaz de sensibilizar o vivenciar valores abrirse a la espiritualidad, y crear reglas jurídicas. La libertad es lo que hace al ser humano un ente diferente a todos los demás entes del mundo"6.
- 97. Siguiendo a este jurista diremos que, en uso de esa libertad, el ser humano se proyecta, hace planes y su vida es una sucesión, concreción y nuevos planes en una lucha por logarlos y alcanzar su propia perfección que, aunque no la consiga nunca, determina su dignidad o hace que la dignidad le sea inherente, porque no lo hace objeto⁷, sino fin. A partir del *pienso luego existo o luego soy*, cartesiano el ser humano se percibe a sí mismo, se asume, elige y al elegir, hace uso de su libertad.
- 98. La libertad está también consagrada en nuestra Constitución, ella es también inherente al ser humano y la libertad significa la autonomía de tomar decisiones, incluso la de vivir. Vivir así, no es un deber, ser libre sí lo es y en esa medida puede proyectar su vida, también su muerte. La libertad, empero, es también un bien que puede ser limitado, de hecho, el ser humano se limita en su libertad para no hacer daño a otros, el Estado es un límite a su libertad, pero es también garante de ella. Al ser límite y garante, es posible que legisle, o decida mediante actos concretos esos límites y, estos son excepcionales.

El dolor

- 99. El sufrimiento físico o psicológico puede generar un dolor trascendente, esto es que afecte a la condición humana misma, a la dignidad. Frente a ello es un derecho el no sufrir ese dolor, sea por causa de un tercero, del Estado, de una situación estructural o de su salud.
 - "La vía negativa a la que se refiere Vásquez supone entender que la dignidad lo que viene a fijar es algo así como un "umbral mínimo", ciertos "mínimos inalterables" vinculados con "nociones negativas" como las de privación, enajenación, vulnerabilidad o incapacidad y que podrían resumirse en esta fórmula: "no ser tratado con crueldad, ni con humillación".

Aclara además que, si enfatiza la vía negativa, es porque "quizá los liberales hemos puesto el acento, unilateralmente, en la versión positiva del liberalismo con el concepto de autonomía", lo que supone haber descuidado "la otra cara del liberalismo", lo que Judith Shklar llamo "el liberalismo del miedo" y que significa precisamente la ausencia de temores, o sea, de nuevo el "ser tratados sin crueldad y sin humillación"8

100. Los seres humanos tenemos claro que, la enfermedad es sinónimo de dolor y más que eso, es la referencia más cercana al final del ciclo vital. Si bien la salud, es también un concepto no pacífico y discutible, todo ser humano, percibe que la falta de salud es la puerta que se abre a la muerte. Así, todo ser humano tiene ante sí dos opciones; la curación ola muerte. La noticia de que no hay cura, que el sufrimiento se haga intenso, que incapacite, puede hacer que la persona se sienta sumida en una situación que perciba como la pérdida de su dignidad o que esa forma de morir afecte severamente su dignidad. Una percepción kafkiana. Así, no solo es

- la falta de razón, la que generaría una pérdida efectiva de dignidad, sino la percepción clara por medio de la razón, de que no es posible hacer uso de su libertad para seguir viviendo de una manera que espera. El dolor, no es solo dolor físico.
- 101. En el caso de Ana Estrada, puede verse que narra una progresiva pérdida de sus afectos; como la pérdida de su intimidad, la pérdida de los momentos de estar a solas consigo misma y con sus pensamientos, el dolor físico que causan las "atenciones" e intervenciones de su tratamiento, la paulatina pérdida de movimiento personal, la dependencia progresiva y severa, la sensación de ser una "carga" para su familia, la pérdida de sus amores y deseos truncos y seguramente una lista más larga de sufrimientos, de pérdidas, incluso de los sueños, construyen en ella una percepción de pérdida de su dignidad y de vida digna. Entonces con lo poco que le queda, precisamente de esa libertad que está perdiendo, pide justicia, lo que para ella significa, poner fin, en determinado momento a esa paulatina pérdida de dignidad. Consideramos así que, esta es una razón para que la justicia exista. El Estado, solo puede respetar ese acto de rebeldía frente a la ley. El Estado no puede dejar de tener piedad⁹.

El suicidio (la tentativa), no es sancionado en las normas positivas, es impune. Si bien la moralidad religiosa de un sector, rechaza este acto, de manera absoluta como una irreverencia a quien la otorgó, sin embargo, hay otro sector y una teoría que admite o deja al debate en determinados casos, precisamente con base al uso de la libertad y la dignidad. Nuestro Estado laico, el sistema jurídico Constitucional de valores cuyo elemento central es precisamente la libertad y la dignidad, tiene una misión más allá del punto vista religioso y es de la parte que nos ocupamos primero, esto es, la de hacer justicia ante el reclamo de una persona.

- 102. Habíamos dicho que, la medida de esa vida digna es la propia persona. La medida de la intimidad, (un elemento de la dignidad), la puede dar solo la misma persona. En la actual sociedad de masificación de medios, muchas personas exponen sus vivencias en los medios y redes sociales, unos más que otros y el grado de exposición, solo lo pueden dar esas mismas personas, es decir, que cada quien expone lo que considera aceptable y no publica lo que considera su intimidad. Así, solo puede reclamar y proteger el espacio que la misma persona no expuso. De hecho, tiene derecho a proteger ese grado de intimidad que la misma persona considera tal. Ana Estrada reclama estar un tiempo a solas, pues considera que, tener una persona que la cuide las veinticuatro horas al día, implica también que se restrinja o elimine su intimidad, pero hay otra parte que expone, en redes sociales, en medios de comunicación; habrá una parte que aún considera que es su intimidad y tiene derecho a proteger ese espacio, aunque minimizado, es parte de su intimidad y es una circunstancia de afectación a su libertad. De ello podemos concluir que aun el tratamiento en su favor, puede tener una consecuencia que afecte otro derecho, que en algún momento puede ser más apreciable o importante.
- 103. De este modo, podemos concluir válidamente que, existe el derecho a una vida digna, que tiene como base a la libertad y autonomía; empero, la misma validez de este concepto, implica que exista el derecho a proyectar su vida y en ese proyecto pensar en su final, lo que la demandante considera; una muerte digna. Algunos podrían entenderla, como una muerte natural, una muerte heroica, una muerte trascendente, tal vez sólo una muerte sin sufrimientos de cualquier tipo; es decir libre, como la queremos la mayoría de los mortales. El mismo derecho que sostiene la libertad de vivir o de vivir con libertad, sostiene el derecho a concluirla, si la vida carece de dignidad, de morir cuando aún la vida es digna o de no pasar una situación de indignidad que arrastre a la muerte indefectiblemente.
- 104. En el acto de audiencia, se le preguntó a la demandante a cerca de su estado de salud mental y de ser el caso, de su tratamiento psicológico y psiquiátrico, a fin de determinar con claridad, si esta percepción de indignidad tenía bases en el razonamiento que ella tiene sobre su estado de salud o si independientemente de esas bases

fácticas, subyace una condición psicológica únicamente; pues puede considerarse que algunas personas, por cualquier causa, prefieren seguir viviendo a pesar del dolor y deterioro. Es decir que, es preciso distinguir la percepción basada en una situación específica y de dolor o limitación física, causante del sufrimiento; respecto de una patología psicológica, (depresión), que conduzca al deseo suicida.

- 105. Nuestra legislación, (nuevamente), no distingue entre el suicidio por causas patológicas de la psiquis, respecto de condiciones reales y objetivas que determinen alcanzar el *derecho* que en esta parte hemos considerado. Empero, está claro que el deseo suicida por causas patológicas, a lo que tiene derecho, es a un tratamiento. Una persona que, padece de una enfermedad momentánea o incluso reiterada de acabar con su vida, por causas atribuibles a una patología, luego de un tratamiento, posiblemente agradecerá a quien lo haya acudido en su momento de crisis, cuando haya vuelto a su normalidad. La autopercepción, en este caso no tendría bases para acceder a un nivel de derecho a acabar con su sufrimiento por medio de la muerte, sino por medio de un tratamiento. En caso de que la afectación psíquica no tuviera tratamiento efectivo, igualmente, ese deseo suicida no es atendible como un derecho, en tanto, la voluntad, la libertad, está afectada de una distorsión por la enfermedad que afecta precisamente su razón y su voluntad, que como hemos dicho, es la medida de su libertad y de su dignidad. Como tal, no es propiamente expresión de su voluntad. En tales casos es, además, sancionable, la asistencia al suicidio, aun cuando reúna las condiciones de piedad y petición de parte.
- 106. La demandante sostiene como el derecho a "... decidir de manera informada y expresa, controlar el fin de la vida debido a dolores incurables y condiciones de deterioro que vulneran la dignidad de quien padece una enfermedad incurable, degenerativa y progresiva", añade que, este es un derecho que si bien no está inscrito en el listado de derechos constitucionales en la Carta de 1993, ello no impide que se le considere como tal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3° de la Constitución que establece la cláusula de númerus apertus o lista abierta, de derechos constitucionales al ser, la muerte, una fase esencial de la vida misma, que no es posible mantenerse inerte ante ella, cuando la vida no merece la pena vivirla, lo que implica solo reconocer la autonomía del individuo, de decidir su propia existencia con dignidad. Argumenta además que ".... la norma constitucional que exige al Estado proteger la vida frente a privaciones arbitrarias no se contrapone al reconocimiento del derecho fundamental a la muerte en condiciones dignas". Sostiene que se trata de un derecho que puede ejercerse solo en condiciones específicas y extraordinarias, donde se busca efectivizar el último espacio de libertad disponible en el cuerpo y su vida, cuando prolongar la vida significa una afectación irreversible a su dignidad y una forma de trato cruel.
- 107. Uno de los procuradores sostiene que, el hecho de no haberse demostrado que Ana Estrada padezca de dolores intolerables, sería fundamento para no inaplicar la norma, en el entendido de que solo se trata de dolor físico. En efecto, Ana Estrada no ha manifestado que padezca de dolores insufribles o intolerables, lo que padece es de una enfermedad incapacitante, lo cual sí es físico. Está perdiendo paulatinamente la capacidad motora y algunas capacidades orgánicas, que algunas intervenciones como la gastrostomía son dolorosas en algunos momentos, pero no es lo que describe como insufribles. Así, según el procurador, no se cumpliría taxativamente con la parte del texto legal que dice, "... que lo solicita de manera expresa y consciente poner fin a intolerables dolores...". En caso fuese válida la interpretación del Procurador que solo puede aplicarse este artículo en caso de dolores (físicos), intolerables, deberíamos interpretar, a contrario sensu, que en caso de que no existiesen dolores, el homicidio piadoso no es punible, como lo es el suicidio, por falta de tipicidad. Esta judicatura entiende así, sin que ello sea analogía, o interpretación extensiva, que cuando la norme dice dolores, se está refiriendo a la sensación íntima de sufrimiento. El dolor finalmente puede ser intolerable para algunas personas más que para otras, frente a una misma lesión y los

analgésicos pueden evitar significativamente el dolor, aunque en algunos casos implique afectación de otras sensaciones y de la conciencia.

Homicidio piadoso.

108. Se ha solicitado la inaplicación del artículo 112 del Código Penal cuyo texto dice:

El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.

Es en efecto una norma autoaplicativa; no requiere acto adicional o reglamento que viabilice su aplicación. En caso una persona, especialmente un médico, (responsable de su cuidado), realice tal acto, será pasible de procesamiento y sanción de oficio.

109. Habíamos señalado antes que, no se trata de un caso ya consumado donde, por ejemplo, un médico a quien se le imputa el hecho típico, haya interpuesto un Amparo. En este caso, es la propia persona que pide ser asistida en la consumación de su muerte quien solicita la inaplicación para su cooperante. Así, el acto, no está consumado, es futuro y no inminente, (en el sentido de próximo en el tiempo), más bien condicionado a la estimación de su pretensión y a su propia voluntad. Sin embargo, de acogerse la pretensión, en el sentido de que estimar el derecho a morir por voluntad propia, pero con ayuda, es ineludible pronunciarse sobre este extremo; pues no tendría sentido considerar que la muerte digna es un derecho y al mismo tiempo, aplicar la sanción a quien ayude a cumplir ese derecho.

Empero, es preciso tener en cuenta que no se trata de un caso consumado, más bien, se solicita su inaplicación para el caso futuro pero factible, de lo que considera el cumplimiento de su derecho a la muerte digna.

- 110. La demandante sostiene así que, es una norma cuyos efectos jurídicos crean una situación inconstitucional que impide el ejercicio del derecho fundamental a decidir las circunstancias en las que la señora Ana Estrada Ugarte desea tomar control sobre su vida y poner fin a sus sufrimientos intolerables que experimenta producto de la enfermedad que padece. Ello, en tanto impide a los profesionales médicos ejecutar el procedimiento médico cuando ello sea factible y así lo decida, que también impide una regulación sanitaria al respecto, por lo que considera procedente. Añade que ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin consentimiento previo y como tal tiene derecho a negarse a recibir o continuar el tratamiento y a que se le explique las consecuencias de esa negativa, de acuerdo a la Ley general de Salud, lo que constituye el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y de tomar una decisión consentida e informada, pero que además, implica que el Estado asume el reconocimiento de que su deber de proteger la salud y la vida de las personas es desplazado por el derecho a la autonomía del individuo, pasando del modelo de beneficencia de la ética médica al modelo de la autonomía que toma a la persona, como la más capacitada y legitimada para decidir en base a sus valores y creencias personales. La regla señalada solo tiene como excepción los casos de emergencia, donde no es necesario recabar el consentimiento informado del paciente o cuando existe riesgo comprobado para la salud de terceros o de grave riesgo para la salud pública, lo que implica que este derecho tiene su límite en el derecho de los terceros.
- 111. Reitera que, su pedido no es que la dejen morir rechazando los tratamientos requeridos
 En su caso, sino que el Estado le permita controlar y decidir en uso de su autonomía y en ejercicio del libre
 desarrollo de su personalidad, así como a su derecho a no recibir tratos crueles e inhumanos y que, para la
 materialización de ello, requiere que la participación de terceros, no sea criminalizada.

Cita el caso de la Sentencia 970-14 del Tribunal Constitucional de Colombia, donde se dispuso la creación de comités cuyas funciones fuesen las de acompañar a la familia y al paciente en ayuda psicológica, médica y social para que la decisión no genere efectos negativos, atención que debe ser constante, durante las fases de decisión y ejecución del procedimiento, mediante Comités de tipo científico – interdisciplinario para el derecho a Morir con Dignidad, como garantes de todo el procedimiento.

112. Vamos a recoger de la demanda, también las definiciones; teniendo el concepto de: A. Suicidio asistido o auxilio al suicidio, como la acción del tercero que, sin contribuir a la formación de voluntad del suicida, lo ayuda a que se concrete. Distinto a la instigación al suicidio donde el tercero "siembra la idea", penalizado en el artículo 113 del Código Penal. B. La eutanasia; que supone la intervención de un profesional médico a petición expresa del paciente que padece de enfermedad incurable y que procura poner fin a sus dolores. C. El homicidio piadoso, tipificado en el artículo 112 del Código Penal como delito al que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente poner fin a sus intolerables dolores, D. cuidados paliativos. "un planteamiento que permite mejorar la calidad de vida de los pacientes (adultos y niños) y sus allegados cuando afrontan los problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal, planteamiento que se concreta en la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la detección precoz y la correcta evaluación y terapia del dolor y otros problemas, ya sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual" y E. Muerte en condiciones dignas: Acorde a la Corte Constitucional de Colombia, es un derecho que garantiza que, "luego de un ejercicio sensato e informado de toma de decisiones, la persona pueda optar por dejar de vivir una vida con sufrimientos y dolores intensos".

El tipo penal cuestionado, en la doctrina.

113. Existe ya un largo debate en sede nacional sobre este artículo, donde los juristas, se han mostrado mayoritariamente críticos. Así; para Javier Villa Stein¹⁰, este tipo penal se incorpora en el Código Penal de 1991 y considera que:

"Al codificador se le pasó por alto la eventual anticonstitucionalidad del tipo penal creado pues la Constitución de 1979, consagraba en su Art.2 él «derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad» y este derecho de rango constitucional, se ve atacado en la hipótesis de una agonía o muerte indigna. Respecto de la Constitución de 1993, ocurre otro tanto, pues en este caso se colisiona el tipo penal del homicidio pietista, con lo dispuesto. Con el Art. 1 del estatuto peruano que consagra «la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado» pues se mata por piedad y en precisa salvaguarda de la vida y muerte digna, este acto de supremo amor no puede ser castigado sin caer en la inmoralidad y la estupidez. El artículo 2 del estatuto peruano asimismo defiende el libre desarrollo de la persona, derecho que igualmente se pone a salvo en la dogmática, pero justa hipótesis del homicidio por piedad".

El ex Juez hace además un análisis y recuento de las distintas figuras que pueden darse dentro de este artículo del código penal, sobre las que también nos ocuparemos más adelante, para determinar los casos de interpretación conforme a la constitución o en contra de la misma, a fin de determinar su inaplicación. Es de notar también que concluye con un breve comentario sobre el principio de oportunidad y su aplicación al caso.

Es interesante un artículo de Reyna Alfaro¹¹, por el recuento que hace de los juristas peruanos y su posición u omisión al respecto, denotando la tendencia mayoritaria por la descriminalización; citando a Salinas Siccha, Villavicencio Terreros, Villa Stein, Chirinos soto, Bramont Arias, García Cantizano y Momethiano

Santiago; el autor por su parte sostiene:

"Justamente la configuración de una especie de deber constitucional de tutelar la vida contra la voluntad de su titular colisiona con el principio de dignidad de la persona. La con figuración constitucional del derecho a la vida no se limita a reconocer el derecho a vivir en términos estrictamente biológicos, si no que compren de las condiciones de vida que, en un Estado de derecho, deben necesariamente ser compatibles con el principio de dignidad de la persona. Esta configuración constitucional del derecho a la vida, por otra parte, no puede vincularse a determinadas concepciones religiosas que propugnan la santidad de la vida..."

Más adelante, sobre el bien jurídico; vida y su disponibilidad dice:

"La calificación de la vida humana como bien jurídico absolutamente in disponible supone una suerte de reconocimiento de su absoluta falta de relación con la voluntad de vivir de su titular, y constituye, además, una contradicción total con la existencia de supuestos reconocidos constitucionalmente de disposición de la vida por parte del Estado, como la pena de muerte en casos de traición a la patria durante guerra exterior".

114. Resultan también importantes las consideraciones técnicas de este tipo penal, al señalar que su principal elemento es que es un homicidio a petición, sea de su forma activa o pasiva, es decir, por acción directa u omisión del acto necesario para que siga con vida y que determine el alargamiento de la vida, siendo que, para el autor, estos casos no serían típicos, puesto que no se provoca la muerte ni se adelanta la misma, solo se hace más tolerable. Precisa que el único sujeto pasivo del delito, es un enfermo incurable, que sufre intolerables dolores y excluyendo a las enfermedades psíquicas, puesto que resulta discutible establecer que la expresión de voluntad se hace en estado de conciencia. Ello implica además que el consentimiento es necesariamente expreso. Precisa además que:

El móvil es indudablemente el piadoso que es uno de los sustentos del menor desvalor de la acción que justifica la menor carga punitiva del homicidio a petición, relacionado a la menor peligrosidad del autor en relación al homicida ordinario. No obstante, conviene recordar —con Eser— que la mayoría de ordenamientos jurídico-penales considera irrelevante el motivo del autor para realizar el homicidio, en la medida que lo realmente trascendente es la petición expresa de morir de lavíctima.

115. Asimismo, se puede comprobar que, es solo desde el actual Código Penal que se tipifica este acto como delito; esto es que más antes fue un acto no punible, pues el texto del anterior código de 1924 dice:

Código penal de 1924. Art 157. El que por **móvil egoísta** instigare a otro al suicidio **o lo ayudare a cometerlo**, será reprimido si el suicidio se ha consumado o intentado, con penitenciaría o con prisión no mayor de cinco años.

Se observa así, que se sanciona solo el *móvil egoísta*, no el móvil piadoso que, al no nombrarse, se entiende que no es punible, por el principio de legalidad y tipicidad penal.

116. Un artículo más extenso y muy interesante es el de Claux Roxin, con una detallada tipología de la eutanasia y figuras relacionadas, que incluyen el tipo penal del caso que nos ocupa. Esta resolución no pretende ser un recuento de lo señalado por estos juristas, por lo que tomamos de este artículo únicamente la Toma de posición, en tanto considera que:

"Por otro lado, aún hoy en día no pueden ser controladas suficientemente todas las situaciones de profundo padecimiento (65); y suceden realmente casos en los que existe un deseo de morir apremiante y

comprensible como lo demuestran sobradamente los ejemplos ya expuestos extraídos de la jurisprudencia. Pero se debe tener presente que, de acuerdo con el Derecho alemán –a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los Ordenamientos jurídicos extranjeros-, la complicidad en el suicidio siempre ha sido impune. La forma de intervenir desarrollada por Hackethal (vid. supra E I) permanece bajo el Derecho vigente como la última salida posible, cuando fracasan todos los medios para hacer superfluo el inaplazable deseo de morir. Si en un caso de esta naturaleza quien desea morir bebe por sí mismo el caso cuyo contenido le depara una muerte plácida, sólo él ha dado el último paso. Esto me parece siempre más tolerable que un homicidio ajeno legalmente institucionalizado y procedimentalmente regulado.

Si se tiene esto en cuenta, únicamente subsisten raros y extremos supuestos en los que quepa practicar legítimamente una eutanasia activa, por encontrarnos con una persona deseosa de morir por estar mortalmente enferma y padecer graves sufrimientos, que ni puede ser liberada de sus padecimientos ni está en situación de poner fin a su vida por sí misma. Así, esto puede suceder con una persona completamente paralizada y amenazada por una muerte por asfixia. Me parece que un caso como el resuelto por el Tribunal de Ravensburg (supra D I 4) pertenece a esta categoría. El marido, que en este caso proporcionó la muerte a su mujer mediante la desconexión de un aparato de respiración artificial, tampoco habría merecido pena alguna si, en vez de la interrupción técnica del tratamiento, hubiera recurrido a su muerte directa "12."

Nótese que el jurista considera que es más tolerable el suicidio por mano propia que el "homicidio ajeno legalmente institucionalizado y procedimentalmente regulado"; sin embargo, considera que en el caso en el que la persona, siendo víctima de sufrimientos desmedidos y deseosade morir, no puede poner fin a su vida por sí misma, que sería el caso que nos ocupa, dice que este sería un caso "en los que quepa practicar legítimamente una eutanasia activa".

- 117. Frente a estas posiciones existen por supuesto, opiniones en contra en la doctrina, basadas fundamentalmente en el valor de la vida como bien absoluto y respecto del cual, diremos que está claro que, la vida, como todo derecho, tiene límites, en nuestra constitución, tales como la pena de muerte en caso de guerra exterior y la defensa propia y situaciones no punibles, como el suicidio, el duelo, el aborto terapéutico, la defensa propia y la acción necesaria de la policía, (actuación conforme al deber). Aun así, es posible defender el fundamento, señalando que dichos límites, debieran ser abolidos. Esta judicatura, al respecto, debe expresar que, no es posible en esta resolución hacer una toma de posición sobre todos los extremos, puesto que no son materia de esta causa, no han sido expuestos por las partes y no es preciso hacer un ejercicio académico, pues precisamente ese es el límite de una decisión jurisdiccional, esto es, el de no hacer pronunciamientos sobre temas que no son puestos a consideración del Juez.
- 118. Debemos entender así, en relación al caso en concreto que, sobre la base de lo expuesto por la doctrina, la eutanasia en un caso como el de Ana Estrada, más que un homicidio piadoso, como lo denomina el tipo penal en cuestión, es permitir que la naturaleza humana concluya su trabajo; ello, teniendo en cuenta que, si no se le hubiera aplicado los necesarios tratamientos a los que se le ha sometido, ella tal vez, ya habría fallecido. Estos tratamientos eran necesarios, los ha deseado y aceptado ella misma, su familia y el Estado en nombre de una sociedad solidaria; pero, llegado un momento en el que se ofende a su propia dignidad y sin tener al otro lado una real posibilidad de curación y de vida digna; solo se llegará al punto en el que se le estará impidiendo morir naturalmente, como corresponde a todo ser humano. El estado vegetativo, y sus similares clínicos, no son estados naturales, dicen los médicos.

119. De otro lado, tenemos presente que, el debate también se ha dado en sede legislativa, así, se tiene conocimiento de la Página Web del Congreso de la República que, el 04 de marzo del año 2015, se presentó un Proyecto de Ley N° 04215/2014 CR, *Ley que despenaliza el homicidio piadoso y declara de necesidad pública e interés nacional la implementación de la eutanasia*", proyecto que no tuviera éxito en el trámite parlamentario. Así mismo, se ha tomado conocimiento por medios de comunicación públicos, que se habría presentado un nuevo proyecto de ley, recientemente, cuyo trámite apenas inicia. No es posible, para esta judicatura, empero, esperar o suspender el proceso, en relación al anterior ni al nuevo proyecto de ley, por las razones que hemos señalado en la primera parte de esta resolución.

La doctrina del doble efecto (PDE).

- 120. En el debate de la eutanasia, se ha tomado, reiteradamente, como criterio de su fundabilidad, (o infundabilidad), el principio o doctrina del doble efecto. Es de verse que, este principio, se usa extensamente y en diversos grados. En el presente caso, nos guiaremos de Alejandro Miranda Montesinos ¹³. Este Principio o Doctrina, nace de la situación en que, para conseguir un determinado fin o efecto bueno, se producirá un efecto malo, dependiendo de la proporcionalidad de uno y otro; es lícito o no, ese acto. La doctrina viene desde Grecia, pasando por los filósofos escolásticos, Santo Tomás de Aquino y vuelve a aparecer entre la moral y el derecho del Common Law del siglo pasado, siendo un hito el caso Vecco vs Quill de 1997, en la Corte Suprema de Estados Unidos.
- 121. En nuestro medio, los denominados límites o excepciones al derecho a la vida, pueden fundamentarse precisamente en este principio, tales como la legítima defensa, la actuación conforme al deber de la policía, el aborto terapéutico y la praxis médica. En efecto, los médicos a menudo se ven en esta disyuntiva, pues un medicamento alivia o cura un mal, pero tiene efectos secundarios nocivos, donde tendrá que contemplar la proporcionalidad de efecto secundario, si el efecto, secundario es insignificante, el criterio de proporcionalidad, será sencillo, pero a medida que el riesgo o mala consecuencia se incrementa, se inicia el debate sobre la punibilidad. Así, es necesario distinguir entre lo directamente voluntario y lo indirectamente voluntario; esto es, lo que se quiere alcanzar, (fin) y aquellos efectos colaterales que se debe o puede prever, pero que no es el fin ni el medio. En consecuencia, no es responsable, de todos los efectos malos por igual, sino que existe una diferencia entre lo que se pretende y aquello que solo se prevé y será medido en proporción a la importancia de la finalidad de su acción, frente al mal causado.
- 122. El efecto malo, que *prima facie* sería imputable *ad culpam* al agente por haber sido causado a sabiendas, deja de serle así imputable "consideradas todas las cosas". El principio no opera, pues, como una causa de excusa, ya que el efecto malo no es causado involuntariamente. Tal efecto es considerado en la deliberación que precede a la elección de la acción, y el agente tiene la posibilidad física de evitarlo, absteniéndose de realizar esa acción. Por eso es voluntario. Pero no lo es directamente, porque no es considerado como una razón para la acción, es decir, no es el efecto malo la razón por la que el agente hace la elección que hace. En este sentido, debe decirse que el efecto malo no es querido o buscado por sí mismo, pero sí es deliberadamente aceptado.
- 123. Esta doctrina establece condiciones para su admisibilidad: 1° que el fin del agente sea honesto; 2° que la causa sea en sí misma buena o al menos indiferente; 3° que el

efecto bueno se siga de la causa [al menos] con igual inmediatez que el malo; 4° que el efecto bueno al menos compense al malo". A su vez, si se cumplen simultáneamente los dos requisitos siguientes: (i) que el efecto malo no se busque ni como fin ni como medio; y (ii) que exista una razón proporcionalmente grave para aceptarlo. En Summa theologiae, (II—11, q. 64, a. 7, c,) donde expone las razones para probar que no es ilícito a alguien matar a un hombre en defensa de sí mismo.

- 124. Dice allí santo Tomás que "nada impide que un solo acto produzca dos efectos (duos effectus), de los cuales solo uno sea intencional (sit in intentioné) y el otro esté fuera de la intención (praeter intentionem). Tal cosa es precisamente lo que sucede en el caso de la defensa occisiva, pues "del acto de alguien que se defiende a sí mismo pueden seguirse dos efectos (duplex effectus): uno, la conservación de la propia vida; otro, la muerte del agresor" Ahora bien, para que la defensa sea lícita es necesario que exista una debida proporción entre la acción y su fin, ya que "un acto que proviene de buena intención puede hacerse ilícito si no es proporcionado al fin (proportionatus fini). El agente debe estar más obligado a conseguir el primero que a evitar el segundo: Francisco de Vitoria, recoge la distinción entre matar per se (o ex intentione) y matar per accidens (o praeter intentionem) y recurre a ella, en su tratamiento del ius in bello, para justificar la aceptación de bajas civiles como efecto colateral de acciones bélicas.
- 125. Se da un debate sobre si existen bienes o derechos absolutos, John Finnis, dice que; una doctrina de esta naturaleza elimina por su base la posibilidad de que existan derechos humanos absolutos (como el derecho a no ser privado directamente de la vida como medio para ningún fin ulterior, y otros que constituyen la garantía de la dignidad de las personas), ya que, según ella, no hay formas de tratar a un ser humano respecto de las cuales se pueda decir que, cualesquiera que sean las consecuencias, nadie debe ser jamás tratado de esa forma.
- 126. El juicio de proporcionalidad o la ponderación no puede medir o comparar bienes de manera simple. Alguien puede defenderse matando a cinco agresores; y la madre puede someterse a la quimioterapia a pesar de que espere mellizos. Dos muertes no son peor ni mejor que una.
- 127. Así, en la sistematización común de estos autores se dice que la causa o razón excusante (i.e., el efecto bueno) debe ser tanto mayor cuanto: (i) más grave es el efecto malo; (ii) más próximo es el efecto malo; (iii) más seguro es que se seguirá el efecto malo; y (iv) mayor es la obligación de impedir el efecto malo. Si el militar, sin otra razón, elige la bomba de mayor potencia, eso no puede ser sino señal de que intentaba la muerte de los civiles, a lo menos como fin secundario o suplementario de su acción. Por el contrario, la falta de proporción entre el efecto bueno y el efecto malo no implica necesariamente que el agente intente el efecto malo.

De lo glosado, sobre las tesis este autor, Alejandro Miranda, podemos concluir que; desde la decisión que un médico toma para recetar a un paciente un medicamento con efectos adversos, hace una valoración del bien que decide proteger, considerando en este caso que, el efecto adverso es menor o más soportable, frente al beneficio que se pretende lograr; de ello pasar a la valoración del excesivo sufrimiento, frente a una vida indigna, es cuestión de asumir cuál es el bien de menor valor y por tanto a sacrificar.

El principio del doble efecto y la eutanasia.

128. Se distingue la eutanasia voluntaria y el suicidio médicamente asistido, cuyo objeto es matar al enfermo para poner fin al sufrimiento; de la sedación terminal o los tratamientos paliativos del dolor que pueden acortar la expectativa de vida, pero que busca únicamente aliviar su dolor, aunque en ellas el agente prevea el efecto colateral muerte. John Finnis¹⁴ dice que, existe una diferencia moral y jurídica fundamental.

- 129. En los casos Rodríguez vs. British Columbia (1993) y Vacco vs. Quill (1997), las Supremas Cortes de Canadá y de los Estados Unidos, respectivamente, apelan a la distinción entre intención y efecto colateral para justificar el distinto tratamiento que da el Derecho a la eutanasia o al suicidio asistido, por una parte, y a los tratamientos paliativos que aceleran o pueden acelerar la muerte, por la otra.
- 130. Un debate adicional es la determinación de la intención, pues bajo esta doctrina, el juicio de proporcionalidad mide el efecto más que la intención.
 - El principio del doble efecto en la protección constitucional de los derechos fundamentales es de una aplicación extensiva, en la que el principio se emplea como criterio para juzgar la conformidad de las leyes u otras disposiciones inferiores con los preceptos constitucionales. En el moderno derecho constitucional, el principio de proporcionalidad, tiene su antecedente, en esta doctrina del doble efecto.
 - Un ejemplo fue el caso de dos personas que cuestionaban la prohibición de drogas, alegando que era parte de su rito religioso; sobre lo que la suprema Corte de EEUU resolvió que si la intención de la prohibición, no estaba dirigida a afectar la religión, pero esta tenía un efecto colateral, no había afectación de le Primera enmiendo que protege el derecho de culto.
- 131. En otro artículo ¹⁵ el mismo autor hace una más extensa explicación con aplicación del principio de dignidad humana, considerando que, si bien hay una faz prohibitiva de este principio, según la cual, existen derechos absolutos, que siempre estará prohibido afectar, empero existe una faz permisiva. Así, en el ejemplo del homicidio, esta teoría vendría a decir que se viola la dignidad humana en el homicidio del inocente y, es siempre injusto, si esa muerte es une fecto colateral previsto de lo que el agente elige.
- 132. Una posición que niegue tanto el consecuencialismo como la faz permisiva del PDE sólo podría decir que el homicidio, como acto siempre prohibido, consiste en (a) realizar una acción positiva de la que se sigue previsiblemente la muerte de un ser humano inocente, o en (b) optar por un curso de acción (acción positiva u omisión) del que se sigue previsiblemente la muerte de un ser humano inocente.

Sin embargo, una norma absoluta que prohíba (b) debe descartarse, pues es imposible de cumplir. Así, un médico que sólo puede salvar la vida de la madre con una acción de la que se sigue la muerte del feto, y viceversa, sería necesariamente culpable de homicidio, lo que es absurdo. Una prohibición absoluta de (a) no produce tal incoherencia, ya que siempre puede cumplirse mediante la omisión. Con todo, cabe objetar que la distinción acción/omisión sólo implica diferencias en el orden de la causalidad física, por lo que no hay razones para sostener que un agente, obligado *prima facie* a evitar dos efectos colaterales malos, esté siempre más obligado a evitar el que resulta de su acción que el que resulta de su omisión, cuando la acción con la que impide uno es la causa del otro. Todo dependerá, aquí, de la razón proporcionada para actuar. En cambio, la distinción; *intentado/colateral* implica diferencias en la voluntariedad, que es de donde fluye la moralidad de los actos humanos, pues los actos se consideran humanos o morales en la medida en que son voluntarios. De ahí, pues, que sea ésta la distinción moralmente relevante para fijar el alcance de una norma moral o jurídica absoluta como la que prohíbe el homicidio.

Considera además que un rigorismo absoluto limitaría inclusive los tratamientos paliativos, pues de esa acción puede preverse la muerte del inocente, incluso como efecto colateral

133. De lo expuesto, podemos decir que; en principio es válido tomar esta doctrina para analizar la licitud del suicidio asistido, en tanto, la prohibición absoluta anularía derechos como la dignidad, la autonomía y la

libertad, los mismos que deben incluirse en la mensura de la proporcionalidad, considerando además que no existe, como yahemos señalado derechos absolutos y que el derecho a la vida, igualmente tiene límites o situaciones de excepción, en la legítima defensa, la actuación conforme al deber de la policía, la guerra, la pena de muerte y aún en los casos del inocente, como la acción terapéutica de efectos nocivos, el aborto terapéutico o situaciones límite, como el ejemplo en el que un salvavidas debe escoger entre dos personas que se están ahogando, sabiendo que dejar por unos minutos el otro, significará su muerte, así; preservar la dignidad, la libertad del solicitante, evitar el dolor, en los casos del enfermo terminal o incurable, en determinados casos, puede significar también una excepción no punible.

Amicus Curiae. Proponen Cuidados paliativos.

- 134. Conforme resumimos en la parte expositiva, la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, propone que, en efecto, la muerte digna es un derecho, pero que, no debe confundirse la muerte digna con la eutanasia, pues a criterio de esta entidad, afecta el derecho fundamental, vida. Que, lo que en realidad es muerte digna, es aquella en la que no interviene un tercero, menos un médico en calidad de ejecutante, sino aquella en la que solo se procura evitar el sufrimiento de la persona en la última etapa de su vida.
- 135. Sobre este extremo debe tenerse presente que, acoger la propuesta de esta entidad, implicaría solo desestimar la demanda, pues **la demandante ya cuenta con cuidados paliativos**, con el Programa Clínica en tu casa de Essalud. Empero, debe considerarse que, siempre será una alternativa para la demandante. En efecto, la muerte digna. No es sinónimo de la eutanasia, pero, no puede considerarse que sea excluyente, conforme señalamos en otra parte, al señalar que no existen bienes jurídicos absolutos.
- 136. Otro elemento significativo del aporte de esta entidad es el debate ético de los médicos, tanto por el juramento hipocrático y el texto actual del Código de Ética y deontología del Colegio Médico del Perú, como por una eventual objeción de conciencia de algún médico y finalmente el debate jurídico, a cerca de la posible distorsión de la voluntad del solicitante, en relación a la enfermedad como condicionante. Respeto de la objeción de conciencia podemos decir, únicamente que, es una decisión respetable de toda persona, especialmente de un profesional, con base a sus criterios éticos, religiosos, ideológicos o de cualquier índole, por lo que, en caso de disponerse un cuerpo médico ejecutante, éste no podría ser obligatorio.
- 137. En cuanto a la distorsión o condicionamiento de la voluntad de la persona enferma, en efecto, todo entorno o situación personal influye necesariamente en la persona, en menor o mayor grado. Una persona saludable, tendrá una perspectiva distinta de la eutanasia, pues probablemente no se pondrá en la situación de ser la persona pasiva del hecho y aun cuando racionalmente lo hiciere, no tendrá la carga subjetiva que tiene una persona con enfermedad terminal, del mismo modo que, una persona cuyo familiar está en situación de ser pasible de una decisión de ese tipo. Sin embargo, son condicionantes también la ideología, la religión, la cultura, entre otros elementos aparentemente externos que se internalizan tanto en la persona que determinan sus decisiones. De hecho, en el caso de Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, se observa una posición inspirada en sus ideas religiosas. Ello es legítimo. Todas las personas que profesamos una religión posiblemente tomemos decisiones bajo influencia de nuestras creencias. Sin embargo, las personas en general, tenemos que tomar decisiones de todo tipo y en todas las circunstancias, por lo que no puede discutirse la validez de un derecho ni la licitud de un acto, bajo la subjetividad de que las ideas externas o las circunstancias propias puedan condicionarlas. Presumir una suerte de incapacidad de hecho a todas las personas en esas situaciones, sí sería una afectación de sus derechos. En el derecho peruano se presume la capacidad, incluso de las personas con discapacidad. Así, una situación de

distorsión debe probarse. Lo que sí puede hacerse es asegurar de que la expresión de voluntad sea genuina y se sostenga en el tiempo. En el Caso de Ana Estrada, viene acompañando esta causa y en un último escrito ha adjuntado una Escritura Pública con su declaración de voluntad, en relación de apoyos y salvaguardias y en relación a su decisión de ser asistida en caso que lícitamente le sea permitido. Esa decisión puede ser revocada en cualquier momento, mientras pueda expresar su voluntad.

Enfermedad terminal e ideación suicida.

- 138. En relación al cuestionamiento de la distorsión de la voluntad en el momento de la enfermedad, es preciso no solo hacer un ejercicio lógico, sino analizar estudios existentes sobre la materia a fin de no caer en solo conjeturas. En efecto, para fundamentar estas cuestiones, si bien los fundamentos parecen muy atendibles, empero, no son respaldados con prueba o data alguna. Ciertamente, no es posible ponerse en situaciones de laboratorio y muchas veces la propia información estadística puede presentar una faz que a primera vista respalda una posición o una tesis, sin embargo, el apoyarse en datos, resulta ser lo más cercano a una actuación probatoria, siendo que, tanto por las características del proceso de amparo, como por el tema en debate, no es posible hacer una actuación y debate probatorio en forma, respecto de cada uno de los elementos en cuestión y que otros temas son de puro derecho.
- 139. Así; no es posible, en esta causa, hacer un estudio, encuesta o actividad probatoria para determinar cuántas personas de una muestra pueden tomar una decisión en determinada situación de salud, respecto de la eutanasia asistida; nos permitimos tomar como referencia los estudios que sí existen sobre temas relacionados al suicidio en pacientes de enfermedades terminales, considerando este, como el escenario más cercano. Así, tenemos dos estudios, uno en Lambayeque y otro en Arequipa, sobre ideación suicida en pacientes terminales.

"Niveles de ideación suicida. Los pacientes con cáncer de mama en estados III y IV, obtuvieron nivel bajo de ideación suicida, evidenciándose en un 100%

Niveles de ideación suicida según dimensión

Con respecto a las dimensiones de ideación suicida: actitud hacia la vida/muerte, proyecto de intento suicida y desesperanza, se evidenció 99 % en el nivel bajo y 1% en el nivel medio. En lo referente a la dimensión de pensamientos/deseos suicidas, fue el nivel bajo el cual obtuvo 100%

Apaza (2012) analizó la ideación suicida con la Escala de Beck en 95 pacientes con cáncer en estados terminales que recibieron quimioterapia en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur de Arequipa, evidenciándose que 29,47% de los pacientes presentan un nivel alto de ideación suicida. Asimismo, se encontró que las personas con edades comprendidas entre 30-60 años evidenciaron 25% de ideación suicida y los participantes entre los 65 y 80 años, 50% de ideación suicida; de los varones encuestados el 57, 14% presenta ideación suicida y las mujeres 42, 86%" 16.

140. Otro estudio muestra:

Nuestro estudio obtuvo una prevalencia de ideación suicida de 9.8%, lo cual guarda congruencia con lo publicado por Hernández y cols (33) quienes refieren que la ideación suicida en pacientes con cáncer varía entre el 1 al 20%. A sí mismo la prevalencia de depresión en nuestro estudio fue del 45.4% dato que es coherente con el estudio publicado por García (34) donde menciona que la prevalencia de depresión en pacientes con cáncer oscila entre 4 a 58% dependiendo del estadio clínico de la población y de los instrumentos utilizados ¹⁷.

141. Es preciso tener presente, las diferencias entre; depresión, ideación suicida, (pensamientos relacionados), intentos, (actos tendientes a eliminarse o autolesionarse), y suicidio propiamente dicho.

"En el Perú, se estima que el 25% de la población sufre de depresión, y que de estos un 15% es considerado como grupo de riesgo de suicidio; además, los motivos de la decisión suicida responden, en su mayoría, a conflictos de pareja y familiares (10-12). La tasa de suicidio ha aumentado de 0,9 en el año 2000 hasta 1,01 en el año 2009 por cada 100 000 habitantes (13,14), mostrando un crecimiento que podría seguir aumentando y que genera la necesidad de estudiar en profundidad sus factores asociados." 18

De una muestra de 405 personas con sintomatología depresiva, se encontró así que, el 56% no tenía conducta suicida, (ni ideación ni tentativas), un 23% sí tenía ideación suicida; un 10.1% había tenido una tentativa no grave y un 9.9% había tenido tentativas graves 19.

Así, si comparamos las estadísticas de la población general, respecto de muestras en personas con enfermedades terminales, encontramos que, los grupos con depresión, ideación suicida y tentativas son relativamente similares o pueden variar significativamente, dependiendo del grupo, sexo, edad, etc., Esto es que, antes de que una persona pueda tomar una decisión, debería hacérsele un examen de su estado de salud mental y en su caso, disponerse un tratamiento, antes que pueda tomar una decisión, como la que se solicita en esta causa.

Ética médica

142. El Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, establece:

Art. 72° El médico no debe propiciar el encarnizamiento terapéutico. Ha de entenderse portal, la adopción de medidas terapéuticas desproporcionadas a la naturaleza del caso. El médico debe propiciar el respeto a las directivas anticipadas del paciente en lo referente al cuidado de su vida. El médico no debe realizar acciones cuyo objetivo directo sea la muerte de la persona.

Art. 69° El médico debe rechazar toda solicitud u orden para actuar en contra de la dignidad, autonomía e integridad del paciente, sea que provenga de una persona natural o de una persona jurídica.

No son normas exactamente análogas al artículo 112 del Código Penal. Sin embargo, un médico que incurre en un acto contrario a las normas éticas, podría ser sancionado de acuerdo a su Estatuto. Asimismo, un médico por sus propios criterios éticos, podría negarse a participar de una petición como la de Ana Estrada, aun cuando lo ordenase un Juez e inclusive una ley dictada por el Congreso. Al respecto, deben considerarse dos elementos; a) No existe contravención de las citadas normas del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico, b) La participación de un Comité, como el que señala la demandante deberá tener una cláusula de reserva de identidad.

Respecto de las citadas normas debe considerarse, el extremo que se considera que contravendría es la frase: El médico no debe realizar acciones cuyo objetivo directo sea la muerte de la persona. La Sociedad de cuidados paliativos considera que la asistencia en el suicidio, es una acción cuyo objeto directo es la muerte de la persona. La interpretación, sin embargo, debe tener presente el contexto legal externo, esto es que aún sin la norma ética; a) en la actualidad, ese acto es sancionado y debe entenderse que la norma ética se encuadra bajo ese contexto y b) aun con la inaplicación de la norma penal, podría decirse que no está salvada la norma ética, por lo que es preciso tener presente que, el otro extremo del contexto es que en esa norma ética, es evidente que está regulando la decisión independiente del médico, vale decir, sin que el paciente se lo solicite lícitamente, o cuando el paciente lo solicita por una ideación suicida patológica; empero, si la petición, tiene un fundamento en otros bienes jurídicos que el médico no puede ignorar y que en determinada circunstancia, son de mayor valor que una vida disminuida y dolorosa que debe proteger, en cuyo caso la norma ética queda sin base lógica, pues no es lo mismo que un médico decida por sí y ante sí, aplicar la

eutanasia, que, cumplir con la petición de un paciente, que lo hace lícitamente, en uso de una libertad no sancionada penalmente y en uso de derechos como su dignidad, su libertad y su autonomía. Esta es la principal razón por la que en esta resolución hemos sustentado ampliamente los criterios jurídicos, éticos y filosóficos del doble efecto y de los derechos fundamentales inmersos. En general, la eutanasia, es penalmente sancionable, éticamente inadmisible, sin embargo, tanto penal como éticamente, es preciso hacer un análisis de proporcionalidad entre la acción solicitada y las circunstancias especiales de la persona enferma que generan una situación de no punibilidad. En adelante, haremos un análisis de los modelos de interpretación constitucional en los que se enmarca el criterio que se establece en esta resolución, los que incluyen normas de carácter ético.

143. Otro aspecto que debe ser evaluado es que, no hay un límite preciso entre el **encarnizamiento** y los cuidados paliativos. Ana Estrada ya tiene una traqueotomía, una sonda de alimentación gástrica y se conecta a un respirador, dos tercios del tiempo de cada día; sin contar con los tratamientos y medicinas que consume. De no mediar estos elementos podría sufrir mucho y eventualmente fallecer a muy corto plazo. ¿Se puede calificar ello de cuidados paliativos o encarnizamiento progresivo? El médico así, tendría que escoger entre dos elementos igualmente prohibidos; el encarnizamiento y la eutanasia. Suprimir la respiración, finalmente podría significar una suerte de eutanasia con sufrimiento. Nuevamente, nos encontramos en el debate sobre el principio del doble efecto y su proporcionalidad.

Modelos de interpretación constitucional de la eutanasia y concretamente del suicidio asistido.

- 144. Tomamos como base la tipología elaborada por Fernando Rey Martínez²⁰, sobre este tema en el derecho comparado, y que propone cuatro modelos jurídicos, que los denomina; 1) de la eutanasia prohibida, b) de la eutanasia como derecho fundamental.
 - c) de la eutanasia como libertad constitucional de configuración legislativa y de la eutanasia como excepción legítima, bajo ciertas condiciones, de la protección jurídica de la vida.
- 145. La **eutanasia prohibida**, es aquel sistema legal en el que existe una norma específica que lo prohíbe, que podría ser de nivel constitucional o legal. De manera que dentro del propio modelo pueden darse variantes y hasta contradicciones.
 - Como podemos ver, en el caso peruano, está en este modelo con ciertas contradicciones, pues existen los artículos 112 y 113 que prohíben el denominado homicidio piadoso y la instigación y ayuda al suicidio, sin perjuicio del homicidio como figura típica general, en la que en algunas veces pueden subsumirse diferentes formas de eutanasia; lo que formalmente equivale a una prohibición de la eutanasia. Es preciso, sin embargo, señalar que la Constitución Política no lo prohíbe expresamente, puesto que podría darse el caso en el que, en algún país, esté expresamente señalado en este nivel normativo. También tenemos presente que, la Constitución de 1993 en su artículo 1. Inc. 2° establece el derecho a la vida, sin que ello implique que, por ejemplo, el suicidio (Su tentativa) o el duelo sean penalizados; asimismo, en doctrina se entiende como límites al derecho a la vida, el caso de la guerra, la legítima defensa, (Const. art. 2 Inc. 23), la actuación conforme al deber de un policía y la pena de muerte, (Const. art. 140), y finalmente la no punibilidad del aborto terapéutico, señalado en el artículo 119 del Código Penal. Así, no es posible interpretar, directamente de la Constitución que, el derecho a la vida sea un derecho absoluto.
- 146. La **eutanasia como derecho fundamental** y su fórmula legal; como modelo opuesto al anterior, también recoge en sus constituciones y otras normas el derecho a la vida como un derecho fundamental; sin embargo, se establece una relación con otros derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la integridad y a no sufrir tratos inhumanos y degradantes y la valoración de la autonomía de la persona; derechos sobre los que se construye el derecho a la eutanasia, al suicidio asistido y a la eutanasia activa directa, (por mano de un tercero). Este modelo es acusado de

permisivo y excesivo, que podría permitir el uso abusivo del derecho reconocido y que es el mecanismo abierto para la denominada pendiente peligrosa, donde la vida humana pierde su valor y el Estado, prioriza razones económicas inclusive, antes que la vida humana, al establecer razones de costos de los tratamientos paliativos u operaciones que podrían prolongar la vida. Ciertamente, las acusaciones más graves, no han sido probadas fácticamente, pero está claro que, es el modelo opuesto a la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido. Es importante tener presente que, en este modelo, existe una abundante y estricta legislación y presencia de la acción del Estado en su procedimiento y ejecución, así como un control judicial de los actos, tanto previos como posteriores al acto.

147. Como podemos ver, nuevamente, al caso peruano también puede leerse bajo este modelo, vale decir que, de acuerdo al artículo 1° de nuestra Constitución, la defensa de la persona humana y su dignidad, es el primero entre los derechos fundamentales, al ser el fin supremo del Estado. La lectura constitucional, en relación a la ubicación formal de este artículo de la Constitución, determina la importancia de la *dignidad* y al punto que precede al derecho a la vida, sin perder de vista que la libertad, en sus diversas expresiones, es también un bien protegido, un derecho fundamental; ubicado en un inciso del artículo 2°; de donde se puede colegir que, por encima de la vida biológica, lo que el Estado protege y promueve es la dignidad de la persona, su libertad, siendo su integridad física (La vida biológica), un aspecto de los derechos de la persona humana. De ello, es que la demandante, precisamente interpreta que debe reconocerse como derecho fundamental, la muerte digna, lo que resulta defendible, empero, conforme señalamos antes, nuestro modelo tiene contradicciones, pues existe la norma penal prohibitiva.

La eutanasia como libertad constitucional legislativamente limitable.

- 148. No ha sido materia de comentario ni alegación en esta causa. Esta teoría, propuesta en España, (antes de la modificación legislativa), se expone que, en términos teóricos, la muerte digna no se desprende de forma directa de los derechos fundamentales. Cuestiona asimismo que la base del derecho a dar fin a la vida por decisión propia, tenga base en el concepto de dignidad. Señala asimismo que, la dignidad es un concepto muy lato, que es una cláusula muy difusa. Dice por el contrario que el suicidio, en general, es un acto de libertad, si bien no está protegido como derecho. El Poder Público como tal, no puede establecer limitaciones a este acto, en principio por razones prácticas, pues no es posible sancionar al fallecido, pero tampoco lo hace al que lo intentó sin éxito, principalmente porque no hay daños a bienes jurídicos ajenos. Sin embargo, una prohibición de la eutanasia no es una restricción irrazonable ni arbitraria, porque perseguiría evitar riesgos de abuso y esto último sí es un interés público. Se considera así que, el derecho penal, en atención al interés público puede limitar esa libertad constitucional que permita justificar la penalización de la eutanasia activa directa, pero también despenalizarla bajo ciertas condiciones.
- 149. En este modelo sí habría diferencias de régimen jurídico relevantes entre la eutanasia activa (libertad constitucional legislativamente limitable) y la pasiva e indirecta (que formarían parte del derecho fundamental a la integridad del art. 15 CE).

A lo glosado, añadiremos que, en el caso peruano, existe como derecho del paciente, la posibilidad de rechazar el tratamiento, aun cuando eso lo conduzca a la muerte, de modo tal que, es parcialmente asimilable a esta figura la Eutanasia pasiva que consiste en la inhibición de actuar o en el abandono en el tratamiento iniciado, evitando intervenir en el proceso hacia la muerte y en su caso la eutanasia indirecta, cuando el paciente ha rechazado el tratamiento, pero se le aplican analgésicos que evitan el dolor, pero que eventualmente aceleran la muerte como efecto secundario.

La eutanasia como excepción legítima, bajo ciertas condiciones, de la protección estatal de la vida.

- 150. Una interpretación que el citado autor propone y que tampoco ha sido debatido en este proceso, empero, siendo una doctrina expuesta en foros académicos, lo analizamos. Consideramos que estos fundamentos son aplicables, en este caso al suicidio asistido o su forma jurídica, *muerte digna*. Esta tipología, parte de la *sospecha*, antes que concebirla como derecho fundamental o libertad. El suicidio no es un derecho, es una libertad fáctica no prohibida. En cuanto a la eutanasia activa directa, considera que debe limitarse para evitar el riesgo de abuso, en tanto implica la participación de un tercero que estaría jurídicamente obligado a poner fin a la vida de quien lo solicite bajo ciertas condiciones, por lo que se le consideraría un **contenido prestacional** administrado y controlado por un órgano del Estado, con controles externos, lo que la haría plenamente constitucional. Así, el Estado protege el bien *vida e integridad personal*, penalizando la acción, pero estableciendo la excepción bajo ciertos supuestos y condiciones en cuanto a los sujetos de hecho habilitantes y los procedimientos, para asegurar la protección constitucional de la vida, la libertad y el consentimiento.
- 151. Al igual que en los casos anteriores, observamos que, en el caso peruano, este modelo, es compatible con las normas constitucionales vigentes a excepción del artículo 112° del Código Penal que, no precisa excepción alguna. De lo expuesto en esta resolución, se tiene así que, es preciso tener en cuenta que; el derecho a la dignidad, determina al juzgador, al derecho y al Estado la máxima protección de la dignidad de las personas, del bien jurídico; vida, de la integridad física y psicológica de las personas y si se establecen límites al bien jurídico; vida, estos deben ser excepcionales. Es preciso señalar que, el citado autor señala que el suicidio no es un derecho, sino una libertad fáctica, con lo que concordamos, sin embargo, el suicidio se puede dar en cualquier situación, solo importa que la persona esté previamente con vida, empero, en el caso de la muerte digna, encontramos que se trata de una condición especial, de afectación de otros derechos fundamentales de la persona, como la dignidad, la autonomía, la libertad, entre otros, situación que es determinante para configurar el nacimiento de un derecho a tomar decisión, sobre el momento, situación o punto en el que la persona, considera que ya no le es más posible soportar y, la sociedad, por intermedio de los profesionales médicos, está en condiciones de verificar un grado extremo de sufrimiento, con lo que es admisible que tome una decisión, dentro de esta excepción a la legalidad. Este derecho, siendo un derecho derivado de otros derechos, mencionados, si bien no llega a ser un derecho fundamental, es uno que permite abrir esta situación excepcional a la protección penal del derecho a lavida.
- 152. Habíamos ya señalado que, este bien jurídico tiene límites, que estos límites son excepcionales y claramente regulados; así, en el caso de guerra, el Perú está adscrita a varias normas convencionales sobre el derecho a la guerra, en el caso de la legítima defensa, el código penal, establece como límite el principio de proporcionalidad, en el caso de la pena de muerte, se tiene como excepción la traición a la patria en caso de guerra exterior, asimismo; son excepciones el uso de la fuerza letal por parte de los órganos del Estado, como la policía, en protección a la seguridad pública, cuya acción puede ser impune, (Un policía que da muerte a un delincuente en una situación de peligro, lo hace bajo el principio de la extensión del principio de legítima defensa), siempre bajo criterios de proporcionalidad, la figura del duelo a muerte, principalmente por desuso, las especiales situaciones del aborto terapéutico, que solo lo puede practicar personal médico, en circunstancias precisas, hecho que, igualmente no es un derecho, sino una excepción como la situación de no punibilidad de las aplicaciones médicas de doble efecto. Del mismo modo, la eutanasia activa directa, no puede ser un derecho fundamental, sino que solo algunas de sus excepcionales circunstancias puede ser *no punible*, estableciéndose debidamente la proporcionalidad de las circunstancias de excepcionalidad, por situación extrema, a fin de proteger otros derechos de la persona, como el enfermo que sufre una enfermedad terminal o incurable que le causa extremo dolor o limita su vida

radicalmente, al punto de afectarse sus derechos a la dignidad, la autonomía, al libre desarrollo de su personalidad, como es el caso que nos ocupa.

Paternalismo.

- 153. Señalamos que, de acuerdo con nuestra Constitución Política, el fin supremo de la sociedad y del Estado, es la persona humana y el respeto de su dignidad; ello implica la obligación del Estado de proteger estos bienes jurídicos, siempre que no se afecten estos mismos bienes jurídicos, por lo que debe hacerse en libertad que, es otro de los bienes jurídicos esenciales. Sin embargo, las leyes en algunos casos han establecido que esta protección puede coaccionar al individuo, lo cual debe hacerse muy excepcionalmente. A ello se le ha llamado paternalismo. Dworkin hace una clasificación de este fenómeno político y jurídico de acuerdo a su grado²¹ y, considerando su doctrina general, es claro que no se trata solo de una descripción, sino que toma posición por el mayor grado de libertad. Todas las sociedades realmente existentes, empero, han recurrido a algún grado de paternalismo para organizarse, creando diversos mecanismos como la seguridad social; normas de tránsito, como el casco del motociclista y el cinturón de seguridad de los pasajeros del automóvil, bajo sanciones diversas, desde medidas administrativas hasta la legislación penal, lo que implica un grado de intervención en la libertad del individuo. En el caso de la protección de la vida, se establecen las penas más severas, considerando el bien de mayor importancia, sin embargo, se han despenalizado algunas figuras como el Duelo, principalmente por desuso; pero en el caso del homicidio piadoso, más bien se ha establecido como figura típica, a partir de 1991 en que se promulga el actual código, cuando el de 1924, solo se sancionaba, en caso de móvil egoísta. Al respecto debemos señalar que; conforme al análisis, visto líneas atrás, la casi inexistente casuística de este tipo penal, hemos considerado varias posibilidades; entre ellas la del desuso, que las causas concluyan en etapas preliminares, (Principio de oportunidad), Etc, pero, aún en el caso de la clandestinidad o criptanasia, es menester una nueva regulación; la norma, hasta donde y como la tenemos, resulta entonces, pura e ineficazmente paternalista. Ante esta situación podremos decir que, puede subsistir el paternalismo cuando, por ejemplo, el ejercicio de la autonomía o la libertad no son comprobables.
- 154. Nos explicamos; el Estado, sin ser su titular, está en la obligación de proteger el bien jurídico, *vida*, aún en contra de la voluntad de su titular si éste está afectado precisamente en su voluntad, como en el caso de las personas con enfermedades mentales donde, lo que se requiere es tratamiento médico. Hemos señalado que, es un derecho fundamental el libre ejercicio de su capacidad de parte de las personas con discapacidad, sin embargo, está claro que, como dice Atienza; ello debe hacerse; "en la medida de lo posible"²², considerando que debe respetarse y promocionarse su voluntad, empero, tanto la figura de los apoyos, como de los casos de protección en crisis, debe hacerse una conjugación fina, entre la voluntad de su titular y la protección; rol que debe ejercer la sociedad y el Estado. Por ello, está claro que la discapacidad, por sí misma, ni es causal de eutanasia, ni de protección de un derecho a muerte digna, por lo que el Estado, debe cumplir su rol paternalista, también "en la medida de lo posible". De hecho, existen otras situaciones más, en las que el paternalismo debe subsistir; sin embargo, en situaciones donde la libertad y la razón de la persona no está afectada, esta debe ser respetada, precisamente porque es el uso de su libertad y autonomía. Es preciso señalar que, hay en nuestra legislación, otros casos de libertad fáctica o no penalización como, el suicidio o el duelo, figuras no son punibles por razones diferentes al caso del suicidio asistido o muerte digna que tiene características, razones y fines distintos.
- 155. Sobre la acepción del término de dignidad en relación a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Manuel Atienza dice:

- "... las cosas que no pueden ser objeto de apropiación, porque, por esencia, son cosas de nadie: las cosas sagradas, religiosas o santas, como las murallas y las puertas de la ciudad. Y así, la idea de que la persona es un fin en sí mismo -que tiene dignidad- significa que no puede pertenecer a nadie; ni siquiera, digamos, a su portador..."²³
- 156. El respeto, protección y promoción del derecho a la vida, en nuestra sociedad es necesaria. Nuestra historia jurídica, política y social es más bien una tradición de poco respeto. En nuestro pasado político reciente, hemos tenido una guerra interna y fratricida, donde la violencia de organizaciones terroristas no respetó este derecho fundamental, ni aun los derechos de la guerra y, del otro lado, generó una respuesta del Estado, también violenta y de poco respeto a la vida. Sabemos además que, este último fenómeno político, tuvo bases en una historia de violencia, desde tiempos coloniales y que, lamentablemente no ha acabado. No se trata de una violencia ejercida sólo, por organismos políticos, sino que está inmersa en la sociedad misma. Según cifras del Banco Mundial²⁴, en el Perú se tiene una tasa de 8,2 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes, (2017), frente a 0,8 por cada 100,000 habitantes en los Países Bajos, en el mismo año, (Diez a uno de diferencia proporcional, en un lugar donde la eutanasiatiene la legislación más liberal). El INEI²⁵ en el 2018, registró 2,452, de ellos 150, se consideraron feminicidios. Por ello es necesario una vigilancia extrema del derecho a la vida pues, pueden ser causa de abuso, por lo que, en democracia, debe regularse y garantizarse el uso y despenalización de toda figura que se despenalice o autorice, con los mecanismos y protocolos que sean necesarios, esto es, con los límites que el derecho penal debe imponer. Es, bajo estos criterios que, el suicidio asistido, debe considerarse como una libertad constitucional legislativamente limitable, posición distinta a la posición de la demandante que solicita se considere como un Derecho Fundamental; sobre lo que manifestamos una posición, es decir que como todas las libertades, es un derecho, pero siendo limitable, (contrario a ser promocionable) y derivado, no llega a ser un derecho fundamental.

¿Criptotanasia?

157. Se conoce así, a la realización encubierta o clandestina de prácticas de eutanasia, tanto a petición de los pacientes como sin ella. A efectos de esta resolución, no existiendo un registro formal ni confiable; se ha buscado jurisprudencia o casuística de aplicación del artículo 112 del Código Penal Peruano, primero en libros de la especialidad penal, donde puede ubicarse abundante casuística por cada uno de los artículos del citado código; se ha utilizado buscadores habituales de la internet y el Sistema informático del Poder Judicial y finalmente se ha consultado a algunos Magistrados del área penal, Jueces y Fiscales, sobre casos en esta materia, todo lo cual nos ha sido infructuoso. No se duda que existan casos poco comunes o bibliografía muy especializada que la contenga; sin embargo, es preciso señalar que no es común, no es abundante, que nos permita hacer un análisis de casos concretos para analizar las posibilidades fuera de lo estrictamente doctrinario y teórico, pues pese a que muchos juristas han tratado el tema, (aquí citados varios), y en numerosas tesis sobre despenalización que hemos encontrado, sin embargo, ninguno de los que hemos tenido acceso, adjunta un caso en concreto. De lo que podemos colegir varias posibilidades: a) Nunca o casi nunca se ha cometido este delito desde 1991, fecha de promulgación del Código Penal vigente, ni por particulares ni personal médico, lo cual debe considerarse muy extraño, (Delito huérfano), b) Los casos que hayan ocurrido han sido concluidos en el estado procesal del Principio de Oportunidad, situación más posible, si no está la presunta víctima para que reclame, los familiares podrían optar por un arreglo económico y la pena conminada lo permite y c) Los casos han sido tramitados bajo otros tipos penales, como el homicidio simple, posibilidad más plausible, en tanto es difícil probar la petición expresa. Precisamente, en esta situación, nos ha sido facilitado un único caso. (R.N Nº 2507-2015 Lima, de la Sala Penal Permanente. 10 de enero de 2017).

- "3.1.2. Al respecto, este Supremo Tribunal considera que la pena determinada por el Colegiado Superior es acorde a derecho, en el presente caso, por las siguientes consideraciones. Es indudable que la muerte provocada por el hijo de la occisa no fue un acto abyecto, cruel o motivado por un móvil pueril, despreciable o fútil. En el contexto, en el que se produjo la muerte debe asumirse que el sentenciado fue llevado por una actitud desesperada. El sentenciado es una persona de responsabilidad restringida, no tiene antecedentes penales, nunca mostró actitudes contrarias a la observancia de la norma. Está probado que su madre le pidió expresamente que le pusiese fin a su vida. Ciertamente, esta Suprema Corte no está reconduciendo el tipo penal de homicidio piadoso, pero puede soslayar que en puridad, había un pedido constante y apremiante de parte de la víctima ..." (resaltadonuestro).
- 158. El caso, se habría tramitado bajo la tipificación del artículo 107 del Código Penal, (Parricidio), cuya pena máxima es de quince años, empero, considerando la edad del sentenciado, (18 años), y las circunstancias especiales, contempladas en el caso, pues la madre sufría de una enfermedad en estado terminal, estaba probado que reiteradamente había pedido a su propio hijo, que pusiese fin a su vida. El sentenciado no tenía antecedentes penales, ni se observaba un móvil distinto; la Corte Suprema, sin realizar una reconducción del tipo penal, es decir cambiar el tipo penal, como tampoco lo habían hecho las instancias previas; decide ratificar la pena dictada por debajo del mínimo y, además, una pena suspendida.
- 159. Así, esta judicatura considera que, existe la posibilidad de una situación de hecho en la que se ejecuta la Eutanasia o el suicidio asistido, no contabilizada o subrepticia, *Criptanasia o criptotanasia*, pues casi todos los tipos penales de nuestro código tienen abundante casuística que citar y personas que han sido penadas por estos delitos, sin embargo, resulta extraño que en este tipo penal no encontremos suficiente casuística que analizar, pues diferentes ejemplos habrían permitido ilustrar en qué casos, es razonable la inaplicación, por su inconstitucionalidad y en qué casos, debiera estar protegido por el derechopenal.

Pendiente resbaladiza.

160. La idea de considerar la muerte digna como un derecho, (aunque no fuere un derecho fundamental), y aunque lo sea en casos absolutamente limitados, podría ser pasible de una crítica frecuente que considera que se incrementa la probabilidad de que también sea establecida como derecho o legalizada en otros casos más dudosos, al punto de establecerse sistemas de abuso como el de la Alemania Nazi o tan extensos como el de Holanda, donde supuestamente existiría ya un abuso. En el citado libro de Dworkin, ya había expuestos sus puntos de vista sobre este tema; señalando que precisamente una adecuada regulación evitaría caer en los extremos, que definir reglas dejando claro los casos para el futuro, lo que es preferible que abandonar a las personas que ahora lo requieren, a quienes además se les hace más daño al no aplicar la eutanasia, que asimismo, en los casos de pacientes que no hubieran expresado su deseo sobre este tema, deben pasar por un examen probatorio muy severo, entre otras razones. A lo glosado, consideramos adecuado añadir que, en el presente caso, no se está debatiendo la eutanasia propiamente, sino el suicidio asistido. La diferencia es realmente sustancial en tanto, en la eutanasia pura, no importa o se presume la voluntad del sujeto pasivo, mientras que, en la muerte asistida o muerte digna, implica necesariamente lavoluntad del sujeto del derecho, que es sujeto activo y pasivo a la vez porque sin su decisión no es posible aplicarla ni concebirla como un derecho de ningún tipo. No es posible presumir la voluntad.

De otro lado, hemos señalado en el caso peruano que, el número de casos judiciales de aplicación del artículo 112 del Código Penal es casi de cero, lo que evidenciaría, bien una situación de criptanasia o bien que la norma es innecesaria por desuso. En cualquiera de los casos, requiere un pronunciamiento jurídico o una nueva legislación.

Test de proporcionalidad.

- 161. El Tribunal Constitucional, ha señalado que, para evaluar la constitucionalidad de una norma o acto basado en norma, es necesario hacer un análisis, teniendo como instrumento el test de proporcionalidad, que tiene como base el principio del mismo nombre. Este principio, surge en el derecho penal a partir de la prohibición del exceso y como un criterio de limitación del exceso de poder y arbitrariedad de las autoridades y policía. Como derecho fundamental, se inicia también en la ley antes que en la constitución. El supremo intérprete, sobre el particular dice en la Resolución N° 050- 2004-AI/TC:
 - "El test de razonabilidad es un análisis de proporcionalidad que está directamente vinculado con el valor superior justicia; constituye, por lo tanto, un parámetro indispensable de constitucionalidad para determinar la actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando ésta afecta el ejercicio de los derechos fundamentales. Para que la aplicación del test sea adecuada, corresponde utilizar los tres principios que lo integran, estos son; el principio de idoneidad o adecuación; por el que debe considerarse que, toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo, suponiendo dos cosas: primero, la legitimidad constitucional del objetivo y, segundo: La idoneidad de la medida sub examine. El principio de necesidad significa que, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Requiere analizar, de un lado, la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo, y, de otro, el menor grado en que éste intervenga en el derecho fundamental. Por último, el principio de proporcionalidad strictu sensu; por el que se entiende que, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de ésta debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental, comparándose dos intensidades o grados: el de la realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho fundamental".
- 162. Con lo señalado en esta resolución, respecto de la opinión de diversos juristas sobre el tipo penal de Homicidio Culposo, introducido en el Código Penal de 1991 y considerando que el Código Penal de 1924 solo castigaba la ayuda al suicidio cuando el móvil era egoísta, tenemos que, la mayoría de los tratadistas dicen que; es inconstitucional porque afecta el derecho a la dignidad de la persona que lo solicita, en tanto, el sufrimiento extremo destruye fácticamente la libertad, la autonomía y el derecho de dignidad de la persona, principalmente en su faz de no sertratado con crueldad ni humillación. Veamos así.
- 163. **Idoneidad**. Este sub principio, exige que la restricción o medida tomada sea la más idónea para lograr el fin perseguido. El bien jurídico protegido en este delito es la vida humana, de acuerdo a su ubicación en la estructura de nuestro código Penal, junto con los otros delitos de homicidio. Los juristas citados dicen que se debió tomar en cuenta que, si bien este bien jurídico es de capital importancia en nuestro sistema jurídico, desde la Constitución, debió ponderarse que la dignidad estaba también en ese nivel y analizando su ubicación, la dignidad está antes que el bien jurídico, vida.
- 164. Si bien no es posible hacer una analogía simple, como en el caso de otros bienes, como el caso de la propiedad, donde si se le sustrae a su titular, en contra de su voluntad; es delito, (Robo, apropiación, hurto), si la transferencia se hace con la anuencia del titular, es un contrato, (Venta, donación, etc.), o la libertad sexual, si es contra la voluntad de su titular es delito, (Violación), y con su anuencia deja de serlo; sin embargo la solicitud del bien jurídico vida, debe ser analizado con un criterio de proporcionalidad, puesto que no toda petición de ayuda al suicidio puede ser razonable, ni toda ayuda a esa petición puede ser impune; especialmente si el móvil, como lo sancionaba el código de 1924, es un móvil egoísta y considerando que el Estado debe proteger muchos bienes jurídicos, aún en contra de la voluntad de su titular, entre ellos la vida y la

propia dignidad. En este punto, reiteramos /y concordamos), lo señalado por Manuel Atienza, en el sentido de que, algunos bienes jurídicos, como la propia dignidad, la libertad, la vida humana y demás derechos fundamentales, si bien tienen un portador o titular, esa titularidad no es exclusiva. No es como un bien mueble o inmueble, sobre el que su titular puede disponer e inclusive destruir o donar si así lo desea. Estos son bienes de todos y el Estado tiene obligación de protegerlos, lo cual no quiere decir que sea el Estado su titular, pero en tanto representa a la sociedad, es preciso que respete, proteja y promueva por su esencialidad. Así, es nulo el contrato, (por el interés público), que disponga de la dignidad de la persona aun cuando lo firme su titular, del mismo modo, el que disponga de su libertad, (esclavitud), o disponga la vida. De este modo, la intervención de su propio titular, como del Estado, en cada uno de estos bienes, solo puede ser limitable de manera excepcional, pero también el paternalismo ejercido con base a esa obligación, no puede llegar a extremos donde afecte de manera desproporcionada los derechos de la misma persona que protege. El Estado protege la libertad de las personas, pero somete a cárcel a quien afecte derechos ajenos, protege la vida de las personas, pero no podría tener desprecio del dolor **extremo** del portador de esa vida, al punto de impedirle acabar su dolor, acabando su vida.

- Jurisprudencia la casuística de este delito, de donde señalábamos que podrían surgir varias hipótesis; la primera que nunca o casi nunca se comete este delito, lo que significaría que el tipo penal es innecesario, pues no tiene sentido sancionar algo que no ocurre; otra hipótesis es que el tipo penal sea suficientemente disuasivo, lo cual es poco probable, pues en delitos cuyas penas son mucho mayores, la disuasión es irrelevante si existen incentivos contrarios. La tercera hipótesis es que existiría un número de delitos que no generan jurisprudencia formal, porque concluyen en las etapas básicas del proceso, como el principio de oportunidad, hipótesis que es más factible en tanto, la familia podría acceder fácilmente a un acuerdo de reparación civil y que la pena señalada para el delito lo permite, pero ello aparentemente es también poco frecuente, (Se corrobora de averiguaciones realizadas por el suscrito), finalmente, es más probable que exista un número no contabilizado de este delito, conocido como criptanasia o criptotanasia, que queda dentro de la familia o en las instalaciones de hospitales, lo cual podría ser más bien peligroso, pues no es posible probar si realmente existe una petición de la persona enferma o el pedido se da en situaciones en las que podría estar afectada la voluntad o la expresión de voluntad.
- 166. De lo expuesto podemos concluir que; a) La tipificación, técnicamente y principistamente, no es idónea, en tanto existe contradicción con otros derechos fundamentales; asimismo, la codificación precedente solo sancionaba esta figura cuando el móvil era egoísta, lo que contradice la tendencia despenalizadora en la jurisprudencia internacional, sin que hubiera una motivación fáctica, (muchos casos o delitos) o teórica que, sostenga la medida; considerando que, al sancionar se ha sacrificado otros bienes jurídicos, (dignidad, autonomía), para proteger el bien jurídico vida, frente a la solicitud de su titular que se encuentra en una situación de salud extrema y dolorosa; consideraciones que permiten señalar que esta intervención no es del todo idónea.
- 167. Es preciso añadir además que, en cuanto a la idoneidad, el tipo penal es por demás impreciso; así, pone como sujeto pasivo a la persona al enfermo incurable, categoría discutible pues son incurables numerosas enfermedades no necesariamente mortales, (Hipertensión, diabetes, etc.) que, asimismo, es una contradicción considerar sujeto pasivo a quien realiza una actividad, esto es, realizar la petición expresa y consciente, lo que lo convierte en sujeto activo/pasivo. Aun cuando el verbo rector del delito es *matar*, en la petición expresa, está implícito el acto *suicida*, que es matarse a sí mismo.

- 168. **Necesidad**. Este sub principio de necesidad, exige examinar si existe algún medio alternativo disponible que permita alcanzar la misma finalidad, en la misma medida, pero con una restricción menor para el derecho afectado. Nuevamente considerando el bien jurídico, vida, debe pensarse que el Estado tiene varias formas de intervención además de la legislación penal, esto es, en qué otra vía puede ser más razonable o menos perjudicial, su regulación, como ocurre en otros países, donde al suicidio asistido es legal, siempre que su ejecución se haga bajo mecanismos y garantías del propio Estado.
- 169. El Estado, en efecto tiene la obligación de proteger la vida de la persona, incluso contra la voluntad de su titular. Así, en el caso de las personas con depresión, que presentan riesgo suicida, debe acudírseles con tratamientos preventivos, con un sistema de soporte y no es posible admitirse una petición de ellas.
- 170. Además de la despenalización de esta acción, encontramos que existen alternativas ala penalización, por medios no necesariamente disuasivos o de castigo; tales como un buen sistema de soporte médico de tratamiento paliativo del dolor, que aunada a la cultura social de respeto a la vida y temor de Dios, puede hacer que, muchos enfermos, inclusive en situación de solicitarlo, pueden estar dispuestos a soportar su agonía; de este modo, en caso de una despenalización legal, debería legislarse necesariamente junto con una normatividad que promueva el tratamiento paliativo, otra alternativa podría ser, una mayor limitación del tipo penal, esto es que solo se sancione el hecho ocurrido fuera del servicio de sanidad, es decir que esté prohibido hacerlo por cualquier persona a menos que sea un médico dentro de un establecimiento autorizado y con un protocolo adecuado.
- 171. De lo expuesto así, podemos decir que la sanción penal, además de ser poco eficiente, como señaláramos líneas atrás, existen alternativas a la ley penal para proteger la vida de la persona enferma aún en contra de su voluntad, (que debe darse en los casos de enfermedad mental, por ejemplo), antes que una medida extrema de sacrificio de otros bienes jurídicos igual o más importantes que la propia vida, dentro de nuestro sistema de derechos fundamentales.
- 172. **Proporcionalidad en sentido estricto**. Este último sub principio exige analizar los derechos y principios que han entrado en conflicto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor según las circunstancias específicas, y, por tanto, cuál de ellos prevalecerá sobre el otro y decidirá el caso.
- 173. La demanda ha fundamentado sus pretensiones en la afectación del derecho a la dignidad, primerísimo de los derechos considerados en nuestra constitución y en nuestro sistema jurídico en general, así como normas internacionales como la Carta Americana de Derechos Humanos en su artículo 11°, la Carta de la Organización de Naciones Unidas en su Preámbulo, la Declaración Universal de los Derechos el Hombre de 1948, entre muchas otras. Se han fundamentado asimismo derechos relacionados con la libertad o el libre desarrollo de la persona humana y la autonomía; frente a ello, el Código Penal tiene como bien jurídico protegido en el artículo 112° a la Vida de la persona humana, aún contra la voluntad de su titular.
- 174. La demandante sostiene así que, a partir los derechos enunciados, se puede construir la muerte digna, como un derecho con la categoría de *derecho fundamental*, exponiendo que, una vida biológica, sostenida más allá, no solo de la voluntad de su titular, sino de lo que humanamente es sostenida, como un goce, sino más bien con dolor, con tratos humillantes y crueles, a partir de una enfermedad incurable, discapacitante, degenerativa, progresiva e irreversible, es una vida en al que la dignidad, como derecho ha sido afectada, surgiendo con ello, la necesidad de hacer uso de su derecho a la autonomía y del libre desarrollo de la persona, para poner fin a ese sufrimiento, como un acto de control de su propia vida; lo que se configura como una muerte digna, por lo que solicita la declaración judicial de este derecho.

- 175. Bajo ese fundamento, expone que su especial situación no le permitiría, además hacer uso de su derecho por sí misma, esto es que no le sería posible poner fin a su vida, (mediante el suicidio), pues la enfermedad la ha postrado en una situación de dependencia que siendo progresiva, hará que se haga más dependiente todavía, al punto que necesitaría de la asistencia de un tercero, para ese acto final; empero, lo requerido está penado en nuestro sistema penal, lo que podría ser suficientemente disuasivo para no poder acceder a esa ayuda, además que, ella misma no quisiera que nadie resulte afectado en sus derechos, con la comisión de un delito; por lo que solicita la inaplicación del delito, a efectos de acceder a esa ayuda, cuando así lo considere, pues ello también sería parte de su derecho.
- 176. En el desarrollo de esta sentencia, hemos, tomado posición respecto de estos fundamentos y concretamente, respecto de la muerte digna. Sostenemos así que, en efecto, la dignidad es un derecho fundamental de primerísimo orden, reconocido también en casi todos los sistemas jurídicos del mundo y que, puede anteponerse al derecho a la vida inclusive, si se considera que el derecho a la vida humana tiene límites, establecidos en la propia ley, mientras que la dignidad, es un derecho que no debería tener límites aceptables en el derecho; sin embargo, no es posible sostener que uno sea excluyente del otro, pues la vida biológica es base para el nacimiento del derecho a la dignidad, aun cuando la dignidad pudiera extenderse hasta más allá de su existencia biológica. Asimismo, consideramos que la dignidad, como derecho, se ha tomado principalmente desde la óptica de la razón, sin embargo, este derecho, es tan inherente al ser humano que son tan dignos aquellos que poseen la razón, como aquellos que la han visto afectada, por alguna discapacidad; fundamento que es recogido por la Convención de los derechos de las personas con discapacidad; no sin reconocer que la razón, es la medida o referencia del uso del derecho a la dignidad, la autonomía, la libertad y muchos otros derechos, pues solo en el momento que se es consciente de todo ello, puede el ser humano hacer uso total y efectivo de estos derechos, pero que debe promoverse el uso y defensa de la autonomía, también de las personas con discapacidad. Precisamos que, en el caso de Ana Estrada, debe considerarse su dignidad y su derecho, más allá del uso que pueda tener de ella, esto es que, seguirá siendo digna para todo efecto en nuestra sociedad y el Estado, más allá de su discapacidad y aún de la eventual pérdida de su raciocinio. Pero, en la medida que, su razón, es el referente o medida de sus derechos, debe reconocerse también su autonomía y su autopercepción de su dignidad, pues la dignidad, si bien es inherente a la persona; desde el derecho y desde el respeto de la sociedad; es también un bien que debe ser percibido por la propia persona que, debe ser dirigido por ella misma para que realmente exista. Así, la discapacidad y el sufrimiento por causa de la enfermedad y la discapacidad puede afectar el derecho a la dignidad, pero solo en su faz de la autopercepción, más no en la faz externa; por consiguiente; debe existir un espacio de disposición de su titular, en uso de su libertad fáctica y jurídica. El Estado, en el caso del suicidio, si bien tiene el deber de protección del bien jurídico; vida, aun en contra de la voluntad de su titular, sin embargo, no puede perseguir a su propio titular, en caso afecte su propia vida, por una cuestión puramente práctica, si logró su cometido, de morir; pero tampoco lo hace, ante el intento fallido de suicidarse; no solo por una cuestión de política criminal, sino porque debe respetar en ese extremo la autonomía de la persona humana y porque no hay afectación directa de bienes de terceros. En el caso de la muerte asistida, existiendo una causal distinta al suicidio puro, que es el principio de solidaridad con el dolor ajeno en casos extremos, como el que nos ocupa, esa libertad fáctica pasa a ser un derecho que permite la limitación de esa obligación de protección del Estado, un límite también a su legitimidad para perseguir el delito y una obligación de viabilizar, dentro de un sistema de garantías y atención prestacional.
- 177. Así, esta judicatura ha considerado que, existe un derecho a una vida digna y consecuentemente a una muerte digna; sin embargo, no puede considerarse un derecho fundamental. El suicidio, no es un derecho,

es más bien una libertad fáctica. La muerte digna, es un derecho, es evidente que puede derivarse del propio derecho a la dignidad; pero, siendo un derecho derivado, que asimismo su nacimiento está supeditado al nacimiento de la vida misma, que no es un bien jurídico absolutamente disponible, que configurado como lo ha expuesto por la propia demandante y como lo entiende esta judicatura, tiene límites intrínsecos y que en gran parte de los casos, el Estado está obligado a proteger este derecho, pero no a promoverlo; debe considerarse que el derecho a la muerte digna, sin ser un derecho fundamental, da lugar a que exista una excepción legítima, de no punibilidad, bajo ciertas condiciones, de la protección estatal de la vida.

- 178. Así, bajo el análisis del sub principio de **proporcionalidad strictu sensu**, la muerte digna, no es una eutanasia pura, no es un derecho fundamental, en la medida de otros derechos, como la propia dignidad, la libertad, la vida, entre otros que son esenciales, inviolables, reconocidos universalmente y consagrados en el caso de nuestra Constitución de forma expresa o que pueden configurarse por su esencialidad. Un derecho fundamental debe ser protegido y promovido por el Estado. La muerte digna es un derecho derivado de la dignidad; derivado a su vez de la fase interna de autopercepción de la persona humana, a partir del uso de su decisión autónoma, como tal debe ser protegida, pero no podría ser promovida, en tanto que podría afectar la libertad de ejercerla, cuanto por que se genera un conflicto con su deber de proteger la vida. El derecho a la dignidad, debe entenderse desde su faz de no ser víctima de tratos crueles e inhumanos y del uso de su libertad, en situaciones en que la libertad física puede estar afectada por la enfermedad, incurable, degenerativa, progresiva, en situación terminal, e irreversible, como la concreta situación que devendría del agravamiento progresivo de la condición de la beneficiara de esta demanda, doña Ana Estrada Ugarte, situación que permitiría, considerar que la intervención del Estado mediante el tipo penal del artículo 112 del Código Penal es, en su caso, excesivo, no es proporcional al derecho que protege, pues afecta derechos fundamentales de esta persona, por lo que debería inaplicarse, siempre que sea el mismo Estado, el que garantice que no se suprimirá la obligación genérica de proteger la vida humana, por lo que deberá hacerse, siempre que se cumpla determinado protocolo para su determinación y ejecución.
- 179. Así, se tiene que el **sujeto activo** del delito de homicidio piadoso, regulado en el artículo 112° del Código Penal, es **cualquier persona** que mata a una persona, teniendo como móvil la compasión o piedad, de quien se lo solicita. Es preciso, empero, desagregar al sujeto activo, pues no es lo mismo que lo haga un familiar, que un tercero ajeno, un médico, ni que se haga en un contexto de eutanasia pura y menos de muerte digna. En el caso del médico que actúa en un contexto de ilegalidad, podría considerarse que la afectación es mayor, en tanto es garante de la salud y vida del sujeto activo/pasivo; el familiar podría tener intereses en conflicto y el tercero ajeno podría tener motivaciones distintas a la compasión.
- 180. Así, debe considerarse que, el acto realizado por cualquier persona, es ilegal, en tanto no garantiza la autenticidad y firmeza del pedido de la víctima, no se garantiza que exista un abuso, ni que se ejecute con un procedimiento no doloroso. De este modo, si el acto es ejecutado por *cualquier persona* la norma, aun cuando pudiera afectar el derecho de la persona enferma, podría seguir siendo constitucional, pues garantiza que no se abuse ni que exista un móvil egoísta.
- 181. Por el contrario; si se acredita, de manera previa y mediante un mecanismo o protocolo legal que garantice, la firmeza y autenticidad del pedido del sujeto activo/pasivo, debe considerarse que se acredita el derecho de este. Asimismo, si quien ejecuta actúa se ejecuta lo hace bajo la autoridad y control institucional y es además un profesional médico o un equipo médico, debe considerarse que se garantiza la ausencia de un móvil egoísta y la aplicación de la decisión de *muerte digna*, de manera que no sea dolorosa, (o que sea lo menos dolorosa y menos prolongada posible), a fin de que no afecte física ni psicológicamente, así como que se respete

la dignidad del sujeto activo/pasivo y de su familia. En este último caso y solo en este caso, podría considerarse que la muerte digna es constitucional y por tanto, es procedente y fundada la inaplicación de la norma penal.

Pretensiones subordinadas.

- 182. La demandante ha solicitado en el punto "C" de sus pretensiones que, se ordene al MINSA y EsSalud, respetar su decisión de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia; mediante la acción de un médico de suministrar de manera directa (oral o intravenosa), de un fármaco destinado poner fin a su vida, u otra intervención médica destinada a tal fin. En consecuencia se disponga a EsSalud, conformar de manera inmediata una Junta Médica interdisciplinaria que deberá iniciar sus funciones dentro de los 7 días siguientes de consentida la resolución judicial, para:
 - a) La elaboración de un plan que se aplicará en la fecha que la Señora Ana Estrada decida el cumplimiento de su muerte en condiciones dignas, a través de la eutanasia; lo que implica el tipo de procedimiento, el proceso de acompañamiento a la paciente y a su familia, antes y después del acto final, b) Un protocolo de ejecución del procedimiento de ejecución propiamente dicho que especifique los aspectos asistenciales y técnicos de la decisión tomada y la designación de los profesionales médicos que se encargaran de la ejecución de la eutanasia, c)Brindar condiciones administrativas, prestacionales y sanitarias para el ejercicio del mismo acto.

Este plan y protocolo, deberá ser aprobado por otra Comisión Interdisciplinaria del MINSA.

Respecto de estos puntos, habiéndose considerado que el procedimiento de Muerte digna, es un derecho; genera una excepción legítima, bajo ciertas condiciones, de la protección estatal de la vida y que el artículo 112 del Código Penal, en efecto, afecta derechos fundamentales, tal como está fundamentado; en consecuencia, es razonable que se estime la pretensión. Asimismo, se tiene presente que EsSalud es la institución que está obligada a otorgar el servicio prestacional de salud a la asegurada Ana Estrada Ugarte, cumple con los requisitos de **institucionalidad** necesarios para excluir la posibilidad de un móvil egoísta y puede conformar médicos que cumplan tal finalidad. Asimismo, debe considerarse que, si bien la institución puede designar médicos para actos médicos comunes, siendo este uno de carácter especial, es preciso que la aceptación del médico o médicos, no tenga el carácter obligatorio, que los nombres de los mismos sean reservados, tanto de quienes lo acepten como de quienes lo rechacen, salvo que los propios médicos que decidan aceptar lo autoricen.

Asimismo, se tiene claro que, el Ministerio de Salud es el órgano estatal que tiene a su cargo la protección de la salud y la vida de los ciudadanos, así como de las políticas generales; por esta razón, es la instancia que dirige, aprueba o elabora directivas, políticas y planes sectoriales y específicos; como así lo ha señalado la Procuraduría, por lo que es esta la institución que debe aprobar el plan y protocolo de cumplimiento de los derechos de la ciudadana Ana Estrada Ugarte. La Procuraduría ha señalado, sin embargo que, no existiendo una ley que señale la legalidad del procedimiento de eutanasia, no podría elaborar planes, directivas u otros documentos; empero, esta judicatura ha sustentado que, de acuerdo a la interpretación de la Constitución y demás derechos fundamentales invocados, existe la necesidad de inaplicación excepcional del artículo 112° del Código Penal, para que no se afecten derechos fundamentales de la ciudadana y se cumpla con su derecho en particular y, que existe el derecho de la misma a que pueda ejercer este acto en uso de su autonomía; en consecuencia, tanto el Ministerio de Salud, como EsSalud, están obligadas a cumplir con sus propios fines y con el derecho de los ciudadanos y sus pacientes, siendo que es elemento central del derecho a la dignidad, el no ser sometido a tratos crueles e inhumanos, aspecto que ha sido acogido en esta sentencia,

para interpretar la existencia tanto del derecho de la ciudadana, como la necesidad de su cumplimiento por medio de sus instituciones.

Por estos fundamentos, el 11° Juzgado Constitucional de Lima, con sub especialidad en asuntos tributarios, aduaneros e Indecopi; con las facultades conferidas en la Constitución Política del Perú, RESUELVE: Declarar **FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA** interpuesta por la Defensoría del Pueblo, en beneficio de doña Ana Estrada Ugarte, contra el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud del Perú, EsSalud, al considerarse afectados los derechos a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de su personalidad y de la amenaza de no sufrir tratos crueles e inhumanos. En consecuencia, consentidaque sea la sentencia; se disponeque:

- 1. Se inaplique el artículo 112° del Código Penal vigente, para el caso de doña Ana Estrada Ugarte; por lo que los sujetos activos, no podrán ser procesados, siempre que los actos tendientes a su muerte en condiciones dignas, se practiquen de manera institucional y sujeta al control de su legalidad, en el tiempo y oportunidad que lo especifique; en tanto ella, no puede hacerlo por sí misma.
- 2. Se ordene al Ministerio de Salud y a EsSalud, a) respetar la decisión de doña Ana Estrada Ugarte, de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia; mediante la acción de un médico de suministrar de manera directa (oral o intravenosa), un fármaco destinado a poner fin a su vida, u otra intervención médica destinada a tal fin; b) Ambas instituciones independientemente, deberán conformar sendas Comisiones Médicas interdisciplinarias, con reserva de la identidad de los médicos y con respeto de su objeción de conciencia, si fuere el caso, en un plazo de 07 días; precisándose que; EsSalud deberá formar dos Comisiones, siendo que la primera tendrá la finalidad de elaborar un plan que especifique los aspectos asistenciales y técnicos de la decisión tomada y un protocolo de cumplimiento de su derecho a la muerte digna y otra Comisión que cumpla con practicar la eutanasia propiamente dicha. El Ministerio de Salud formará una Comisión para que apruebe el plan que especifique los aspectos asistenciales y técnicos, elaborados por la Comisión de EsSalud.
- 3. EsSalud deberá brindar todas las condiciones administrativas, prestacionales y sanitarias para el ejercicio del derecho a la muerte en condiciones dignas de la Sra. Ana Estrada Ugarte a través del procedimiento de la eutanasia, lo que deberá ejecutarse dentro de los diez días hábiles contados a partir del momento o fecha en que ella manifieste su voluntad de poner fin a su vida.
- 4. La Comisión Médica Interdisciplinaria de EsSalud, que elabore el plan y el protocolo, deberá presentar con su informe, en el plazo de 30 días después de su formalización, ante la Comisión Médica del Ministerio de Salud, la que procederá a su aprobación, en el plazo de 15 días. En caso de desaprobación, deberá otorgar un plazo adicional de 15 días y cumplido que sea el plazo, volverá a someterse a revisión de la Comisión del Ministerio de Salud. En caso de no satisfacer el segundo informe, solo podrá integrarla, o corregirla, pero no podrá volver a desaprobarla ni anularla. Con lo resuelto por la Comisión del Ministerio de Salud, deberá informase al Juzgado de su cumplimiento.
- 5. Se declara **IMPROCEDENTE**, la pretensión de que se ordene al Ministerio de Salud que cumpla con emitir una Directiva que regule el procedimiento médico para la aplicación de la eutanasia para situaciones similares a las de la Sra. Ana Estrada Ugarte, del derecho fundamental a la muerte en condiciones dignas y derechos conexos.